



ANALES

DE LA

SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

Editor: ERNESTO J. NICOLAU
Secretario de Publicidad

AÑO UNICO: {

Panamá, 31 de Agosto de 1946.

} Nº 3

DIGNATARIOS DE LA SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

Presidente *H. C. Rosendo Jurado*
Primer Vice- Presidente *H. C. Harmodio Arosemena F.*
Segundo Vice- Presidente *H. C. Gumersinda Páez*
Secretario General *Lic. D. H. Turner*

COMISIONES PERMANENTES

De Estudio del Proyecto de Constitución

José Isaac Fábrega
Agustín Ferrari
Felipe O. Pérez
Harmodio Arosemena F.
Didacio Silvera
Abilio Bellido
Jacinto López y León
Esther Neira de Calvo
Diógenes de la Rosa

Max Arosemena
Antonio J. Sucre
Jacinto López y León
Luis E. García de Paredes
José A. Bröüwer

De las Investigaciones

Antonio J. Sucre
Mario Galindo T.
Max Arosemena
Jorge Ramírez Duque
Felipe O. Pérez

De Reglamento

Abilio Bellido
Gumersinda Páez
J. M. Varela
Jacinto López y León
Homero Ayala P.

De Revisiones

Abilio Bellido
José Isaac Fábrega
José de Obaldía Jované
Diógenes de la Rosa
Jacinto López y León

De Credenciales

José de Obaldía Jované
Nicolás Sagel
Julio E. Vargas
Alberto Ortega
Gil Blas Tejeira

De Estilo

Abilio Bellido
José Isaac Fábrega
José de Obaldía Jované
Diógenes de la Rosa
Jacinto López y León

Del Mensaje Presidencial

Agustín Ferrari
Abilio Bellido

COMISIONES TRANSITORIAS

De Investigaciones del "Malocón Balboa"

Homero Ayala P.
Diógenes de la Rosa
Gregorio de los Ríos
Waldo Arrocha G.
Eric Delvalle

De Investigación de Lotes del Ferrocarril

Alberto Rivera L.
Dominador Bazán
Gumersinda Páez
E. García de Paredes
J. M. Varela

El Honorable Arosemena dijo: Pero no es mala la ley, sino los que la aplican. No nos queda más que nombrar buenos alcaldes y buenos corregidores y dejar el artículo como está.

El Honorable López y León dijo: Aquí tenemos una forma que no sé si encajaría, que la trae la Constitución de Cuba. Dice así:

(lee) Página 415, artículo 34 de la Constitución de Cuba.

El Honorable Fábrega dijo: No estoy de acuerdo con la sugestión hecha si mal no recuerdo por el Honorable De la Rosa en el sentido de que se suprima la facultad para efectuar visitas domiciliarias con motivo de investigar si se cumplen o no, los reglamentos sanitarios. Dentro de la vida moderna, esa ingerencia de la Sanidad en la residencia es indispensable y creo que nosotros no debemos echar sobre nuestros hombros la responsabilidad que implica suprimirlo. Considero que, a lo sumo, se deben variar los términos de redacción del aparte del artículo 29 con el objeto de hacer más preciso el concepto de que únicamente puedan tener la ingerencia de que vengo tratando, las autoridades sanitarias para fines exclusivamente sanitarios. (El Honorable de la Rosa, presentó al efecto modificación que es aprobada).

El Honorable Bellido dijo: Me refiero a los cadáveres que pasan horas y horas en las carreteras y no aparece ningún juez.

El Honorable Silvera dijo: Yo quisiera ayudar al Honorable de la Rosa en la tortura que tiene evitando que se metan en los domicilios y me parece que la fórmula sería esta: Circunscribir únicamente el derecho de investigación a las autoridades del Departamento de Sanidad. Y lo he puesto así: (lee). Aquí se circunscribe únicamente al Departamento de Sanidad y no a las autoridades administrativas.

El Honorable Fábrega dijo: Los corregidores no tienen funciones sanitarias? Porque el señor De la Rosa a lo que le teme es a los corregidores. Esto solo lo corrige la escuela, la cultura.

El Honorable de la Rosa se refirió a las crueldades de los corregidores.

El Secretario observó que esto sería demasiado detallado.

El Honorable Fábrega dijo que aquí, en todas partes, había autoridades sanitarias y que en otros países esas funciones eran ejercidas por corregidores y alcaldes.

Se lee el artículo 30.

FUE APROBADO.

Leído el artículo 31.

El Honorable Silvera dijo: Este es otro artículo en el que resulta lo mismo que con el otro que modifiqué. Estando yo de Juez Superior me

pusieron quejas de que habían metido en la Macarela y habían torturado a la gente en la Cárcel Modelo. -

Debemos crear una sanción a los que infrinjan las disposiciones referentes a esto, porque esta cuestión es muy elástica. Esto no debe continuar así. Es qué aquí hay castigos crueles.

El Presidente dijo: Entiendo que debe nombrarse hombres preparados para manejar esa cárcel y no seguir imponiendo sanciones en la misma Constitución. Entiendo que ha sido puesta a órdenes de un señor llamado Faúndez.

El Honorable Fábrega dijo: Yo lo que pienso es que si ponemos que se establezca sanción cuando hay castigo cruel, hay que poner lo que significa castigo cruel.

El Honorable De la Rosa dijo: Yo estaba pensando en la supresión de la frase "no de castigo cruel". Las cárceles, lugares de regeneración o de seguridad, no son lugares de castigo. Eso de castigo cruel, atrae entonces la discriminación de abolida; puesta a un lado.

El Presidente dijo que se le debería quitar "no de castigo cruel".

El Honorable Fábrega dijo: Estoy de acuerdo con el Convencional Arosemena en que se suprima la palabra "cruel" del aparte de ese artículo que dice: "Las cárceles son lugares de seguridad y regeneración y no de castigo cruel". Más todavía: Creo que el artículo tendría sentido completo al eliminar toda la expresión "castigo cruel" por corresponder dicha expresión a un concepto absolutamente anacrónico sobre el motivo de la sanción penal. De tal manera que estoy de acuerdo con esta sugestión; el artículo quedaría así: "Las cárceles son lugares de seguridad y regeneración; por lo tanto, es prohibido toda severidad que no sea necesaria para la custodia y enmienda de los presos".

En discusión la modificación, FUE APROBADA.

Se lee el artículo 32.

El Presidente preguntó: El artículo 29 no habla de papeles también?

El Honorable Fábrega le respondió que éste trataba de la correspondencia.

FUE APROBADO.

Se lee el artículo 33.

El Honorable Tejeira sugirió se suprimiera la palabra destierro en lo que se refiere a los panameños.

El Honorable Silvera manifestó que no se "deporta" a los panameños, y el Convencional Fábrega también expresó lo mismo.

El Honorable Fábrega dijo: Creo que sí, que la idea de destierro es echar fuera de la propia tierra. Yo sé que el sentido normal de la pala-

bra es así, como usted Honorable Tejeira está diciéndolo, pero usted sabe tanto o mejor que yo, que a veces se encuentra uno con sorpresas enormes. Busquemos en el diccionario la palabra "destierro".

La Honorable Neira de Calvo dijo: Sugiero que se diga "no habrá pena de muerte ni de destierro".

En discusión la sugerencia, de la Honorable de Calvo.

FUE APROBADA.

Leído el artículo 34.

El Honorable Fábrega dijo: He oído expresar en esta reunión que en el artículo 33, donde se dice que "tampoco podrá imponerse la pena de destierro a los panameños" debe suprimirse la expresión "a los panameños" porque el concepto destierro implica la separación de un nacional de su propia tierra. Acepto que es esta la acepción general y corriente que tiene la palabra destierro. Pero como el léxico ofrece a veces sorpresas, es conveniente, en mi concepto y así lo sugiero a la Comisión, que se deje este punto hasta mañana para estudiar debidamente cuál es el verdadero alcance de la palabra destierro. Pudiera suceder que el destierro fuese no solo para los nacionales de un país, sino también para los extranjeros; y en este caso al suprimir la expresión "a los panameños", resultaría que, contra nuestra moral, implícitamente impediríamos que se mantenga el recurso social de la deportación que en muchos casos es urgente y de verdadera eficacia.

(Se convino en posponer hasta la sesión siguiente el punto relacionado con el destierro de los panameños).

El Honorable Silvera dijo: Sólo podrán ser "penados", porque esto es una pena y "sanción" puede ser de otra índole.

El Honorable de la Rosa dijo: Penados es mejor, porque la palabra sanción comprende lo jurídico, lo ético, lo satírico y lo social.

FUE APROBADO.

Leído el artículo 35.

El Secretario manifestó que el Honorable Tejeira quería sugerir una corrección gramatical.

El Honorable Tejeira leyó el artículo y dijo que había en él una redundancia.

El Honorable Fábrega dijo: Yo quisiera preguntarle a mis compañeros de Comisión, sobre todo a los que se dedican a la abogacía, si ellos consideran que aquí está claro, que se puede mantener la revisión de los procesos en los casos taxativamente mencionados por la ley, dejando desde luego el artículo como está (lee el art. 35).

Lo que me preocupa es que se puedan valer de una falta de claridad, para sostener una tesis

que sea perjudicial a los intereses de la República. Esto no entorpece el recurso de revisión que no entraña un doble juzgamiento. Yo pondría "le falte al respeto mientras desempeña las funciones de su cargo". (lee el art. 36).

El Presidente dijo que se dejara constancia en el acta de que esta disposición se toma pudiéndose rectificar en el curso de revisión, ya que dicho recurso no entraña un doble juzgamiento.

FUE APROBADA la modificación del Honorable Tejeira.

Fué leído el artículo 36.

El Honorable Tejeira dijo: Yo cambiaría la expresión "en el acto" porque me parece que sobra.

El Honorable Fábrega dijo: Me parece que debiera decir mejor: "falten al respeto en el desempeño" y luego "mientras desempeñen las funciones".

El Honorable Silvera dijo: Hace pocos días me decía mi hijo que un Teniente de la Policía le había manifestado que los Jefes de Policía les habían dado órdenes a los capitanes y oficiales de policía que no atendieran ninguna orden a ningún jefe judicial ni ninguna autoridad administrativa mientras no estuviera en su oficina. Yo se lo dije al Ministro Sucre y me dijo que le parecía una barbaridad. Porque según el criterio de estos caballeros, el Juez no es Juez sino cuando está en su oficina y cuando está en la calle no es nada. Y va a resultar que el Ministro Sucre no va a ser Ministro mientras no esté en su oficina.

FUE APROBADO el acápite 1º del Artículo 36.

FUE APROBADO el acápite 2º.

Se lee el acápite 3º.

FUE APROBADO el acápite 3º.

Se lee el artículo 37.

El Honorable de la Rosa dijo: Esto no está en contradicción con lo discutido en el artículo 26?

El Honorable Fábrega dijo: Si se le quita la autoridad al agente llegaríamos a la anarquía.

Se pidió la reconsideración del 26, y se le quitó la palabra "agentes".

FUE APROBADO.

El artículo 37, con la modificación del Ejecutivo, fué aprobado.

FUE APROBADO el artículo 38.

Se clausuró la sesión a las 6:22 p.m.

El Presidente,

HARMODIO AROSEMENA F.

El Secretario,

D. H. Turner.

A C T A

de la décima sesión de la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente.

A las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde del día tres de Agosto de mil novecientos cuarenta y cinco, se reunió la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución, integrada por los siguientes comisionados que contestaron a lista así: Harmodio Arósemena F., Presidente; Abilio Bellido, Esther Neira de Calvo, Diógenes de la Rosa, José Isaac Fábrega, Jacinto López y León, Felipe O. Pérez y Didacio Silvera. Dejó de concurrir el H.C. Agustín Ferrari con excusa. De fuera del seno de la Comisión estuvieron presentes los Honorables Homero Ayala P. y Gil Blas Tejeira.

1o. El H.C. de la Rosa pide que se reconsidere el Artículo 29 del Proyecto de Constitución y observa que en la forma como quedó redactado no es posible hacer que se cumplan las disposiciones del Decreto sobre Previsión Social; y al efecto, presenta la siguiente proposición:

“Los funcionarios de previsión y sanidad podrán practicar, previo aviso, visitas domiciliarias o inspeccionar los sitios de trabajo con el fin de velar por el cumplimiento de las leyes sociales y de salud pública”.

Esta modificación fue sometida a discusión y aprobada.

2o. El H.C. de la Rosa pide la palabra para proponer se reconsidere el artículo 25 del Proyecto y se le introduzca la siguiente adición en el primer párrafo:

“Todos los panameños y extranjeros son iguales ante la ley. Por lo tanto, no habrá fueros o privilegios personales ni distingos por razón de raza, clase social, sexo, religión o ideas políticas”.

Esta moción sustentada por su autor fue aprobada, después de leído el artículo tal como quedó, en la sesión anterior a petición de la H.C. Neira de Calvo.

El H.C. Fábrega pide la palabra para proponer que se agregue al artículo 33 lo dispuesto en el artículo 38 del Proyecto, y la comisionada Neira de Calvo que se sustituya el término “destierro” por el de “expatriación”.

“No habrá pena de muerte, ni de expatriación, ni de confiscación de bienes”.

Puesta en discusión la proposición del H.C. Gábrega adicionada por la H.C. Neira de Calvo, resultó aprobada.

Hace uso de la palabra el H.C. Fábrega para pedir que se reconsidere la adición introducida al artículo 26 del Proyecto por el H.C. Silvera en la sesión anterior y solicita una explicación sobre ella el mismo comisionado.

El H.C. Silvera da su explicación.

El H.C. Fábrega manifiesta que considera vaga la adición. Lee el texto primitivo con la adición introducida por el H.C. Silvera, que dice:

“Nadie podrá ser detenido por más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente para juzgarlo. La violación de este precepto, por las autoridades de policía les ocasiona la pérdida del empleo, sin perjuicio de las demás responsabilidades que señalen las Leyes. En ningún caso podrá haber detención, prisión o arresto por deudas u obligaciones puramente civiles”.

Considera que esta disposición limita la aplicación de la pena a las autoridades policivas y exime de responsabilidad a los alcaldes y al Ministro de Gobierno, y que ella debe referirse a las autoridades en general y no solamente a las autoridades de la policía.

El H.C. Silvera considera que el H.C. Fábrega le da más alcance a la proposición del que él esperaba darle. Dice que al presentar su proposición su intención fue la de evitar que las autoridades de la policía violaran el precepto de poner a las personas a órdenes de la autoridad competente en un plazo mayor de 24 horas después de la detención.

El H.C. Fábrega pregunta al H.C. Silvera por qué razón deben quedar otras autoridades sin sanción.

El H.C. Silvera manifiesta que él simplemente pensaba en la sanción que debía aplicárseles a las autoridades que retuvieran a personas bajo arresto por más de 24 horas sin ponerlas a las órdenes de la autoridad competente.

El H.C. Fábrega observa que de la manera como está redactada la adición de Silvera el que viola el precepto pierde el empleo y en cambio el que ordena la violación no. Considera que, en lugar de referirse a las autoridades de la policía, es preferible decir: “Los funcionarios públicos”.

El H.C. López y León pide la palabra y presenta la siguiente modificación a la adición de Silvera

“El funcionario público que viole este precepto tendrá como sanción la pérdida inmediata del empleo, sin perjuicio de las demás penas que establezcan las leyes”.

El H.C. Fábrega se manifiesta de acuerdo con la modificación del H.C. López y León.

Sometida a discusión la modificación del H.C. López y León, resultó aprobada.

El Presidente ordenó al Secretario la lectura del artículo 39 del Proyecto, que dice:

“Artículo 39. Es libre la profesión de todas las religiones así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público”.

E inmediatamente después de leído se abrió la discusión del mismo.

El c. de la Rosa pide la palabra y manifiesta que este artículo está de más. Dice que ningún artículo debe ser introducido en la Constitución en el que aparezca que el Estado se preocupa por la Religión. Se refiere a los conceptos del Dr. Tulio Enrique Tascón, quien considera que introducir un artículo de esta naturaleza en la Constitución es contrario al Derecho Público. Lee los artículos de las Constituciones Colombianas pertinentes y propone un artículo cuyo texto dice:

"Se garantiza la libertad de conciencia, así como la libre profesión, difusión y práctica de toda religión que no sea contraria a la moral social o al orden público, ni predique ideas o inculque sentimientos adversos al mantenimiento y desarrollo de las instituciones democráticas y al respeto debido a las leyes y funcionarios del Estado.

Parágrafo: Las confesiones, sectas y organizaciones religiosas se regirán por la ley que regule la formación y reconocimiento de las personas jurídicas".

Considera que toda religión tiene tendencias totalitarias que la ponen al borde de conflictos con el Estado, y que, es mejor separarla completamente del Estado. Y que las asociaciones religiosas deben regirse por las leyes que rigen las demás personas jurídicas. Observa que él propone el artículo en caso que se decida legislar sobre la materia, pero que considera que esto no debe hacerse.

El Presidente advierte a los miembros de la Comisión que hay dos proposiciones: 1a. Si deben incluirse en la Constitución disposiciones relacionadas con la religión, y 2a. Si se legisla en la forma propuesta por el H.C. de la Rosa. Anuncia que se abre la discusión de la primera proposición.

El H.C. López y León manifiesta que a su juicio debe legislarse sobre la materia. Lee conceptos emitidos por el Dr. Santos al respecto cuando se discutía en Colombia la Constitución de 1936. Dice que en Panamá la mayoría de los habitantes son católicos y que la Constitución debe contener disposiciones que reflejen los sentimientos de esa mayoría.

El H.C. Bellido expresa su deseo de que se legisle sobre la materia. Dice que la mayoría de los panameños no son católicos; que debe tratarse del tema y acomodarlo a nuestra realidad nacional.

La H.C. Neira de Calvo estuvo de acuerdo también con que se legisle. Considera que la religión católica es una fuerza espiritual de gran influjo para la vida de nuestro pueblo, y que no podemos escapar a esta realidad. Advierte que el artículo propuesto por el H.C. de la Rosa debe ser considerado detenidamente.

El H.C. Pérez deja constancia de su manera de pensar. Refuta los argumentos del H.C. de la Rosa y lee el artículo 124 de la Constitución Rusa en el cual se consagra la libertad religiosa. Opina que se debe legislar sobre la materia sin mencionar religión alguna, más o menos en la forma consagrada en el artículo 39 del proyecto. Observa que la relajación social obedece en gran parte a la ausencia de religión en el hogar.

El H.C. Fábrega se refiere al último censo, el cual muestra que el 66.4% de nuestro campesino es católico y el 92.7% de todos los panameños lo son igualmente. Dice que hace referencia al censo para demostrarle al H.C. Bellido que la mayoría de los panameños es católica.

El H.C. Bellido explica que, al expresar duda acerca de los sentimientos religiosos de los panameños, él simplemente quería observar que hay muchos panameños que se dicen católicos y no practican el credo de su religión.

El H.C. Fábrega manifiesta que es una medida liberal la de legislar sobre la religión. Combate el artículo del H.C. de la Rosa y dice que si la gran mayoría del país es católica y, por consiguiente, su moral es cristiana, el artículo debe continuar haciendo referencia a esa moral.

El H.C. de la Rosa pregunta al H.C. Fábrega si no es el liberalismo el que combate la religión.

El H.C. Fábrega contesta que las ideas cambian. Que el liberalismo luchó en sus inicios por un Estado fuerte y luego fue más laxo en su desarrollo, para volver ahora a una forma rígida con el intervencionismo de Estado. Considera que en todo caso la libertad de conciencia debe quedar garantizada. Que el liberalismo, por lo mismo que predica la libertad de conciencia, la adoptó en la Constitución desde 1904. Que los liberales de Colombia de 1936 hablan de la moral cristiana y prevén el caso de que se vulneren las reglas referentes a dicha moral y somete a los infractores a la sanción correspondiente.

El H.C. de la Rosa observa al H.C. Fábrega que él ha tomado como razones religiosas las que son meramente políticas. Las disposiciones de la Constitución Colombiana de 1936 sobre religión se adoptaron sólo como medidas políticas.

El H.C. Fábrega manifiesta que la medida fué tomada por respeto religioso y no como táctica política. El liberalismo y el conservatismo están unidos en cuanto a religión y, por lo tanto, no se puede decir que las disposiciones sobre religión fueron adoptadas como medidas políticas. Observa que la religión católica es parte de nuestra característica nacional y que no debe borrarse porque acabamos con nuestra nacionalidad. Considera que el principio antirreligioso es retrógrado. Hoy día hay quienes creen y quienes no creen, pero las tendencias antirreligiosas pasaron a la historia.

El H.C. de la Rosa dijo que no trataba de destruir la religión y que ni siquiera es anticlerical. Estima que la religión debe desaparecer, pero no cree en la política antirreligiosa.

La H.C. Neira de Calvo dice que ella no acusa al H.C. de la Rosa de querer destruir la religión, pero que, en su concepto, sí es necesario legislar sobre la cuestión religiosa. En todas las Constituciones que yo conozco se legisla sobre ella, en la de los Estados Unidos por ejemplo, es muy corto lo que se dice al respecto. La enmienda primera a la Constitución afirma: "El Congreso no podrá aprobar ninguna ley conducente al establecimiento de religión alguna, ni prohibir el libre ejercicio de ninguna de ellas."

El H.C. Fábrega dijo "cuando el marxismo se imponga, terminará la religión". Lee reproducción textual de los conceptos de Engels hecha por Strachey. Manifiesta el H.C. de la Rosa que debemos esperar a que se imponga el marxismo en Panamá para entonces asentir a la idea de proscribir la cuestión religiosa de la constitución.

El H.C. Silvera manifestó que, a su juicio, debe legislarse en forma general sin circunscribir el asunto a cuestiones exclusivamente católicas. Este artículo que trae el proyecto lo hemos heredado de Colombia donde ha encajado bien como una cuestión sentimental. Y no podemos traer aquí el caso de Colombia donde existe el concordato con la curia romana, donde ha habido épocas en que la República se ha consagrado al Corazón de Jesús.

Después de agotarse la discusión sobre si se debía o no legislar sobre materia religiosa, el Presidente ordenó a que se procediera a votación, y en efecto se llamó a lista y todos los comisionados presentes, con excepción del H.C. de la Rosa, votaron porque se legislara sobre la materia.

El H.C. de la Rosa pidió la palabra, pero, en vista de lo avanzado de la hora, el Presidente suspendió la sesión a las seis y cuarenta minutos de la tarde, quedando en uso de la palabra el H.C. de la Rosa.

El Presidente,

HARMODIO AROSEMENA F.

El Secretario,

D. H. Turner.

NARRACION DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION ENCARGADA DE ESTUDIAR EL PROYECTO DE CONSTITUCION EL DIA 3 DE AGOSTO DE 1945

(Presidencia del Honorable Convencional Dr. Harmodio Arosemena F.)

A las 4:45 pm., en el despacho de la Secretaría General de la Honorable Asamblea Constituyente se reunieron los miembros de la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución elabo-

orado por los Jurisconsultos Doctores Ricardo J. Alfaro, José D. Moscote y Eduardo Chiari.

El Presidente ordenó al Sr. Secretario pasar lista y respondieron a ella los siguientes Convencionales: Harmodio Arosemena F., Abilio Bellido, Esther Neira de Calvo, Diógenes de la Rosa, José Isaac Fábrega, Jacinto López y León, Felipe O. Pérez y Didacio Silvera. Dejó de concurrir el Honorable Agustín Ferrari con excusa. De fuera del seno de la Comisión estuvieron presentes los Honorables Homero Ayala P. y Gil Blas Tejeira.

El Honorable De la Rosa dijo: Quiero pedir que se reconsidere el artículo 29. Es por esto: yo estoy en la comisión que redacta el decreto de organización del Ministerio de Previsión. De acuerdo con artículo que yo mismo presenté, dentro de las atribuciones de los funcionarios del departamento de previsión está la de llegar a cualquier taller, fábrica o empresa para hacer que se cumplan los reglamentos de trabajo.

Me parece que para evitar, como ésta es materia tan delicada, que afecta tantos intereses, la posibilidad de que cualquiera pida la nulidad de ese decreto basándose en que no está acorde con la Constitución, el párrafo debe quedar así: "Los funcionarios de previsión y sanidad podrán practicar, previo aviso, visitas domiciliarias o inspeccionar los sitios de trabajo con el fin de velar por el cumplimiento de las leyes sociales y de salud pública".

Esta modificación fué sometida a discusión y aprobada.

El Honorable de la Rosa pide la palabra para proponer se reconsidere el artículo 25 del Proyecto y se le introduzca la siguiente adición en el primer párrafo: "Todos los panameños y extranjeros son iguales ante la ley. Por lo tanto, no habrá fueros o privilegios personales ni distingos por razón de raza, clase social, sexo, religión o ideas políticas".

Esta moción, sustentada por su autor, fué aprobada, después de leído el artículo tal como quedó en la sesión anterior, a petición de la Honorable Neira de Calvo.

El Honorable Fábrega dijo: Pido que regresemos al punto que estuvimos hablando sobre la pena de destierro; la palabra destierro es genérica completamente. Debe ponerse "expatriación". El artículo quedará así: "No habrá pena de muerte ni de expatriación". (Habla con el Honorable Tejeira en voz baja).

El Convencional Tejeira me hace una insinuación con respecto a que hay varios artículos que tratan de penas; me parece conveniente unirlos, o poner los artículos en una forma consecutiva. Podría quedar así: "No habrá pena de muerte ni de expatriación ni de confiscación de bienes". El artículo 38 queda suprimido por completo.

SUMARIO:

	PÁGINAS		PÁGINAS
ACTA de la novena sesión de la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente	3	ACTA de la décimosexta sesión celebrada por la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente	53
NARRACION de la sesión celebrada por la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución el día 19 de Agosto de 1945..	6	NARRACION de la sesión celebrada por la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución el día 21 de Agosto de 1945 ..	54
ACTA de la décima sesión de la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional	12	ACTA de la décimoséptima sesión celebrada por la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente	59
NARRACION de la sesión celebrada por la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución el día 3 de Agosto de 1945....	14	NARRACION de la sesión celebrada por la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución el día 22 de Agosto de 1945 ..	60
ACTA de la undécima sesión de la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente	20	ACTA de la décimo octava sesión celebrada por la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente	63
NARRACION de la sesión celebrada por la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución el día 6 de Agosto de 1945..	22	NARRACION de la sesión celebrada por la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución el día 23 de Agosto de 1945 ..	65
ACTA de la duodécima sesión de la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente	26	ACTA de la décimonovena sesión celebrada por la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente	67
NARRACION de la sesión celebrada por la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución el día 9 de Agosto de 1945..	27	NARRACION de la sesión celebrada por la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución el día 27 de Agosto de 1945 ..	68
ACTA de la decimo tercera sesión de la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente	30	ACTA de la vigésima sesión celebrada por la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente	79
NARRACION de la sesión celebrada por la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución el día 14 de Agosto de 1945 ..	32	NARRACION de la sesión celebrada por la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución el día 29 de Agosto de 1945 ..	79
ACTA de la décimo cuarta sesión celebrada por la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente	36	ACTA de la vigésima primera sesión celebrada por la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente ..	84
NARRACION de la sesión celebrada por la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución el día 16 de Agosto de 1945..	38	NARRACION de la sesión celebrada por la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución el día 30 de Agosto de 1945 ..	86
ACTA de la décimo quinta sesión celebrada por la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente	42	ACTA de la vigésima segunda sesión celebrada por la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente ..	89
NARRACION de la sesión celebrada por la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución el día 17 de Agosto de 1945 ..	43	NARRACION de la sesión celebrada por la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución el día 31 de Agosto de 1945 ..	92

ACTAS

ACTA

de la novena sesión de la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente.

A las cuatro y quince minutos de la tarde del día primero de Agosto de mil novecientos cuarenta y cinco, se reunió la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución, integrada por los siguientes comisionados que contestaron a lista así: Harmodio Arosemena F., Presidente; Abilio Bellido, Esther Neira de Calvo, Diógenes de la Rosa, José Isaac Fábrega, Agustín Ferrari, Jacinto López y León y Didacio Silvera. Dejó de concurrir el H.C. Felipe O. Pérez con excusa. De fuera del seno de la Comisión estuvieron presentes los Honorables Homero Ayala P., Ramón Jiménez, Gil Blas Tejeira, Luis E. García de Paredes y Gumersinda Pérez.

10.—El comisionado Fábrega manifestó que había preparado una serie de artículos respecto al Título en debate sobre nacionalidad y extranjería, que van del 11 al 18 y que sometía a la consideración de la Comisión sólo a título informativo o como referencia para que los Comisionados estudiasen y presentasen sus observaciones en una sesión posterior, que se fijó para el lunes seis de los corrientes.

Estos artículos dicen:

“Artículo 11.—La calidad de panameño se adquiere por nacimiento o por naturalización.

Artículo 12.—Son panameños por nacimiento:

a). Los nacidos en el territorio de la República, de padre o madre panameños cuyo idioma primario sea el castellano;

b). Los nacidos en el territorio de la República de padre o madre panameños cuyo idioma primario no sea el castellano, siempre que en cualquier momento, después de haber llegado a los veintiún años de edad, comprueben que poseen dicho idioma;

c). Los nacidos en territorio bajo la jurisdicción de la República de padres extranjeros, siempre que en cualquier momento, después de cumplidos los veintiún años de edad, llenen los siguientes requisitos: declaración de que desean poseer la calidad de panameños por nacimiento; declaración sobre la nacionalidad de sus padres, y renuncia expresa de esa nacionalidad y de toda otra que no sea la panameña y comprobación de que poseen el idioma castellano y nociones fundamentales de Historia y Educación Cívica panameñas;

d). Los nacidos en territorio nacional no sujeto a la jurisdicción panameña de padres extranjeros, siempre que dentro del año siguiente a su mayoría de edad llenen los mismos requisitos a que se refiere el aparte anterior;

e). Los nacidos fuera del territorio de la República, de padre o madre panameños cuyo idioma primario sea el castellano, desde el momento en que, después de haber cumplido los veintiún años, declaren que desean poseer la calidad de panameños por nacimiento y comprueben que han residido en el territorio de la República por lo menos diez años consecutivos; y

f). Los nacidos fuera del territorio de la República, de padre o madre panameños cuyo idioma primario no sea el castellano, desde el momento en que, después de haber llegado a los veintiún años de edad, declaren que desean poseer la calidad de panameños por nacimiento y llenen los siguientes requisitos: comprobación de que han residido por lo menos diez años consecutivos en el territorio de la República y de que hablan el idioma castellano; y comprobación de que han adquirido nociones fundamentales de Historia y Educación Cívica panameñas.

Artículo 13. Podrán ser panameños por naturalización:

a). Los extranjeros, solteros o casados, que hayan residido en el territorio de la República por cinco años, siempre que llenen los requisitos siguientes: declaración expresa de que renuncian a su nacionalidad de origen y a cualquier otra nacionalidad que no sea la panameña y comprobación de que poseen el idioma castellano y nociones fundamentales de Historia y Educación Cívica panameñas;

b). Los extranjeros que hayan residido en el territorio de la República por tres años, y tengan hijos nacidos en ésta, cuyo padre o madre sean panameños, y aquellos que tengan cónyuge panameño, siempre que llenen los mismos requisitos mencionados en el aparte anterior;

c). Los extranjeros que durante los tres años anteriores a su solicitud de naturalización se hayan dedicado a la agricultura en finca propia, situada en el territorio de la República, siempre que llenen los mismos requisitos mencionados en los apartes anteriores.

Artículo 14. Los colombianos que tomaron parte en el movimiento de independencia son panameños por ministerio de la Constitución, sin necesidad de carta de naturaleza.

Artículo 15. Conservarán su calidad de panameños por nacimiento los que la tenían bajo la vigencia de la Constitución de 1941. Pero si los declarados por dicha Constitución como panameños de nacimiento son hijos de padre y madre extranjeros, deberán ellos comprobar, dentro de los cinco años siguientes a la vigencia de la presente Constitución, que poseen el idioma Castellano y nociones fundamentales de Historia y Educación Cívica panameñas, requisito éste sin el cual perderán su nacionalidad una vez transcurrido el mencionado lapso. Y si son hijos de padre o madre panameños cuyo idioma primario no sea el Castellano deberán comprobar dentro de los cinco años siguientes a la vigencia de la presente Constitución, que poseen el idioma castellano, pues de lo contrario, perderán su nacionalidad una vez transcurrido el mencionado lapso.

Artículo 17. Conservarán su calidad de panameños por naturalización todos aquellos que la tenían bajo la vigencia de la Constitución de 1941. Pero todos ellos deberán dentro del término de cinco años, a partir de la fecha de entrar en vigencia la presente Constitución, comprobar que poseen el idioma Castellano y nociones fundamentales de Historia y Educación Cívica panameñas.

La Ley reglamentará lo relativo a los comprobantes de que tratan el presente artículo y los artículos 12, 13 y 15.

Artículo 18. Será obligación del Estado realizar por medio de planteles adecuados y de cualesquiera otros sistemas idóneos, una labor metódica y constante para la correspondiente incorporación de todos aquellos grupos e individuos que, habiendo nacido en la República de Panamá, no se encuentran sin embargo espiritualmente vinculados a la misma. Y será también su obligación proporcionar todas las facilidades de asimilación espiritual a aquellos elementos que se propongan obtener la nacionalidad panameña por naturalización".

2o. El Secretario Turner sugirió que estando toda la materia del Título II en discusión tan ligada entre sí, le parecía preferible suspender por entero el examen de la misma para continuarlo el lunes cuando se consideren las reformas propuestas por el H.C. Fábrega.

El Presidente puso en discusión la sugerencia y fue aprobada.

3o. Se abrió la discusión del Título III sobre derechos y deberes individuales y sociales, con la lectura del Artículo 23, que dice:

"Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Panamá, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales por los particulares y por el Estado".

El H.C. Ferrari observó que para ese artículo había una modificación del Poder Ejecutivo.

El Secretario leyó la modificación que es como sigue:

"Artículo 23 (reemplazarlo por el artículo 24 de la Constitución de 1941 que dice:

"Artículo 24. Las autoridades de la República están instituidas para defender los derechos de la Nación; para proteger en sus vidas, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, y para asegurar el cumplimiento de todos los deberes que impongan la Constitución y las leyes al Estado y a los particulares".

El H.C. Fábrega manifestó su preferencia por el texto del proyecto de Constitución siempre que se adicionara en la forma siguiente:

"Artículo 23. Las autoridades de la República están instituidas para defender los derechos de la Nación, proteger a todas las personas residentes en Panamá en sus vidas, honra y bienes y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales por los particulares y por el Estado."

Así se aprobó.

Se leyó el artículo 24, que dice:

"Artículo 24.—Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de las leyes. Los funcionarios públicos, lo son por esa misma causa y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas".

Fue aprobado textualmente.

Se leyó el artículo 25, que dice:

"Artículo 25. Todos los panameños y extranjeros son iguales ante la ley. Por lo tanto, no habrá fueros o privilegios personales ni distinciones por razón de raza, sexo o religión.

Lo estatuido en este precepto es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21.

Los comisionados Fábrega y López y León presentaron una modificación al último párrafo, y fue aprobada en la forma siguiente:

"Lo estatuido en este precepto es sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 21, 218 y 219".

Lo demás del artículo fue aprobado textualmente.

Se leyó el Artículo 26 que dice:

"Nadie podrá ser privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente expedido de acuerdo

con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley. El delincuente sorprendido infraganti podrá ser aprehendido por cualquier persona y deberá ser entregado inmediatamente a la autoridad.

Nadie podrá ser detenido por más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente para juzgarlo.

En ningún caso podrá haber detención, prisión o arresto por deudas u obligaciones puramente civiles salvo el arraigo judicial".

El comisionado Silvera modificó la última parte de este artículo en la forma siguiente:

"Nadie podrá ser detenido por más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente para juzgarlo. La violación de este precepto por las autoridades de policía les ocasiona la pérdida del empleo, sin perjuicio de las demás responsabilidades que señalen las leyes.

En ningún caso podrá haber detención, prisión o arresto por deudas u obligaciones puramente civiles".

La supresión del texto original de la frase "salvo el arraigo judicial" fué obra del comisionado López y León, quien sostuvo que esta institución es un resabio de la antigüedad y que se ha comprobado que es imposible darle efectividad en Panamá. Este concepto fué compartido por los comisionados Silvera, Fábrega y de la Rosa. A indicación del comisionado Fábrega se solicitó la opinión del Juez de Circuito Don Hermógenes de la Rosa quien estaba presente en el recinto de la discusión, y este funcionario se manifestó en un todo de acuerdo con la idea de suprimir de nuestro Código fundamental la arcaica institución del arraigo.

Con estas modificaciones el artículo del Proyecto fue aprobado.

Se leyó el Artículo 27, que dice:

"Artículo 27. Toda persona detenida o presa sin justo motivo o sin las formalidades legales o fuera de los casos prescritos en esta Constitución o en las leyes, será puesta en libertad a petición suya o de cualquiera persona. Con este fin la ley reglamentará el recurso de *habeas corpus* con procedimiento judicial sumario, sin consideración a la pena aplicable".

El comisionado de la Rosa lo modificó y fué aprobado en la forma que sigue:

"Artículo 27. Toda persona detenida o presa fuera de los casos prescritos en esta Constitución o en las leyes será puesta en libertad a petición suya o de cualquier otra. Con este fin la ley reglamentará el recurso de *habeas corpus* con procedimiento judicial sumario, sin consideración a la pena aplicable".

El artículo 28 fue aprobado textualmente así:

"Artículo 28. Nadie será obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía contra sí mismo, ni contra su cónyuge ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Se leyó el artículo 29, que dice:

"Artículo 29. El domicilio es inviolable. Nadie podrá entrar en el domicilio ajeno sin el consentimiento de su dueño, a no ser por mandato escrito de autoridad competente o para socorrer a víctimas de crímenes o desastres. El registro de papeles y efectos se practicará siempre en presencia del interesado o de una persona de su familia, o, en su defecto, de dos vecinos honorables del mismo lugar".

Con la venia de la Comisión el Honorable Tejeira presentó una modificación al aparte último de este artículo que dice:

"Las autoridades administrativas podrán practicar, previo aviso, visitas domiciliarias únicamente para velar por el cumplimiento de los reglamentos sanitarios". A este respecto el H.C. López y León citó el Artículo 34 de la Constitución Colombiana, que apoya la tesis del Honorable Tejeira. Los comisionados de la Rosa y Silvera sustituyeron las últimas palabras de la modificación, o sea "reglamentos sanitarios" con las siguientes: "reglamentos de salud pública".

En esta forma el artículo 29 fue aprobado.

Fue leído el Artículo 30, que dice:

"Artículo 30. Toda persona podrá transitar libremente por el territorio de la República y cambiar de residencia, sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de carácter general sobre tránsito, arraigo judicial, salubridad e inmigración".

Fué aprobado suprimiéndole lo relativo al arraigo judicial a moción del comisionado de la Rosa.

A moción del mismo se suprimió del Artículo 31 la frase "no de castigo cruel", quedando el Artículo aprobado en esta forma:

"Artículo 31. Las cárceles son lugares de seguridad y de regeneración; por lo tanto, es prohibida toda severidad que no sea necesaria para la custodia y enmienda de los presos".

El artículo 32 fue aprobado con una leve transposición de las palabras "ocupados y examinados" en el sentido de decir "examinados y ocupados", quedando en definitiva su texto aprobado así:

"Artículo 32. La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y ni aquéllas ni éstos podrán ser examinados ni ocupados sino por disposición de autoridad

competente y con las formalidades que prescriban las leyes. En todo caso se guardará reserva sobre los asuntos ajenos al objeto del examen u ocupación’.

El Art. 33, a moción del H.C. de la Rosa, quedó aprobado en la siguiente forma:

“Artículo 33. No habrá pena de muerte ni de expatriación”.

A petición del H.C. Silvera el artículo 34 fué aprobado con la leve modificación siguiente:

“Artículo 34. Sólo podrán ser penados los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración y exactamente aplicables al acto que se impute”.

El artículo 35 también sufrió una leve modificación de forma y quedó así:

“Artículo 35. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni podrá serlo más de una vez por el mismo hecho”.

El comisionado Fábrega dejó constancia en el acta de que a juicio de la Comisión, esta disposición no entorpece en forma alguna el recurso de revisión o, dicho de otro modo, que no entraña un doble juicio.

El artículo 36 sufrió dos leves modificaciones a sugerencia del Convencional Tejeira que hizo con la venia de la Comisión, en el sentido de sustituir en la primera parte del artículo la palabra “castigar” por el vocablo “penar” y sustituir en el ordinal primero la frase “en el acto en que están desempeñando las funciones de su cargo” con esta otra: “mientras desempeñen las funciones de su cargo”. También se resolvió no aceptar la modificación presentada por el Poder Ejecutivo en el sentido de suprimir el ordinal 3o. del artículo, que reza: “los capitanes de buque, tienen no estando en puerto, la misma facultad para reprimir los delitos cometidos a bordo”. Finalmente el texto del Artículo fué aprobado como sigue:

“Artículo 36. Podrán penar sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos términos que señale la ley:

1º Los funcionarios que ejerzan mando y jurisdicción, los cuales podrán penar con multas o arresto a cualquiera que los injurie o les falte el respeto mientras desempeñan las funciones de su cargo;

2º Los Jefes de la fuerza pública, los cuales podrán imponer penas de arresto a sus subalternos para contener una insubordinación o motín o para mantener el orden; y

3º Los capitanes de buque, que, no estando en puerto, tienen la misma facultad para reprimir los delitos cometidos a bordo”.

El Artículo 37 fue aprobado con una modificación presentada por el Poder Ejecutivo en el sentido de suprimir del segundo párrafo la frase “con excepción de los oficiales y clases”. Quedó aprobado así:

“Artículo 37. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional o legal en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad a la gente que lo ejecuta. Los individuos de la fuerza pública que se hallen en servicio quedan exentos de esta disposición. Respecto de ellos la responsabilidad recaerá únicamente sobre el superior jerárquico que dá la orden”.

El artículo 38 fué aprobado textualmente como sigue:

“Artículo 38. En ningún caso podrá imponerse pena de confiscación de bienes”.

A las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde se clausuró la sesión.

El Presidente,

HARMODIO AROSEMENA F.

El Secretario,

D. H. Turner.

NARRACION DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION ENCARGADA DE ESTUDIAR EL PROYECTO DE CONSTITUCION EL DIA 1º DE AGOSTO DE 1945

(Presidencia del Honorable Convencional Harmodio Arosemena Forte)

A las 4:15 p.m. en el despacho de la Secretaría General de la Honorable Asamblea Constituyente se reunieron los miembros de la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución elaborado por los jurisconsultos Doctores Ricardo J. Alfaro, José D. Moscote y Eduardo Chiari.

El Presidente ordenó al Secretario General pasar lista y respondieron a ellas los siguientes Convencionales: Harmodio Arosemena F., Abilio Bellido, Esther Neira de Calvo, Diógenes de la Rosa, José I. Fábrega, Agustín Ferrari, Jacinto López y León y Didacio Silvera. Dejó de asistir con excusa el Honorable Felipe O. Pérez. De fuera del seno de la Comisión asistieron los Honorables Homero Ayala P., Ramón Jiménez, Gil Blas Tejeira, Luis E. García de Paredes y Gumerinda Páez.

El Honorable José I. Fábrega dijo: He sostenido una conversación con el Dr. Eduardo Chian sobre el punto de la nacionalidad y las facilidades que se le podrían dar a los antillanos de soli-

citar su nacionalidad a los 21 años. Mi tesis los ampara y al Dr. Chiari le parece demasiado amplia y que no responde a la idea. Los extranjeros obtienen su carta de naturalización cuando ven las facilidades de una posición oficial.

El Honorable Arosemena dijo: La tesis del Honorable Fábrega da al hombre la facilidad de prepararse para ser panameño.

El Honorable Fábrega dijo: En el proyecto se le da amplitud para que en cualquier momento se prepare.

El Honorable Didacio Silvera dijo: Para darles la nacionalidad a los antillanos se necesita exigirles que hablen el idioma castellano, y cuando se trata de otros elementos, qué ocurre? Citó leyes sobre la nacionalización.

El Honorable Fábrega dijo: También debía exigirseles.

Fué leído el Artículo 14.

FUE APROBADO.

Fué leído el Artículo 15.

El Honorable Fábrega dijo: Hay una sugestión del Ejecutivo al respecto.

El Secretario la leyó y explicó en qué consistía la modificación.

El Honorable Fábrega dijo: Ustedes conocen de algún país que mantenga la nacionalidad de ciudadano de ese país a pesar de que él al nacionalizarse haya renunciado expresamente a su nacionalidad de origen?

Grán número de comisionados respondieron que Alemania.

El Convencional de la Rosa leyó de la constitución española los Artículos 23 y 24.

El Honorable Fábrega dijo: Quisiera Ud. Honorable de la Rosa, hacerme el favor de ver si en la Constitución Española se pierde la nacionalidad si se renuncia a ella?

El Convencional de la Rosa volvió a leer la Constitución Española y el Honorable Fábrega le preguntó nuevamente si no se hablaba allí sobre los casos de renuncia expresa.

El Honorable Diógenes de la Rosa dijo: Esto se ha aprobado y la República española lo conserva.

La Honorable Neira de Calvo dijo: No se les exige el requisito de que hablen el idioma?

El Honorable Silvera dijo: Actualmente es algo raro. La Ley 8a. de 1941 no le exige al extranjero para nacionalizarse que hable castellano; no es una condición *sine qua non*.

El Honorable Fábrega dijo: Mi problema no es sólo el de los jamaicanos, es una tragedia la que pasa aquí. Uno pasa por la Avenida Central

y se encuentra con dos mil nacionales que no conocen ni siquiera el idioma, que mandan a sus hijos al extranjero, y no les importa con el país.

La Honorable Neira de Calvo dijo: Los extranjeros obtienen la carta de naturaleza para poder comerciar e irse luego a su país, esos son detalles que hay que ver.

El Honorable Silvera dijo: A mí me parece que si le exigimos al nacional panameño que hable español, debemos exigirlo con mayor razón a los que se van a nacionalizar panameños.

El Presidente puso en discusión la modificación.

El Secretario sugirió que toda la materia de ese título estaba tan ligada que le parecía era preferible saltar sobre toda esa materia y seguir.

El Presidente puso en discusión la sugestión y fué aprobada.

El Secretario dió lectura al Título III—Derechos y Deberes Individuales y Sociales. Capítulo 1º—Garantías Fundamentales:

Fué leído el artículo 23.

El Honorable Ferrari dijo: El Poder Ejecutivo había sugerido eso en las modificaciones, no sé cual sea el motivo exacto de esa modificación, porque ese es un principio que se acepta en todas partes; eso es un principio general.

El Honorable Fábrega dijo: No sería conveniente dejar el artículo como está y agregarle "para defender los derechos de la nación", porque me parece que eso envuelve un sentido interno de la obligación de las autoridades, en el sentido de los derechos de la República de Panamá, que no se limite al aspecto interno de la defensa de vida, honra, y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de los particulares y por el Estado. Las autoridades de la República tienen una misión que se puede llamar de orden externo. Se debe agregar "para defender los derechos de la Nación"; mejor dicho, se le puede agregar al artículo 23 "las autoridades de la República están instituidas para defender los derechos de la nación", y lo demás, el artículo tal como está.

El Presidente preguntó si se negaba la modificación del Ejecutivo y se adicionaba como sugirió el Convencional Fábrega.

FUE NEGADA.

El Honorable Fábrega dijo: Considero que el artículo 23 del proyecto debe quedar tal como está con la sola adición de la expresión "para proteger los derechos de la nación" intercalada antes de la expresión "a todas las personas residentes en Panamá". De tal manera que definitivamente el artículo debe, en mi concepto, leerse así: "Las autoridades de la República están instituidas para defender los derechos de la na-

ción, para proteger a todas las personas residentes en Panamá en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales por los particulares y por el Estado". (el artículo fué aprobado así).

El Presidente ordena la lectura de cómo ha quedado el artículo.

Concluida su lectura y sometido a votación
FUE APROBADO.

Leído el artículo 24.

FUE APROBADO.

Leído el Artículo 25.

El Convencional Ferrari opinó respecto a la frase "general después de extranjeros"

El Honorable Fábrega dijo: Estimo que en el aparte del artículo 25 debe hacerse una adición. Esté aparte dice en el proyecto lo siguiente: "Lo dispuesto en el artículo 21". A su vez, el artículo 21 expresa lo siguiente: "Los extranjeros disfrutarán en Panamá de las garantías y los derechos civiles y públicos reconocidos a los nacionales. Pero la ley podrá, por razones de salubridad, moralidad, seguridad pública y de economía nacional subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros en general". Como se ve, del consorcio de los artículos que he leído o sea el 25 en lo que se refiere a su aparte, y el 21, se desprende, que de acuerdo con el proyecto, los panameños y los extranjeros son iguales ante la ley con las solas excepciones que haga la ley. Sin embargo los artículos 218 y 219 del mismo proyecto que estamos estudiando hacen distinciones entre el ejercicio del comercio por parte de los panameños y por parte de los extranjeros. De tal manera que en conclusión el artículo 25, debe manifestar en el aparte ya leído, no sólo que lo estudiado en ese precepto es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, sino que debe establecer que es sin perjuicio de lo establecido en los artículos 218 y 219. (El artículo fué aprobado con esa adición).

El Secretario y el Honorable López y León sugirieron sendas fórmulas y fué aprobada la modificación:

Leído el artículo 26.

El Honorable Silvera dijo: Yo quiero modificar este artículo en la forma siguiente: en cuanto a la parte primera del artículo 26, (lee): "Nadie podrá ser detenido por más de 24 horas..." Aquí se ha dado el caso frecuentemente de tener individuos 4 ó 5 días en la cárcel sin que se sepa a orden de que autoridad están.

Yo voy a adicionarlo con esto: "Nadie podrá ser detenido por más de 24 horas sin ser puesto a órdenes de autoridades competentes para juz-

garlo. La violación de ese precepto ocasiona la pérdida del empleo... etc. etc." (Sigue leyendo).

El Honorable López y León dijo: Allí se le podría agregar: las autoridades de policía o "sus agentes", porque según precedentes de la Corte Suprema, los policiales no son sino agentes de la autoridad.

El Honorable De la Rosa dijo: Se castigará a quien dá la orden y a quien la cumple.

El Honorable Fábrega dijo: El instinto de atropello de la policía se debe mucho a la ignorancia.

Fué puesta en discusión la modificación del Honorable Silvera y la sugestión del Honorable López y León. Se aprobó. Se leyó la otra parte del artículo.

El Honorable López y León dijo: El arraigo judicial es ilusorio; es un resabio de legislaturas arcaicas que nosotros debemos abolir.

El Honorable Fábrega dijo: En muchos casos, un individuo que está arraigado, quiere irse de una parte para otra. Si usted, Honorable López, considerara que el principio en sí es indispensable, estaría bien. Pero en muchos casos el arraigo es un defecto. Será esa la idea del arraigo y que no esté presente para los fines del juicio?

El arraigo está suprimido en algunos países de América? Si existe en todos los países de América, cuál es el interés en quitarlo?

El Honorable Silvera dijo: Creo que para los efectos civiles si podríamos dejarlo.

El Honorable Fábrega dijo: Ustedes aquí por las leyes entenderían también las disposiciones de decreto? Porque hay determinados casos en que un decreto se da dentro de las facultades administrativas que tiene el Ejecutivo, pensando en esa posibilidad — no tengo deseo de que se ponga preso a nadie por decreto — pero existe la posibilidad de que se dicten decretos que señalen sanción. Las leyes cubren eso?

El Honorable De la Rosa dijo: Soy partidario de que se suprima lo del arraigo judicial. Es un rezago feudal.

El Honorable Silvera dijo: Lo que yo creo es que eso es ilusorio en sus efectos, porque aquí en Panamá no se puede arraigar a nadie.

El Honorable Fábrega dijo: Se ha dicho aquí con referencia al artículo 26 que debe suprimirse el aparte último de dicho artículo que autoriza la detención por motivo de arraigo judicial. No estoy contra la tesis que se viene sosteniendo. Solo me limito a sugerir que investiguemos si en los otros países americanos existe o no existe todavía el arraigo y sobre todo cuáles son los beneficios del mismo dentro de la justicia y de la práctica. En este recinto se encuentra ocasionalmente el señor Juez Segundo del Circuito de Panamá,

licenciado Hermógenes de la Rosa, y sugiero que la Cámara solicite de éste, su valiosa opinión sobre la materia.

El Licenciado Hermógenes de la Rosa dijo: Me parece que el arraigo debiera suprimirse de la legislación y que en la realidad casi no existe, pues son muy contados casos de arraigo que se presentan en los tribunales. Además es enojoso y hasta chocante. Por lo demás creo que tiene también bastante de similitud con la prisión, como dice el Dr. Arosemena; la única diferencia es que no está preso dentro de los barrotes de una cárcel sino dentro de la ciudad.

Considero pues, que debiera excluirse de la Constitución, y con lo cual quizás se daría un paso hacia adelante. De todos modos no se perdería nada con esa reforma.

En discusión la modificación del Honorable Jacinto López y León fué aprobada.

Se lee el artículo 27.

El Honorable Fábrega dijo: La Constitución del 41 no tiene algo sobre eso? Me parece que eso es una cuestión que significa un gran respeto por la personalidad humana.

El Honorable Silvera dijo: Ese recurso de que habla la Ley es al que se refiere el artículo leído.

En cien recursos de *Habeas Corpus*, que se han presentado no ha habido uno o dos fallos en favor del reo, sino de las autoridades.

El Honorable De la Rosa dijo: Yo no creo que esa institución debe ser eliminada. Creo que lo que ocurre es consecuencia de la clase de funcionarios que han servido hasta ahora.

El Honorable Silvera dijo: Precisamente hay ahora el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo para esos casos, pero con respecto a este artículo leído recuerdo que yo estaba interesadísimo en los recursos y sé que a Gabino Sierra G. le han presentado varios, o más de 70 recursos de *Habeas Corpus* y en ninguno ha tenido la razón el reo.

Recuerdo que comenzó esto en 1908 cuando don Samuel Lewis era Ministro de Relaciones Exteriores y también sucedió el caso de Speeller quien vino a contratar a empleados de la Zona del Canal y los recursos de *Habeas Corpus* se resolvieron a favor del reo; y después que se lo habían llevado dijo: "Sea cual fuere la decisión de la Corte sería expulsado del territorio panameño." Lo que ha pasado en Panamá es vergonzoso.

El Honorable De la Rosa dijo: Voy a hacer una observación que me acaba de indicar el Honorable Tejeira.

A Uds. no les parece que al artículo se le debería suprimir la frase "sin justo motivo" porque introduce un elemento subjetivo, porque queda al arbitrio del funcionario establecer o definir dicho motivo?

Yo creo que debe ser así. El decir "sin justo motivo" podría prestarse justamente a lo que dice el Honorable Silvera, a macular la institución que aquí se quiere fundar.

El Secretario dijo que si se les ponía una disyuntiva sería mejor.

El Presidente dijo que uno mismo podía presentar su *Habeas Corpus*.

Puesta en discusión la modificación FUE APROBADA.

Leído el artículo 28.

El Honorable Fábrega dijo: Creo que en otras constituciones, me parece que es la Mexicana, que a nadie se le puede obligar a declarar en su contra.

El Secretario dijo: Esto es una cuestión de procedimiento y no debe encajar aquí.

FUE APROBADO.

Se lee el artículo 29.

El Honorable De la Rosa dijo: Cuando discutíamos el artículo 26 yo iba a hacer la pregunta de qué se entiende por autoridad competente? Ahora, en el artículo 29 aparece la misma expresión. No sería defender más al individuo, establecer que sea mandato escrito de autoridad judicial?

El Honorable Fábrega preguntó: Cuál era el objeto? (refiriéndose a lo dicho por el Honorable De la Rosa). Imagínese el caso de una investigación policiva repentina de un delito; sobre todo, en un medio como el de Panamá donde esas cosas son necesarias.

El Honorable Arosemena dijo: La Presidencia, con la venia de los Honorables miembros de esta Comisión desea ceder la palabra al Honorable Tejeira, quien no forma parte de esta comisión, pero tiene algo muy interesante que decir.

El Honorable Tejeira dijo: Me parece que quedaría más exacto y más dentro de la redacción que debe llevar, por aquello de si cumplen o no, porque da una idea más castiza y más precisa.

El Presidente dijo que era preciso investigar, y el Honorable Tejeira le respondió que eso estaba implícito.

El Honorable Bellido dijo: Lo único que hago es cambiar así: "velar por el cumplimiento de los servicios sanitarios". Al decir "velar" por el cumplimiento es más exacto y comprensivo que "investigar" dicho cumplimiento.

El Honorable De la Rosa dijo: Esto es un medio de cerrarle el acceso a los domicilios a los corregidores y regidores del interior; se debe tener en cuenta de que se está legislando para los pueblos de Panamá, y que éstos por razones políticas abusan.

Puesta en discusión la proposición del Honorable Fábrega, adicionada por la Honorable Sra. de Calvo, resultó aprobada.

El Honorable Fábrega dijo: Quiero hacer referencia al artículo 26 que tan atinadamente adicionó el Honorable Silvera. Pero en la forma en que él lo ha adicionado, parece que la sanción es únicamente para las autoridades de la policía. Es decir, que la autoridad que no sea autoridad de la policía y ordena el arresto de un individuo no tiene sanción; cuando en muchos casos la autoridad de policía lo único que hace es cumplir con una orden superior.

El Honorable Silvera dijo: La modificación mía consiste en que la violación de este precepto acarrearía la pérdida inmediata del empleo.

El Honorable Fábrega dijo: En el caso de que un Ministro de Gobierno ordene la detención de un individuo, la autoridad de policía no puede pedirle explicaciones al Ministro de por qué debe hacer esa detención; en el caso de que quede el individuo por 8 o 10 meses en la cárcel, el Ministro de Gobierno no tendrá responsabilidad ninguna porque el artículo establece que la sanción de la pérdida del empleo sea para las autoridades de la policía. Creo que sería mejor poner: "las autoridades responsables por la violación de este precepto, serán castigadas". En sustancia estoy de acuerdo con el Honorable Silvera, pero me parece que la medida ya que es tan apropiada, se debe completar.

El Honorable Silvera dijo: Me parece, Honorable Fábrega, que usted se fué más lejos de mi pensamiento. Lo que yo trato de evitar son los abusos que se han venido cometiendo por las autoridades de la Policía, que conservan individuos o personas detenidos por 3, 4 ó 5 días, sin ponerlos a órdenes de las autoridades competentes, violando así el precepto constitucional anterior que no tenía sanción de ninguna especie. Como abogado he tenido ocasión de presenciar muchas veces, casos como el de que hablo, sin el menor respeto por la libertad individual que debe ser sagrada para los países civilizados.

El Honorable Fábrega pregunta al Honorable Silvera por qué razón deben quedar otras autoridades sin sanción.

El Honorable Silvera dijo: Me alegro mucho, Honorable Fábrega, que usted se extienda más en el concepto que yo tengo del asunto, pero me parece que cuando un funcionario público dá una orden de detención sobre determinada persona, ya ese funcionario tiene una responsabilidad directa sobre esa detención y puede el perjudicado, sus parientes o sus amigos, proponer contra él el recurso de Habeas Corpus. Simplemente lo que yo quiero es que a esos individuos que están detenidos se les ponga a órdenes de la autoridad competente dentro del plazo improrrogable de 24 horas ó si no, que le apareje a las autoridades de

la Policía la sanción correspondiente, que es la pérdida inmediata del empleo. Que no haya un individuo detenido sin que después de las 24 horas se le ponga a órdenes de la autoridad competente. El punto de vista mío, que yo quiero explicar hasta donde me sea posible, es el hecho fundamental de que un individuo detenido por las autoridades de la Policía no permanezca más de 24 horas detenido sin ser puesto a órdenes de las autoridades competentes. Si la detención se efectúa por órdenes del Alcalde, ese hombre debe ponerse a órdenes del Alcalde. Esa es una cosa que viene ocurriendo aquí con mucha frecuencia.

El Honorable Fábrega observa que de la manera como está redactada la adición de Silvera el que viola el precepto pierde el empleo y en cambio el que ordena la violación no. Considera que, en lugar de referirse a las autoridades de la policía, es preferible decir: "Los funcionarios públicos".

El Honorable López y León dijo: Tal vez encajaría así como un inciso (leyó el artículo 26). "El funcionario público que viole este precepto tendrá como sanción la pérdida inmediata del empleo, sin perjuicio de las demás penas que establezcan las leyes".

El Honorable Fábrega se manifiesta de acuerdo con la modificación del Honorable López y León.

Sometida a discusión la modificación del Honorable López y León, resultó aprobada.

El Presidente ordenó al Sr. Secretario la lectura del artículo 39 del Proyecto, que dice: "Artículo 39. Es libre la profesión de todas las religiones así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público". E inmediatamente después de leído se abrió la discusión del mismo.

El Honorable de la Rosa dijo: A mí me parece, que en pura teoría y técnica liberal, este artículo resulta sobranter en una constitución demoliberal. El liberalismo inicia su lucha justamente tratando de producir la separación de la iglesia del Estado y llevar así a su culminación un proceso que en su integridad se puede definir como la secularización del poder público, es decir, el apartamiento de la religión y de la política. Siendo eso así, en una constitución de tipo demoliberal no deberá introducirse ningún artículo que lleve la idea de que el estado como estado se preocupa por la existencia de la religión. La religión no debe ser cosa reglamentada por el estado más allá del ámbito en que reconoce otras asociaciones de muy variada índole. Por eso a mí me parece que este artículo no debería estar en la Constitución, siguiendo así el pensamiento a que varias veces se adhirió el constituyente colombiano cuando no dijo una palabra respecto de esta materia. A propósito, dice el Dr. Tulio Enrique Tascón: (lee).

Yo decía que en pura técnica y en pura doctrina liberal el estado debía ser indiferente a toda clase de religiones. Al legislar sobre esa materia en los países de la América Hispana donde ha imperado la religión católica, se ha hecho por reacción a la posición de lucha contra el Estado que esa religión ha mantenido a través de toda nuestra historia. Ha sido una cuestión de necesidad para los constituyentes de todos los países de América. En las constituciones se establece el reconocimiento de la religión como religión del estado, cuando tenían preponderancia los elementos adictos a la confesión católica. Cuando logran el predominio los partidos de tendencia liberal, entonces, si hay necesidad de legislar en la materia, necesariamente se sigue el criterio que siguió la reforma colombiana de 1936 en el artículo 50 que dice: (lee).

A mí me parece que si vamos a establecer algo a este respecto, el artículo 39 debería reformarse o sustituirse por uno que yo he redactado tomando pie en el artículo 50 de la Constitución colombiana y con una calificación que me voy a permitir leer. Yo propongo que el artículo 39, si se decide legislar sobre esta materia, diga así: (lee).

Me parece que el artículo debe comenzar por garantizar la libertad de conciencia: es decir, que el ciudadano que no reconozca una religión cualquiera o para el cual éstas carezcan del poder de guiar su conciencia, pueda decirlo, pueda definir su posición y pueda propalar sus propias ideas y que, al mismo tiempo, aquéllos que creen puedan hacer otro tanto respecto a su credo. Luego, para demarcar mejor ese terreno tan difícil en que necesariamente colindan la religión y la política, se establecerá la libertad de profesión, difusión y práctica de toda religión que no sea contraria a la moral social o al orden público. En esto me cino al artículo 49 (lee).

Antes de proseguir en el desarrollo de mi pensamiento, debo hacer constar una cosa: soy absolutamente descreído, carezco de toda preocupación metafísica. A mí en lo absoluto ni me molesta, ni me agravia la existencia de la religión. Yo creo que la religión es un producto social como los zapatos o los sombreros y que se explica en virtud de razones sociales que toda religión tiene, por decirlo así, para usar una palabra tan de moda, tendencia "totalitaria", que toda religión trata de influir sobre la conciencia del hombre y sobre sus actividades políticas. Por su misma índole, la religión tiende necesariamente a ejercer actos de poder y dominio que la ponen por necesidad al borde de conflictos con el estado. Si el estado va legislar en esta materia, debe también tener las precauciones debidas para separar lo temporal de lo espiritual. Nunca debe decaer el esfuerzo porque esa separación se realice en los términos más exactos posibles y para ello debe tomar todas las precauciones a fin que la simple práctica religiosa no dé origen a actos de naturaleza política que vayan en contra de la

misma estructura e instituciones del estado, sobre todo si éstas son, como las nuestras, democráticas. Es por eso que mi artículo establece estas otras condiciones, aparte de garantizar la libertad de conciencia, la de que la actividad proselitista no se realice mediante prédica o inducciones contrarias al ideario democrático.

Ahora bien, la religión existe no sólo como un conjunto de nociones, sino como un conjunto de acciones, es decir, que dan origen a relaciones con el estado. En cuanto forma social organizada, la religión debe regirse por la ley general de asociaciones, por la ley que regula la existencia de las personas jurídicas que el estado debe reconocer y cuyo reconocimiento debe estar sujeto a condiciones precisas. Por eso yo he presentado a la consideración de ustedes este artículo en sustitución del artículo 39.

El Presidente advierte a los miembros de la Comisión que hay dos proposiciones: 1a. Si deben incluirse en la constitución disposiciones relacionadas con la religión; y 2a. Si se legisla en la forma propuesta por el Honorable de la Rosa. Anuncia que se abre la discusión de la primera proposición.

El Honorable López y León dijo: Yo considero que si se debe legislar porque, aparte de que casi todas las constituciones de los demás países lo han hecho, nosotros debemos mantener el principio que nos señalaron los constituyentes del año 4, del 41 y el artículo que presenta la comisión de Estudio de la Constitución. Cada uno tiene sus creencias y es libre de expresarlas. El Honorable de la Rosa nos ha leído algunas consideraciones de Tulio Enrique Tascón y a propósito de esto voy a leer aquí parte de un discurso del Dr. Eduardo Santos cuando en el año 36 se confeccionaba la Constitución (lee pá. 187—La actitud ante el sentimentalismo católico—pág. 193.—Una fórmula cordial). Si la constitución debe ser reflejo de ideales, de aspiraciones, de la realidad nacional y es un hecho innegable que aquí en este país la inmensa mayoría es católica, yo no veo por qué tocar un punto que va a provocar un problema que todos nuestros constituyentes lo han dejado sin tocar.

El Honorable Bellido dijo: Sr. Presidente: Yo estoy de acuerdo con que se legisle sobre esa materia. Yo no soy descreído completamente; pero si soy un poco indiferente a la religión y tengo mis dudas al respecto de que la mayoría de los panameños son católicos y de la práctica real de esa religión.

En muy pocas ocasiones yo he ido los domingos a la Iglesia y me he sorprendido de esa demostración de boato, de lujo, que no se compadecen con la doctrina que practicaba El Rabí de Galilea. He visto también las procesiones y me he sorprendido cómo hay una línea divisoria entre la aristocracia que hace alarde de su lujo y

boato y la gente del pueblo que va atrás vistiendo a su manera.

Conozco también algunas actividades de ciertas representaciones de la Iglesia católica y realmente no se compadecen con el ejercicio de la doctrina de Cristo.

A mí me tocó una vez presenciar un caso bastante doloroso en la Iglesia de Santa Ana. Llevaban el cadáver de un señor Rosero que figuraba como soldado de la Independencia, familia pobre, humilde y las hijas estaban allí y el padre, el sacerdote, rezó los oficios respectivos y no acababa de salir el cadáver cuando el sacerdote se pronunció en forma imperativa reclamando el valor de su trabajo. Una de las hijas dijo: "Esto lo está pagando el Estado, todos los gastos funerarios están por cuenta del Estado. Y la respuesta de aquel sacerdote, representante de Cristo en la tierra, fué: "Yo no tengo cuentas con el Estado. Ustedes me pagan en seguida mis B. 6.00". Y las pobres mujeres tuvieron que coleccionar para cubrir ese valor. Y como este caso puedo citar millares no sólo en la capital sino también en el interior de la República. Por esta razón creo que debemos tocar el tema y acomodarlo a nuestra realidad.

La Honorable Sra. de Calvo: Estoy de acuerdo con que se legisle sobre este particular. Creo que al no legislar sobre el importante punto de la religión vamos a provocar un problema nacional que no veo la razón para que se provoque. Si bien es cierto que hay falsos apóstoles de cualquier credo religioso o político, también es cierto que las verdades fundamentales existen, y como lo han dicho el Honorable de la Rosa y el Honorable Bellido, hay derecho para que cada cual crea esas verdades.

Negar que la religión católica es la de la mayoría del pueblo de Panamá es querer tapar con la mano la luz del sol. Es cierto que hay fanatismo entre grupos de ciudadanos. Soy la primera en reconocerlo, pero eso no niega todavía que la religión católica es una fuerza espiritual tremenda en la vida de nuestro pueblo. Destruir esa fuerza sería tarea inútil y creo que aquí estamos para garantizarle a cada ciudadano la felicidad de su vida en todos los aspectos; no sólo asegurarle el pan cotidiano, sino también el pan espiritual. Creo pues, que sí debe legislarse sobre materia de tanta trascendencia.

Podemos estudiar bien el artículo que propone el Honorable de la Rosa, y ver lo que puede tomarse de él, teniendo siempre en cuenta las realidades nuestras, pero de ninguna manera dejar de escribir en la Constitución, lo que no se han atrevido a borrar de ella, ni los Constituyentes de 1904, ni los de 1941, ni tampoco los miembros de la Comisión que presentaron el Proyecto que nosotros estudiamos. Estos tres grupos de hombres que se reunieron para legislar y escribir nuestra Carta Magna, no se mostraron indi-

ferentes sobre este aspecto de la vida nacional, y me parece que nosotros debemos mirar con interés, y con todo respeto, esa actitud de ellos, y tratar, dentro del liberalismo que pregonamos, de legislar sobre este punto.

El Honorable Felipe Pérez: Yo quiero dejar constancia de mi pensamiento sobre el particular y voy a enfocar el tema desde un ángulo si se quiere novedoso, más que todo fundado en mi experiencia profesional, pero antes de entrar a esta cuestión quiero presentar aquí, como argumento, en contra de la primera parte expuesta por el Honorable de la Rosa, quien se supone ser uno de los exponentes del Socialismo:

En Panamá cualquier característica de la Constitución luce en el artículo 124, que consagra la libertad de religión a fin de asegurar a los ciudadanos en este sentido.

De tal manera que a la propia luz del artículo 124 se consagra un principio de libertad de practicar los principios religiosos y de propaganda antirreligiosa y ese derecho se le reconoce a todos los ciudadanos. Dicho esto, que se encamina directamente a contradecir la primera parte de la exposición que ha presentado aquí el colega de la Rosa, voy a referirme a la otra cuestión: y si creo que se debe legislar sobre esta materia y creo que se debe legislar sin tomar en cuenta, en especial, ninguna de las distintas religiones más o menos de acuerdo con la fórmula tercera del artículo 29 que consagra esa libertad para todas las religiones; porque mi experiencia de abogado, dedicada casi exclusivamente a atender casos de elementos proletarios tanto de la ciudad como del campo, así me lo indica. Yo he comprobado que donde mejor cordialidad existe, donde más compenetración hay entre padres e hijos, mujer y marido, es en aquellos lugares donde se practica el culto. Estoy enfocando esto desde el punto de vista social, comparando entre la gente del campo y la de la ciudad, entre mujeres de la clase popular y media y las de la aristocracia. A base de reflexión y análisis he llegado a la conclusión de que esos fenómenos de relajamiento social en varios sectores de la ciudadanía obedece a la ausencia de la religión en los hogares; desde el punto de vista, repito, de religión considerado como un control de orden moral, que imprime ciertas normas de conducta en la familia.

Dejo así explicada mi posición en la discusión.

El Honorable Fábrega: El Honorable de la Rosa ha presentado una proposición tendiente a que se eliminen los artículos referentes a la materia religiosa. Y varios compañeros de Comisión han manifestado sus puntos de vista y me referiré a ellos en la forma más sintética posible.

No estoy de acuerdo con el Honorable Bellido en que la religión católica no es la de la mayoría de la República. Hay que tener en cuenta que

de acuerdo con el censo de 1940, la totalidad de nuestro campesinado es de religión católica y que ese campesinado constituye el 66.4% de la totalidad de la población de la República. Hay que considerar igualmente que, de acuerdo con ese mismo censo de 1940, la población total de la República, desde luego la panameña, tiene un total de 92.7% de católicos. Y si bien este dato parece ser en sí un detalle escueto, hay que considerar que quien de su propia voluntad manifiesta que tiene determinada religión, lo hace porque efectivamente profesa ese credo.

El Honorable de la Rosa a su vez, situándose en un criterio liberal, ha dicho que dentro del liberalismo no cabe la permanencia de los artículos que tratan sobre religión. Yo sostengo precisamente lo contrario. Si la religión de la inmensa mayoría de la República es católica, resulta lo liberal dictar normas dentro de esa realidad.

El Honorable de la Rosa: Digo en pura técnica liberal.

Le voy a hacer una pregunta: no se identifica el liberalismo como hecho histórico desde sus comienzos por sus luchas contra el poder religioso tanto en lo espiritual como en lo temporal?

No ha rectificado jamás el postulado de la libertad de la conciencia, que es donde choca con la religión católica.

El Honorable Fábrega: Se ha hecho mención aquí del caso colombiano. Y es bueno tener en cuenta que la Constitución Colombiana de 1886, en reforma de 1936, dentro de un régimen eminentemente liberal, mantuvo los postulados sobre religión con la especificación no solamente de que la moral colombiana es la cristiana, sino también de que la ley se referirá a la violación de esas normas morales.

Con respecto a otro ángulo de este mismo problema debo dejar constancia de que el problema religioso ha dejado de ser, si algún tiempo lo fué, de oposición de liberales y conservadores y que así como en Colombia el general Uribe Uribe en una época y Eduardo Santos en otra, se han identificado con la religión católica, así mismo entre nosotros hasta mandatarios liberales como Belisario Porras, Juan Demóstenes Arosemena y Enrique Jiménez, han sostenido y practicado el rito católico.

El Honorable de la Rosa: Es que el fin, en ese caso, no era el estado. El estado lo necesitaba el liberalismo para quebrantar el régimen feudal que impedía el desarrollo de la fuerza económica de los cuales todas esas teorías liberales son representación y voceros ideológicos.

Es que sencillamente, aunque no quiero interrumpirle, estimado amigo Fábrega, me veo obligado a decirle que lo que ocurre en verdad es que la religión es otra cosa. Pero antes, le voy a relatar una anécdota que da la dimensión exacta de mi

pensamiento: Mejor dicho, es una referencia. Se dice que Napoleón, quien indudablemente fue un genio, se dedicó una vez a clasificar su biblioteca. La dividió en varias secciones y como Napoleón era también un gran político puso una sección de política y entre las obras que aparecen bajo la clasificación "política" están las que tratan de la religión. Es lo que ocurre en este caso que ha tomado Ud. como ejemplo. Por razones políticas en Colombia los liberales del 36 tenían todavía el temor de que el conservatismo pudiera derrocarlo apelando a esa conciencia, a esa adhesión católica que existe en la mayoría del pueblo colombiano. Es una medida política de condescendencia hacia los conservadores. En todas las disertaciones ha tomado Ud. muchas veces como argumento observaciones que no son religiosas sino políticas. También escribió un folleto que se llamó "De cómo el liberalismo no es un pecado". Conozco unos artículos de don Eduardo Rodríguez de Piñeres, que es uno de los más distinguidos intelectuales liberales de Colombia, de los cuales Uribe Uribe no sale tan adornado como Ud. lo acaba de presentar.

¿Ud. cree que es sacrilegio lo que hizo Haya de la Torre cuando presentó una tesis que se titulaba "sobre la inmoralidad fundamental del derecho y de la profesión de abogado?"

El Honorable Fábrega: Manifiesto que la medida fue tomada por respeto religioso y no como táctica política. El liberalismo y el conservatismo están unidos en cuanto a religión y, por lo tanto, no se puede decir que las disposiciones sobre religión fueron adoptadas como medidas políticas. Observo que la religión católica es parte de nuestra característica nacional y que no debe borrarse porque acabamos con nuestra nacionalidad. Considero que el principio antireligioso es retrógrado. Hoy día hay quienes creen y quienes no creen, pero las tendencias anti-religiosas pasaron a la historia.

El Honorable de la Rosa: No trato de destruir la religión, ni siquiera soy anticlerical. Estimo que la religión debe desaparecer, pero no creo, en la política, antirreligiosa.

La Honorable Neira de Calvo: Pido la palabra solamente para rectificar un concepto expuesto por el Honorable de la Rosa sobre mis afirmaciones anteriores. No quiero retirarme de esta reunión sin decirle a mi Colega que no lo acuso de que él quiera destruir la religión. He entendido bien, Honorable Colega, que usted no quiere que se legisle sobre esta materia y mi idea es que sí debemos legislar. En las Constituciones que yo conozco se legisla sobre ella.

En la de los Estados Unidos de América, por ejemplo, es muy corto lo que se dice al respecto. La enmienda primera a la Constitución afirma: "El Congreso no podrá aprobar ninguna ley conducente al establecimiento de religión alguna, ni prohibir el libre ejercicio de ninguna de ellas".

Por eso en esa gran democracia se practican todas las religiones. Asiste usted al acto de inauguración del Congreso, y comienza por una invocación a Dios hecha por el Arzobispo protestante de Washington. En cualquier Estado, va usted a un acto público, y se inicia siempre con un instante religioso, trátase de un acto de carácter político, o de otro significado cívico.

En las Universidades de ese gran país, el acto solemne de entrega de diplomas, comienza por un momento religioso, por una invocación; y todo acto público que tenga resonancia nacional, que sea expresión del alma ciudadana norteamericana, tiene en su programa un minuto religioso. Son expresiones espirituales de un pueblo, manifestaciones de un acertamiento sincero al SER que todo lo rige: Dios.

El Honorable Fábrega: Desde otro ángulo, me permito hacer a lo especificado por el Honorable de la Rosa, situándome yo ahora en el ángulo marxista, alguna observación. El marxismo según términos de Engels que tengo aquí en esta mesa copiados textualmente, significará la cesión de las prácticas religiosas una vez que mediante su sistema de control económico terminen en la colectividad los temores a la quiebra, a la situación cotidiana del hogar, a la miseria de los trabajadores y a todos los males económicos individuales. Entonces, dice Engels, se acabará la fórmula de que "el hombre propone y Dios dispone", y no habrá por qué hacer invocación a Dios en medio de la zozobra. De tal manera que, desde ese punto de vista, que es el doctrinario del señor de la Rosa, me parece que lo más práctico es que dejemos en la Constitución los artículos referentes a la religión y que esperemos el advenimiento de la era marxista, con el objeto de que por sí solas se vayan desterrando nuestras creencias religiosas y así resulte ya inútil el articulado sobre materia religiosa.

El Honorable Silvera: Me pronuncio en el sentido de que se debe legislar sobre la cuestión religiosa en Panamá, pero en forma general, sin circunscribir el asunto a la religión católica.

Este artículo que trae el proyecto lo hemos heredado de Colombia donde ha encajado bien como una cuestión sentimental. Y no podemos traer aquí el caso de Colombia donde existe el concordato con la curia romana, donde ha habido épocas en que la República se ha consagrado al Corazón de Jesús.

De tal manera que yo no creo que el sello de la Religión Católica pueda perderse en Panamá porque la Constitución de la República deje de hablar de la moral cristiana. Los católicos de Panamá no son tales por disposición constitucional sino por sentimentalismo, por ficción, por vocación, por intuición del temor a Dios, no porque realmente quieren ser católicos y porque creen a pies juntillas en una cuestión de carácter espiritual.

El Honorable de la Rosa: Antes de terminar voy a aclarar algunas cosas. Tanto en lo que se refiere a lo dicho por la distinguida colega Doña Esther Neira de Calvo, como a lo que acaba de expresar el Lic. Fábrega. Hay el pensamiento, aunque el Lic. Fábrega se apresuró a negarlo, de que yo estoy tratando de destruir la religión: pero no es esa mi idea. Respecto a la religión, debe desaparecer: pero como no soy ingenuo y no creo que el mero anticlericalismo pueda llevar a la desaparición de la religión, me he limitado aquí a delimitar el campo de la religión. Creo que la religión nace de ciertas condiciones sociales y, deshechas esas condiciones, la religión terminaría por desaparecer. Por eso creo que el Estado no debe hacer política antirreligiosa y eso es lo que estoy pidiendo al proponer este artículo. Yo de lo que estoy tratando es de separar la religión del Estado. Le voy a decir una cosa, ilustre Lic. Fábrega. Las obras de Marx y Engels tienen varias características, entre ellas, la de combinar lo didáctico con lo teórico, y unas veces las necesidades de separar lo didáctico de lo teórico son las que las llevan a exposiciones que parecen elementales. Pero el marxismo ha hecho largas investigaciones y análisis que, sin salirse del materialismo dialéctico no sólo del materialismo histórico, han dado gran amplitud a la comprensión de la religión. Esos párrafos forman parte de esos capítulos que yo llamo didácticos.

Me refiero ahora a la cita del libro de Engels: eso lo explica así, ilustre Lic. Fábrega, porque Ud. ha pasado por encima de una expresión que tiene allí Engels: Léame para ver (lee el Honorable Fábrega). Exacto sí, justamente. La religión tiene una prolongada existencia. Una existencia milenaria durante la cual se ha creado una especie de super-estructuración, un mundo propio interno que tiene sus leyes, que se expande incluyendo en su ámbito numerosísimos factores sentimentales y emocionales. Es a eso a lo que se refiere Engels. De manera que no se ha de esperar sólo la desaparición de las condiciones sociales de la religión, sino también la acción de la propaganda.

Eso significa sencillamente que la religión es un instrumento político.

Lo primero que solicité fué que decidiéramos si se legisla o no; después, si hay voto afirmativo, presentaría mi proposición.

El Presidente suspendió la sesión a las seis y cuarenta minutos de la tarde, quedando en uso de la palabra el Honorable de la Rosa.

El Presidente,

HARMODIO AROSEMENA F.

El Secretario,

D. H. Turner.

A C T A

de la undécima sesión de la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente.

A las cuatro y treinta minutos de la tarde del día seis de Agosto de mil novecientos cuarenta y cinco, se reunió la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución, integrada por los siguientes comisionados que contestaron a lista así: Harmodio Arosemena F., Presidente; Abilio Bellido, Esther Neira de Calvo, Diógenes de la Rosa, José Isaac Fábrega, Agustín Ferrarri, Jacinto López y León, Felipe O. Pérez y Didacio Silvera. De fuera del seno de la Comisión estuvieron presentes los Honorables Gregorio de los Ríos, Nicolás Sagel, Homero Ayala P., Amado Boutet y Gil Blas Tejeira.

1. El Secretario presentó para su consideración cuatro actas correspondientes a las sesiones de los días 27, 30, de Julio y 1º y 3, de Agosto, cuya lectura se omitió para efectuarla en la sesión siguiente.

2. El Presidente manifestó que varios comisionados le habían pedido siguiera pospuesta la consideración del Título II.

Se accedió a la sugerencia del Presidente.

El H.C. Fábrega consideró que también debía posponerse el estudio de la cuestión religiosa hasta cuando estuviere presente el H.C. de la Rosa, autor del Artículo modificativo que roza esta cuestión.

Se accedió a ello igualmente.

3. El Secretario informó que había preparado un resumen de lo actuado hasta ahora por la Comisión a fin de que sirviera de base al informe que ésta va a rendir al pleno de la Constituyente en vías de conseguir de ésta una prórroga del plazo que tiene para despachar el proyecto encomendado a su estudio.

Se encargó al Secretario que elaborara sobre la base del resumen presentando el informe de la Comisión para la Asamblea.

4. Se puso a discusión el Artículo 41 del Proyecto, que dice:

"Toda persona podrá emitir libremente su pensamiento, de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa. Pero existirán las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o la tranquilidad pública."

El H.C. Fábrega anunció que en lo relativo a la libre expresión del pensamiento él se reservaba presentar después un parágrafo referente a ese mismo tema en lo que atañe a los empleados públicos.

La H.C. Neira de Calvo interpelló al H.C. Fábrega en el sentido de saber si los maestros estarían incluidos en el parágrafo a que él se refiere, y el interpellado contestó que desde luego su adición comprendía a los maestros, como parte que son del engranaje administrativo; pero que seguramente el Ministro de Educación cuando presentara su proyecto de Ley Orgánica del ramo tendría en cuenta de modo especial a los maestros a éste respecto.

El H.C. de la Rosa modificó el artículo sustituyendo su última parte que dice: "la tranquilidad pública" con "el orden público"

Con esta modificación el artículo fue aprobado.

Se leyó el artículo 42, que dice:

"Todos los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos. Las manifestaciones o reuniones al aire libre no están sujetas a permiso alguno. Sólo se requiere previo aviso a la autoridad administrativa local con anticipación de cuarenta y ocho horas. La autoridad podrá tomar medidas de policía para prevenir o reprimir abusos en el ejercicio de este derecho cuando la forma en que se ejerza cause o pueda causar perturbación del tránsito, alteración del orden público o violación de los derechos de cualesquiera personas".

Este artículo fue aprobado con una modificación del H.C. Silvera en el sentido de reducir a 24 horas las cuarenta y ocho que da el proyecto para avisar de las manifestaciones o reuniones a la autoridad administrativa local.

Se leyó el Artículo 43, que dice:

"Es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal. Las asociaciones y fundaciones podrán obtener su reconocimiento como personas jurídicas."

Este artículo fue aprobado mediante una modificación del H.C. Silvera, de mera forma, y quedó así:

"Es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral social o al orden legal, las cuales podrán obtener su reconocimiento como personas jurídicas."

Se leyó el artículo 44, que dice:

"Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio. La Ley podrá exigir título de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesiones".

El C. Silvera presentó un parágrafo del tenor siguiente:

"Parágrafo: El ejercicio de las profesiones liberales no está sujeto a gravámen alguno, excepto el impuesto sobre la renta que esas profesiones produzcan."

Observó el H.C. Fábrega que, a juicio del Convencional/Tejeira presente en la reunión, y el suyo, no es la profesión lo que puede o no ser gravable, sino su ejercicio, y que por lo demás está de acuerdo con el parágrafo Silvera.

El H.C. de la Rosa manifestó que él creía que lo relativo al pago del impuesto sobre la renta está demás.

Luego de un cambio de opiniones de los comisionados Fábrega, López y León, de la Rosa, Silvera, Pérez y el Secretario se convino en modificar todo el artículo en la forma siguiente:

“Artículo 44.—Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio. La Ley podrá exigir título de idoneidad y reglamentar su ejercicio, el cual queda sujeto a la inspección de las autoridades en lo relativo a moralidad, seguridad y salubridad públicas. Parágrafo: No se podrá establecer impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y los oficios de artesano”.

Se leyó el Artículo 45, que dice:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los funcionarios públicos, por motivos de interés social o particular, y el de obtener pronta resolución”.

Fué aprobado.

Se leyó el Artículo 46, que dice:

“Los ministros de los cultos religiosos no podrán ejercer ningún cargo público, civil o militar, con excepción de los que se relacionen con la asistencia social o la enseñanza pública.”

Fué aprobado.

Se leyó el Artículo 47, que dice:

“Las leyes no tendrán efecto retroactivo. En materia criminal, la ley favorable al reo tendrá siempre preferencia y retroactividad, aún cuando ya hubiese sentencia ejecutoriada.”

El H. C. de la Rosa solicitó al respecto la opinión de los juristas de la Comisión, especialmente en lo que se refiere a la retroactividad de la Ley en materia penal, y expresó el concepto de que para él, sociólogo, la pena es solamente un instrumento didáctico.

El H.C. Pérez dijo que en materia de retroactividades era necesario ir muy despacio pues hay asuntos, como la investigación de la paternidad, el *status* de los hijos llamados ilegítimos y otros, en los cuales quizás quepa también emplearla.

El H.C. Fábrega sostuvo el principio consignado en el Artículo de retroactividad en materia penal.

El Secretario Turner observó que según él también en materia social las leyes tienen o deben tener efecto retroactivo.

El H.C. Pérez en abono de esta tesis citó el caso de retroactividad establecido por la Asamblea Constituyente cuando la Resolución Simons de pagar el día 14 de Julio a todos los trabajadores nacionales y particulares fué modificada por los diputados Ramírez y Boyd en el sentido de que también debe pagárseles los días feriados que señala el Poder Ejecutivo.

El H.C. Fábrega modificó el Artículo como sigue:

“Artículo 47.—Las leyes no tendrán efecto retroactivo, excepto aquellas de orden público o de interés social. En materia criminal, la ley favorable al reo tendrá siempre preferencia y retroactividad, aún cuando ya hubiese sentencia ejecutoriada.”

Con esta modificación el artículo fué aprobado.

Se suspendieron para ulterior consideración los Artículos 48 y 49.

Fué aprobado el Artículo 50, que dice:

“Artículo 50.—Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por la Ley, podrá haber expropiación, mediante sentencia judicial y justa indemnización previa”.

Se leyó el Artículo 51, que dice:

“En caso de guerra, grave perturbación del orden público y otros casos de emergencia que exijan medidas rápidas el Poder Ejecutivo podrá decretar la expropiación o la ocupación de la propiedad privada y la indemnización podrá no ser previa. Cuando fuere factible la devolución del objeto ocupado, la ocupación será temporal y sólo por el tiempo que existan las circunstancias que la motivaron”.

Luego de un intercambio de opiniones habido entre los Convencionales de la Rosa, López y León, Fábrega, Silvera y el Secretario, fué aprobado con la siguiente modificación:

“Artículo 51.—En caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente, que exijan medidas rápidas, el Poder Ejecutivo podrá decretar la expropiación o la ocupación de la propiedad privada y la indemnización podrá no ser previa. Cuando fuere factible la devolución del objeto ocupado, la ocupación será sólo por el tiempo en que existan las circunstancias que la motivaron, etc.”

Fué aprobado el Artículo 52, que dice:

“Artículo 52.—Todo autor o inventor gozará de la propiedad exclusiva de su obra o invención, por el tiempo que determine la Ley y en la forma que ella establezca.”

Luego de una discusión exhaustiva en que tomaron parte los comisionados de la Rosa, Fábrega,

ga, Silvera y el Secretario, fué aprobado, con la siguiente modificación el Artículo 53:

"Artículo 53.—En caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz o el orden público se podrá declarar en estado de sitio toda la República o parte de ella mediante la suspensión temporal o parcial o total de los efectos de los artículos 26, 27, 29, 30, 32, 41, 42 y 48. El estado de sitio será decretado por la Asamblea Nacional si estuviere reunida. Sino lo estuviere, por el Poder Ejecutivo, mediante decreto firmado por todos los Ministros de Estado y miembros de la Comisión Permanente de aquélla, la cual se convocará en ese mismo Decreto, para que decida lo que estime conveniente, en un término no mayor de 5 días. Al cesar la causa, la Asamblea, si estuviere reunida y el Consejo de Gabinete si no lo estuviere levantarán el estado de sitio."

Se cerró la sesión a las siete y veinte minutos de la tarde.

El Presidente,

HARMODIO AROSEMENA F.

El Secretario,

D. H. Turner.

NARRACION DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION ENCARGADA DE ESTUDIAR EL PROYECTO DE CONSTITUCION EL DIA 6 DE AGOSTO DE 1945 .

(Presidencia del Honorable Convencional
Dr. Harmodio Arosemena F.)

A las 4:30 p.m., en el despacho de la Secretaría General de la Honorable Asamblea Constituyente se reunieron los miembros de la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución elaborado por los Jurisconsultos Doctores Ricardo J. Alfaro, José D. Moscote y Eduardo Chiari.

El Presidente ordenó al Sr. Secretario pasar lista y respondieron a ella los siguientes convencionales: Harmodio Arosemena F., Abilio Bellido, Esther Neira de Calvo, Diógenes de la Rosa, José Isaac Fábrega, Agustín Ferrari, Jacinto López y León, Felipe O. Pérez, Didacio Silvera. De fuera del seno de la comisión asistieron los Honorables Gregorio de los Ríos, Nicolás Sagel, Homero Ayala P., Amado Boutet y Gil Blas Tejera.

El Sr. Presidente advirtió que se iba a posponer una vez más el estudio del problema sobre el tapete.

El Honorable Fábrega le preguntó si se refería al problema de nacionalización y extranjería.

El Sr. Presidente le respondió que varios comisionados le habían pedido se pospusiera el estudio del Título II.

El Honorable Fábrega observó que no debería tratarse la cuestión religiosa sino hasta cuando estuviera presente el honorable de la Rosa que tenía su punto de vista. Dijo que consideraba debería seguirse adelante con el trabajo para presentar a la Cámara siquiera 50 artículos por lo menos aprobados, porque de lo contrario se enfrascarían en largas discusiones sobre la labor de ellos y aunque el caso sería sostenido gallardamente por el Presidente Arosemena, tomaría mucho tiempo informarles el porqué no habían avanzado más en su trabajo.

El Sr. Secretario informó que tenía un resumen condensado de lo actuado por la comisión para que la misma lo presentara a la Cámara en pleno.

El Sr. Presidente dijo que le parecía muy bien como informe de comisión, pero que habría que adicionarlo con lo que se discutiera en esta sesión.

El Sr. Secretario contestó que naturalmente.

El Honorable López y León: Sobre la cuestión religiosa el honorable de la Rosa presentó aquí un artículo para su discusión y, para los efectos de discusión, yo también he preparado una modificación a la proposición del honorable de la Rosa, que me voy a permitir poner en manos de los comisionados, para que cuando llegue el momento de discutir se tenga en cuenta para su respectivo estudio. Quedan en secretaría, además, las otras copias para cada uno de los comisionados.

El Honorable Fábrega pidió se leyera el último punto del informe que había leído el señor Secretario.

El Honorable Fábrega dijo: Pregunto si no sería conveniente, porque aumente la cantidad de trabajo, que se mencionara que se entró en la discusión de los artículos tales y tales y que se presentó una moción en el sentido de que después de un debate en que se ahondó sobre la materia, se resolvió discutir el problema y que entonces se incluya con la sesión de hoy. Se podría añadir que el honorable López y León presentó una fórmula sobre esos artículos y que mientras se estudia la fórmula de López y León, se continuaría la discusión de los otros artículos de las Garantías Individuales; que se haga la relación total de toda la labor que hemos realizado.

El Sr. Secretario informó que tenía cuatro actas listas y que casi todas eran extensas. El Honorable Fábrega aconsejó que se prescindiera de su lectura hasta que se reiniciaran las sesiones.

El Sr. Presidente pidió se leyera el artículo 41. El Sr. Secretario leyó el artículo 41.

El Sr. Secretario manifestó que prepararía un proyecto de informe de comisión, que se los presentaría para que se discutiera y luego sacarlo en limpio.

El Honorable Fábrega le contestó que él consideraba se le podía dar un voto de confianza, que lo leído no necesitaba más que el *introito* y el final.

Se puso en discusión el Artículo 41.

La Honorable Sra. de Calvo observó que el colega Tejeira le parecía que si no podría decirse en lugar de "toda persona", "cualquiera persona", que lo último le parecía más claro.

El Honorable Fábrega: Me parece —a pesar de que mi castellano es deficiente— que la expresión "cualquiera" es mejor que "toda".

La Honorable Sra. de Calvo modificó en ese sentido.

El Honorable Fábrega anunció que en relación con la libre expresión del pensamiento él quería presentar una adición a este artículo, en que se refiere a la emisión libre del pensamiento por los empleados públicos. Cuando sigamos con el título de garantías individuales presentaré esta moción.

La Honorable Neira de Calvo: Es para preguntar al Honorable Fábrega, si entrarán los maestros, los educadores, en su modificación.

El Honorable Fábrega: Con respecto a los maestros entiendo yo que hay un problema especialísimo; por lo tanto yo no voy a hacer mención específica del caso de los maestros; eso podría discutirse con el Sr. Crespo cuando se discuta la cuestión del magisterio. Podríamos redactarlo en una forma que dé margen a que se establezca un régimen especial para el maestro, si los técnicos en la materia lo consideran conveniente.

Considero que el funcionario público, en una lucha eleccionaria, debe tener la absoluta libertad de expresar su pensamiento respecto al problema político. Por lo tanto, como he dicho, me reservo el derecho de presentar una adición en lo que se refiere a los empleados públicos para la expresión libre de sus ideas políticas pensando yo en determinadas excepciones forzosas. Creo que dentro de un sistema democrático todo empleado público debe tener libertad de expresar su pensamiento. He enunciado el problema solamente, no entraremos en la discusión de él.

El Honorable López y León: Alrededor de de esta modificación, cábeme decir, que a propósito, tengo en mis manos la Constitución española que me parece redactada por hombres eruditos en la materia, y se emplea el término "todo", "Todo español", "toda persona"... Me parece que modificar por modificar no es el objeto, si ese es un término corriente.

El Honorable Fábrega sugirió consultar el diccionario.

El Sr. Secretario observó que el artículo 42 también decía "todos los habitantes"

El Honorable Fábrega pidió un minuto de receso hasta que llegase el diccionario.

El Honorable de la Rosa manifestó que "toda" debería ser la palabra.

El Honorable Fábrega leyó las definiciones "toda" y "cualquiera" y la Sra. de Calvo dijo que la primera palabra era la adecuada. Enseguida retiró su modificación.

El Honorable de la Rosa: Creo que no se debe poner "tranquilidad pública" porque se presta a abusos por parte de las autoridades, me parece mejor poner el orden público.

El Sr. Presidente, el honorable Fábrega y el Honorable Silvera se mostraron de acuerdo.

El Honorable Silvera: La tranquilidad pública es sencillamente quitarle el sueño a una persona. El orden público es mejor.

Fué aprobada la modificación. Fué leído el artículo 42.

El Honorable Silvera: Yo modifico el artículo única y exclusivamente en cuanto al término de 48 horas, que me parece muy largo, reduciéndose a 24 horas. No veo por qué tenga que ser 48 horas.

El Honorable de la Rosa: Cuando discutíamos el proyecto de organización del ministerio de previsión, yo redacté un artículo en el cual se establece que la sección de "inspección y estadística", nuevo nombre de la que ahora se llama "organización obrera", debería registrar toda empresa para proteger a los obreros y se ofreció el problema de las sociedades deshecho.

El Honorable Fábrega dijo que debería llevarse un registro especial. Hizo referencia a la cámara de comercio, y que cada cual es responsable de las operaciones.

Fué leído el artículo 43.

El Honorable Fábrega: En la forma como está redactado el artículo 43, parece que se eliminara a las compañías mercantiles del derecho de obtener personería jurídica. Se podría modificar poniendo "todas ellas podrían obtener su reconocimiento como personas jurídicas".

El Honorable Silvera: En atención a la explicación del Honorable Fábrega quisiera modificar el artículo en esta forma: "las cuales podrán obtener su reconocimiento como personas jurídicas", porque aquí dejan fuera las compañías.

Fué leído el Artículo 44.

El Honorable Silvera presenta parágrafo que fue leído por secretaría.

El Honorable Silvera: La idea mía es que no puede gravarse la profesión de una persona, es decir, el derecho a trabajar.

El Honorable Fábrega: Todo lo estamos haciendo sujeto a posterior revisión; entonces, por qué no aprobamos el artículo así? Mientras cada cual puede consultar lo mejor? Porque en otra forma, no van a faltar elementos profesionales que digan que no están obligados a pagar ese impuesto. Es muy distinto leer el artículo, a oír las explicaciones que se pueden dar aquí; por lo tanto, se puede interpretar en distintas formas. Yendo a la vida práctica, nunca se consulta la fuente de una disposición; y vamos a tener una posibilidad de interpretación enredada sobre la materia. Pido que se apruebe provisionalmente; en esta forma, averiguaremos después para no redactarlo con interpretaciones erróneas. Sería doloroso, desde el punto de vista económico y fiscal, que un comerciante no pagara la patente.

El Honorable Silvera: Lo que me movió a ponerle el impuesto sobre la renta era simplemente para enfocar la cuestión al ejercicio de la profesión, porque en esa forma se ve claramente que nosotros debíamos pagar por lo que ganáramos en nuestro trabajo.

La patente comercial la pagan los comerciantes y esa se transmite a sus herederos, pero todos no podemos transmitirla. Me parece que es mejor: "no causará gravamen alguno el ejercicio de las profesiones liberales". Yo modifiqué la primera parte y me parece que no hay confusión porque es claro el pensamiento. Puse así: "El ejercicio de las profesiones no está sujeto a gravamen alguno." Después, modifíquela como quieran.

El Honorable Fábrega: Yo me manifiesto de acuerdo con Silvera y pido que se apruebe provisionalmente, salvo posteriores modificaciones.

El Sr. Secretario sugirió y leyó fórmula redactada por él.

El Honorable de la Rosa pidió se incluyeran las profesiones y oficios.

El Honorable Fábrega: Propongo: "No habrá obligación de pagar impuestos o contribución como requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones liberales y oficio de artesano". Ahora, si ustedes encuentran clara la primera proposición, soy el primero en aprobarla.

El Honorable López y León dijo que se pusieran profesiones liberales y oficios.

El Honorable de la Rosa definió los oficios.

El Honorable Fábrega dijo que le parecía doloroso que los artesanos pagaran patentes.

El Honorable Silvera: Sobre todo cuando el comerciante le transmite la patente a sus herederos. Un amigo me decía ahora mismo que en la Oficina de Rentas Internas hay una gran cantidad de médicos, y dentistas sobre todo que no han querido pagar nunca la patente profesional, que los que la han pagado siempre son los abogados.

El Honorable Pérez: Cómo se evita que un médico ejerza? Hay gran cantidad de médicos que no han querido pagar nunca la patente profesional y la mayoría de los que pagan son los abogados. Cuando un abogado no ha pagado la patente lo dejan sin derecho a ejercer, en cambio a los médicos, quién puede evitarles que ejerzan?

Me parece que vale la pena tomar en cuenta la sugestión de Turner. Mañana supónganse que, si de acuerdo con la cuestión de la interpretación de que hablaba Fábrega, es necesario adoptar alguna medida, se puede prestar a interpretaciones torcidas.

Un punto de éstos es: si nosotros no explicamos allí que se trata de evitar que el pago de la patente que se habrá de exigir sea posterior, podría decir el Poder Ejecutivo que la patente no ha quedado excluida.

Yo estoy de acuerdo con la modificación que presenta Turner en la cual dice que el pago de la patente es posterior al otorgamiento de ella.

El Sr. Secretario pidió a López y León revisara la Constitución de Venezuela, pues allí contemplaron el problema.

El Sr. Presidente pidió se buscara la definición del término *artesania* sugerido por de la Rosa y no encontrándosese en el diccionario, el Honorable Fábrega dijo que se pusiera "oficios de artesano".

El Honorable de la Rosa sugirió: "no podrá establecerse impuesto previo".

A sugerencia del Honorable Fábrega se le quitó la palabra "necesario" y a petición del Honorable Silvera la palabra "requisito".

Fué aprobado el artículo con las modificaciones del Honorable Silvera, de la Rosa y Fábrega, quedando así:

"Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio. La Ley podrá exigir títulos de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesiones y oficios, el cual queda sujeto a la inspección de las autoridades en lo relativo a moralidad, seguridad y salubridad públicas.

No se podrá establecer impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y oficios de artesanos".

Fue leído el Artículo 45.

El Honorable Silvera: Debe agregarse la palabra "consulta" la Constitución de 1904 tenía consultas.

El Honorable Fábrega: Toda petición envuelve una consulta, me parece que "petición" es lo genérico.

Fué aprobado el artículo. Fue leído el Artículo 46. También fué aprobado. Fue leído el artículo 47.

El Honorable de la Rosa: Respecto a este artículo quisiera oír a los juristas.

El Honorable Pérez: Con respecto a este artículo yo quisiera que los honorables colegas de la comisión vayan con un poco más de calma.

• Yo entiendo que hay casos de orden público en que tal vez en una Constitución de tipo moderno, como la que vamos a darle a Panamá, se permite la retroactividad de la ley no solamente en asuntos penales y además de eso tenemos por ejemplo, casos como el *status* de los hijos llamados naturales y de los llamados legítimos. Entiendo que hay un artículo que aplica igualdad entre los hijos naturales y legítimos ante la ley respecto del permiso de la investigación de la paternidad. No creen ustedes que sería discriminatorio consignar un principio de esa índole de ahora en adelante sin que se resolviera el *status* de la actual generación? Habría casos, por ejemplo en donde valdría la pena estudiar si conviene establecer ciertas excepciones, para darle retroactividad de esa índole que no es propiamente de materia penal.

Yo miro el asunto ya como la posibilidad de que surja una duda entre ese artículo y éste otro cuando llegue la hora de aplicar los principios constitucionales. Vamos a estudiarlo: por eso yo he planteado aquí el caso relativo al *status* de los hijos llamados naturales y legítimos. Como he planteado ese caso puedo plantear otros.

El Honorable de la Rosa dijo que él era un aficionado a estas cuestiones del establecimiento de retroactividad de la ley en materia criminal que no concebía la sentencia como instrumento de regeneración.

El Honorable Fábrega: Si el Derecho Penal Moderno está tendiendo cada día más a considerar esto como un problema científico por lo cual el concepto medioeval de la pena drástica va esfumándose, y se establece que la ley favorece al reo, usted no cree que esto lo que significa prácticamente es que mañana o pasado cuando venga una ley nueva que establezca sanción menos severa, para un caso, es obligación atender el caso anterior a esa reglamentación menos severa y sin embargo si se toma a la contraria, hay un peligro enorme de que entre la influencia? Pero me parece que el concepto de humanidad, debería establecer que es la tendencia de la pena que dice, que en caso de duda, se va en favor del reo. Considero que la pena no debe ser sino de

dos años, porque el delito se comete dentro de la vigencia de la ley anterior.

El Honorable Silvera dijo que la ley de retroactividad estaba consignada en todas partes del mundo.

El Sr. Secretario opinó que en materia social si tiene efecto retroactivo, y que de la Rosa quería se favoreciera al reo.

El Honorable de la Rosa: Es que justamente, yo no concibo la sentencia en términos de severidad. No es más que una idea que tengo y sólo la presento para que se discuta.

El Honorable Fábrega: El Honorable de la Rosa, viendo ciertas posibilidades las critica, pero yo digo que si no valdría la pena salvar ese principio por algo de equidad? Creo que contra cualquier circunstancia que se pudiera presentar, mucho más pesa la circunstancia del elemento "injusticia" que significaría que a todo individuo que comete un delito bajo determinado régimen legal, tendría que castigársele con 20 años de presidio. Yo veo las posibilidades que usted prevé, pero creo que más pesa el principio de equidad que resulta en los otros casos que en los casos que lo mueven a usted a meditar sobre el artículo. Yo estoy de acuerdo con el Honorable Silvera en que hasta donde lo recuerdo, esta disposición es bastante general. En América entera creo que existe.

El Honorable Silvera le contestó que era clásica

El Honorable Pérez: Quiero citar un caso concreto en que ya nosotros por tratar de una cuestión que se consideró de orden público, más que todo una cuestión de orden social mejor dicho, le dimos retroactividad a una disposición de la Cámara cuando Simons propuso que se considerara día feriado el 14 de Julio; hice una modificación a favor de los obreros de planilla del Gobierno y de los empleados de comercio, vino una sub-modificación de Ramírez Duque incluyendo a los industriales; después vino una sub-modificación de Boyd trayendo el 24 de Julio a los demás días feriados señalados por la Cámara, se discutió entre el 4 y el 14 un caso en que le dimos retroactividad en materia que no es penal.

Yo voy directamente contra este enunciado que tiene carácter rotundo y donde las leyes no tendrían efecto retroactivo. Yo lo que pido es que se suspenda la discusión de este artículo.

El Honorable Fábrega sugirió una fórmula de 1941.

El Honorable Silvera preguntó si habría que suprimir el artículo 49.

El Honorable Fábrega le dijo que todo podría considerarse en un sólo artículo.

Fue puesta en discusión la modificación Fábrega y aprobada.

El Honorable de la Rosa: Hemos aprobado el 47 pero para armonizarlo con el 48 lo hemos aplazado para después, para discutirlo junto con el 49.

Fue leído el artículo 50.

El Honorable de la Rosa pidió al Honorable López que leyera la Constitución Española.

Fue leído el artículo 51 relacionado con el anterior. Fue puesto en discusión el 50.

La Honorable Sra. de Calvo hizo una sugerencia: "en caso de guerra... mediante sentencia judicial y previa indemnización etc. etc."

El Sr. Secretario le advirtió que en cuestiones sociales no se puede usar *previa*.

El Honorable Fábrega dijo que al poner "previa la aprobación" podría ser un instrumento formidable de atropello, que concretar era la forma; la Sra. de Calvo dijo que ella no opinaba que se suprimiera *previa*.

El Honorable Fábrega manifestó que la palabra "justa" era necesaria.

Fue aprobado el artículo 50. Fue leído el artículo 51.

El Honorable de la Rosa hizo una sugerencia en la redacción así: "En caso de guerra... o de interés social que exijan medidas rápidas", la condición "que exigen medidas rápidas" lleva la idea de urgencia.

El Honorable López y León: Y se le podría dejar también "y otros casos de emergencia"

El Honorable Fábrega: Entiendo que no son términos catalogados como tales, porque acepto que haya algunas distinciones. Yo pregunto, en qué consiste, prácticamente, para nosotros el "estado de emergencia" si se suprime esta garantía, porque en ese caso, ahí mismo está la definición (lee el artículo 52). Con la palabra "mediante" traemos implícitamente la discusión. Me parece que el asunto es interesante. De manera que ya se sabe que entre nosotros la declaración de estado de sitio sencillamente consiste en la suspensión total o parcial de estos artículos. Hay más: así queda asegurada la interpretación máxima, que es lo peligroso, de la palabra "sitio". Es una observación que me ha hecho el Honorable Tejeira; decía él que si nosotros tenemos en la mente la forma como planeamos el artículo, conservar la comisión que ha de asesorar al Ejecutivo en facultades extraordinarias, no convendría establecer para esa medida provisional del Ejecutivo ante la emergencia, que la firma del Gabinete vaya acompañada de la comisión o comisiones, porque me parece que habría dos comisiones, una fiscal y otra económica.

El Honorable de la Rosa advirtió que parecía que el interés social se grave. Surgió "de interés social urgente"

El Honorable Tejeira dijo que no había afinidad entre "urgencia y emergencia".

El Sr. Secretario dijo que *urgencia* tenía un valor conocido y el honorable Tejeira leyó la definición.

El Honorable Fábrega dijo que tendría que consultarse la terminología jurídica.

El Sr. Presidente puso en discusión la modificación de la Rosa y fue aprobada.

Fue leído el artículo 52. Fue aprobado. Fue leído el artículo 53.

Como el artículo leído mencionaba otros, el Honorable Fábrega pidió que se leyera y el secretario leyó el 1er. acápite de cada uno. Fue puesto en discusión el artículo 53.

Después de una larga discusión entre de la Rosa, Fábrega, El Secretario y Silvera, en que unos y otros ensayaron varias fórmulas para este artículo fue aprobado en la siguiente forma, a modificación de Fábrega y de la Rosa:

"En caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz o el orden público se podrá declarar en estado de sitio toda la República o parte de ella mediante la suspensión temporal o parcial o total de los efectos de los artículos 26, 27, 29, 30, 32, 41, 42 y 48. El estado de sitio será decretado por la Asamblea Nacional si estuviere reunida. Sino lo estuviere, por el Poder Ejecutivo, mediante decreto firmado por todos los Ministros de Estado y miembros de la Comisión permanente de aquella, la cual se convocará en ese mismo Decreto, para que decida lo que estime conveniente, en un término no mayor de 5 días. Al cesar la causa, la Asamblea, si estuviere reunida y el Consejo de Gabinete si no lo estuviere levantarán el estado de sitio".

A las 6 y 35 minutos de la tarde, el Sr. Presidente de la comisión dió por clausurada la sesión.

ACTA

de la duodécima sesión de la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente.

A las cuatro y cincuenta y cinco minutos de la tarde del día nueve de agosto de mil novecientos cuarenta y cinco, se reunió la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución, integrada por los siguientes comisionados que contestaron a lista: Harmodio Arosemena F., Presidente; Abilio Bellido, Esther Neira de Calvo, Diógenes de la Rosa, José Isaac Fábrega, Agustín Ferrari, Jacinto López y León y Didacio Silvera. Dejó de asistir con excusa el H.C. Felipe O. Pérez. De

fuera del seno de la Comisión estuvieron presentes los Honorables Homero Ayala P. y Gil Blas Tejeira.

1o. Se leyeron por secretaría y fueron debidamente aprobadas con ligeras modificaciones que se verificaron sobre el texto de la misma, las actas correspondientes a los días 27 y 30 de Julio y 1º, 3 y 6 de Agosto.

2o. El Presidente abrió la discusión sobre la modificación presentada por el H.C. de la Rosa relativa al artículo 39 del Proyecto, modificación que dice:

"Se garantiza la libertad de conciencia, así como la libre profesión, difusión y práctica de toda religión que no sea contraria a la moral social o al orden público, ni predique ideas o inculque sentimientos adversos al mantenimiento y desarrollo de las instituciones democráticas y el respeto debido a las leyes y funcionarios del Estado.

Parágrafo. Las confesiones, sectas y organizaciones religiosas se regirán por la Ley que regule la formación y reconocimiento de las personas jurídicas."

• El H.C. de la Rosa, en uso de la palabra, continuó sustentando su punto de vista expuesto en la sesión anterior y contestando algunas objeciones que sus palabras habían suscitado. Manifestó que los Convencionales Neira de Calvo y Fábrega abrigaban la idea de que él es un cleróforo o anticlerical, pero que ello no resulta cierto; que, todo lo contrario, considera que para combatir la religión es preciso valerse, por así decirlo, de un circunloquio; que su posición a este respecto es la que indica el marxismo, ateo por definición, porque considera que en la religión entra el proceso de emancipación del hombre en su lucha por ascender a niveles más humanos de convivencia social, pero que una posición ideológica tal, no implica una táctica de eliminación fulminante. Apoyó su tesis en algunos conceptos expresados por el Profesor Morris Ginsberg, de la Universidad de Londres en su "Manual de Sociología" (editorial Lozada S. A. Buenos Aires). Agregó que, no obstante ser este autor de tendencia liberal, digno continuador del Profesor Hobhouse, a quien el liberalismo le debe las más interesantes contribuciones teóricas, coincidía en sus puntos esenciales con la posición marxista en que el dicente se encuentra colocado. Dijo, una vez más, que no va contra la Iglesia, sino que está sosteniendo el clásico principio liberal de la separación de la Iglesia del Estado. Se sostiene, continuó, que la mayoría de los panameños es católica y que este hecho se produce algo así como por generación espontánea; pero se desconocen las enseñanzas de la historia según las cuales es un hecho incontrovertible que si en América existe el catolicismo ello se debe a que por artes políticas él fué introducido en este Continente por los conquistadores españoles, como por artes políticas fué introducido el protestantismo en los Estados Unidos de Norteamérica. El H.C.

Pérez arguyó, sostiene que la religión es necesaria como freno para contener la desmoralización tan visible en nuestra tierra; prueba de la inocuidad de este argumento, contestó el H. C. de la Rosa, es que la práctica del catolicismo no ha logrado entre nosotros los fines que le atribuye el H.C. Pérez. Se ha dicho que se debe mantener el artículo según lo consignaron los próceres de 1904 en la Constitución de ese año; dejando de advertir que ella eludió calculadamente todas las materias controvertibles entre los dos partidos que contribuyeron a su formación y que fué destinada en su fondo a cumplir una función de apaciguamiento, que no corresponde a las exigencias de nuestros tiempos. Hoy, dijo, para concluir la Iglesia es militante política en todas partes, lo fué particularmente durante la Revolución Española y lo es en la actualidad en toda la América Latina, Panamá incluso. Es necesario que la Iglesia y sus agentes de toda jerarquía se replieguen a ejercer su ministerio en los sitios reservados al culto y que no interfieran ni con las funciones ni evadan los deberes que tienen para con el Estado. Para que ello sea así, finalizó, necesario es mantener incólume la fórmula liberal de la Iglesia libre en el Estado libre.

Hecha esta exposición, el H.C. de la Rosa manifestó que pasaba por la pena de tener que retirarse debido a compromiso urgente anterior, y los CC. Bellido y Fábrega opinaron que en ese caso debería suspenderse el acto para continuarlo después. Así se acordó.

El Presidente, de acuerdo con varios miembros de la Comisión, señaló el martes siguiente para continuar la discusión del Artículo 12 del Proyecto, con vista de las modificaciones presentadas por el H.C. Fábrega.

A las seis y veinticinco minutos de la tarde fué suspendida la sesión.

El Presidente,

HARMODIO AROSEMENA F.

El Secretario,

D. H. Turner.

NARRACION DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION ENCARGADA DE ESTUDIAR EL PROYECTO DE CONSTITUCION EL DIA 9 DE AGOSTO DE 1945

(Presidencia del Honorable Convencional Dr. Harmodio Arosemena F.)

A las 4:55 p.m. en el despacho de la Secretaría General de la Honorable Asamblea Constituyente se reunieron los miembros de la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución elaborado por los jurisconsultos Doctores Ricardo J. Alfaro, José D. Moscote y Eduardó Chiari.

El Presidente ordenó al Secretario General pasar lista y respondieron a ella los siguientes Convencionales: Harmodio Arosemena F., Abilio Bellido Esther Neira de Calvo, Diógenes de la Rosa, José I. Fábrega, Agustín Ferrari, Jacinto López y León y Didacio Silvera. Dejó de asistir con excusa el Honorable Felipe O. Pérez. De fuera del seno de la Comisión asistieron los Honorables Homero Ayala y Gil Blas Tejeira.

El Secretario leyó el acta undécima y puesta en discusión fue aprobada.

El Presidente se refirió a moción del Honorable de la Rosa relativa al Artículo 39.

El Secretario advirtió que aún tenía cuatro actas más que leer, y el Presidente ordenó su lectura.

Fue leída el acta décima y el Convencional Fábrega hizo una objeción en el párrafo que dice:

“Que el liberalismo luchó por un Estado fuerte y ahora ha mudado de práctica”.

Pidió se pusiera:

“El liberalismo en sus inicios luchó por un Estado fuerte y después fue un tanto más laxo, pero ahora ha vuelto de nuevo a la noción de Estado fuerte intervencionista”.

La Honorable Esther Neira de Calvo: Al discutirse el delicado punto, de si debía legislarse sobre el problema religioso, hablé de la Constitución de los Estados Unidos de América, de cómo esta Constitución trata el problema. Hice cita para reforzar mi defensa en favor de la idea, que sí debe legislarse sobre esta materia.

Tampoco se hace mención en el acta de esta intervención mía, y yo le solicito, señor Secretario, que quede igualmente constancia de ella.

Fué Aprobada el Acta.

Fué leída el Acta 9ª.

La Honorable Esther Neira de Calvo: Señor Secretario, permítame hacer una observación. Cuando se leyó el artículo 33 que dice: “No habrá pena de muerte. Tampoco podrá imponerse pena de destierro a los panameños”, recuerdo que propuse una enmienda para que el artículo se lea así: “No habrá pena de muerte ni de destierro”. Fue aceptada mi proposición, y el artículo se aprobó con mi enmienda. En la sesión siguiente, el Honorable Tejeira propuso, por conducto de la Secretaría, que se cambiara la palabra “destierro”, por “expatriación”, y que se le agregara al artículo lo siguiente: “ni de confiscación de bienes”. Ambas enmiendas fueron aprobadas por la Comisión, pero el acta no hace mención de estas actuaciones.

El Secretario le respondió que en una acta constaba la modificación así:

“No habrá pena de muerte, de expatriación, ni de confiscación de bienes”.

Pero que se haría la rectificación.

Fué aprobada el Acta 9ª.

Fue leída y aprobada el Acta 8ª.

El Secretario continuó la lectura del acta 7ª y puesta en discusión fue aprobada.

El Presidente advirtió que había pendiente una modificación del Convencional de la Rosa en relación con el Artículo 39.

Fué leída la modificación y puesta en discusión.

El Honorable Diógenes de la Rosa: Esta discusión continúa la que se suspendió hace algunos días y por ello ahora, al sustentar nuevamente mi artículo, tendré que referirme a las objeciones y controversias que suscitó la vez pasada. Sin embargo, deseo hacer una declaración inicial que me parece de suma importancia. Aunque tanto uno como otra expresaron que no era ese el sentido de sus objeciones a mi modificación, Doña Esther Neira de Calvo y el licenciado José I. Fábrega parecen tener en el fondo de su conciencia o de su pensamiento, la idea de que yo soy un clerófobo o un político anticlerical. Quiero expresar que ni una ni otra cosa. Mi concepto de la religión, al que me referí la vez pasada, tiene una consecuencia práctica; la de que para luchar contra la religión como religión, el camino más corto es justamente el camino más circunloquial, por decirlo así. Como bien lo decía el licenciado Fábrega, la parcialidad política a la cual pertenezco tiene una doctrina que es el marxismo. Los marxistas creemos que la religión nace de condiciones sociales que se reproducen, transformadas, a través de la evolución histórica y que desaparecerán cuando esas condiciones sean eliminadas. De manera que para nosotros la lucha contra la religión no es una mera lucha contra la religión sino contra las condiciones sobre las cuales surge, se expande y perdura. Porque la religión dificulta, desvía, el esfuerzo del hombre por su propia redención.

Para nosotros los marxistas, la religión como lo decía el licenciado Fábrega, haciendo una cita en Engels, es un producto del temor inicial, del desamparo, de la impotencia del hombre frente a la fuerza de la naturaleza. A través del desarrollo de la humanidad, a medida que la fuerza del hombre ha ido domando las fuerzas naturales, mediante el conocimiento del mecanicismo de las leyes que rigen el mundo natural, se manifiesta en un plano diferente esa impotencia; ese temor, ese desamparo del hombre. Ahora se enfrenta a las complicaciones sociales que se le aparecen revestidas de una fatalidad que él no es capaz de dominar o controlar.

Me voy a permitir leer aquí unos párrafos bastante largos que corroboran este punto de vista

pero que no son obra de un marxista, aunque coinciden en la concepción marxista precisamente porque representan el punto de vista de la ciencia contemporánea, ya que el marxismo está colocado dentro de la corriente más firme del pensamiento y la investigación científica.

Quiero advertir, repito, que esta cita no es la de un marxista, sino la de un profesor de la Universidad de Londres, que es liberal y que dentro del pensamiento sociológico continúa la brillante tradición de Hobhouse, a quien se debe precisamente uno de los compendios más exactos que se han hecho sobre el liberalismo. El Profesor Ginsbrug dice: (lee).

Quiero decir, pues, que al proponer que no se legisle en materia religiosa, quería llegar a la conclusión más lógica: la separación de la iglesia del estado, que es uno de los postulados que articula el pensamiento liberal, que viene insertado, adherido de modo inseparable a lo que el pensamiento liberal tiene de más fundamental. No he pretendido con este artículo ir contra la iglesia católica, ni contra ninguna iglesia, sino llevar a su más exacta formulación el principio de la separación de la iglesia y el estado, que debe tener como consecuencia la separación de la iglesia de la escuela.

Se ha dicho aquí, para justificar la redacción del artículo del proyecto respecto a la religión, que existe una realidad indiscutible y es que la mayoría de los panameños pertenecen a la confesión católica. Pareciera cuando se hace esta afirmación que ese hecho se ha producido por sí mismo, por que existe —si me voy a permitir mostrarme escéptico con respecto a ella— es un producto de factores políticos largamente operantes. La religión de la América a la llegada de los españoles era la religión totémica de las razas autóctonas. La imposición de la religión católica en América fue un proceso político, coercitivo y la perduración de la religión se nutre de los mismos elementos. De suerte que esa realidad se ha producido, si existe, en virtud de factores políticos. No podemos desconocerlo. Por eso el reconocimiento de ese hecho estadístico no debe implicar la adopción de fórmulas constitucionales que lo erigen en realidad intangible e invariable.

Estoy seguro que así como la religión penetró en la América por medios políticos, como la religión protestante se impuso en los Estados Unidos por recursos también políticos, una acción política como la que preveo, de carácter marxista, podría eliminar o reducir el predominio absoluto que aquí se le atribuye a la religión católica.

Se ha dicho aquí por el Honorable Pérez, me voy a referir a esta objeción sin dejar de remarcar que no estoy tratando de desarrollar ni de imponer los fundamentos de una campaña anticlerical en Panamá, que es necesario fomentar la religión, decía el Honorable Pérez, porque la re-

ligión es un vínculo moral y que él atribuía la inmoralidad de ciertas clases a la indiferencia religiosa, a la falta de religión.

Si la religión católica ha usufructuado desde la colonia, el predominio en la conciencia del pueblo, tenemos que llegar a la conclusión de que no es en lo absoluto un vínculo moral, ni una fuerza de control moral. El mismo hecho de que se habla con tanta frecuencia, la mayoría de la confesión católica, desmiente o descalifica esa objeción que hace el colega Pérez. Se dice también que es necesario dejar la formulación del artículo para no contradecir lo que determinaron los próceres de 1904. Al hacer esta afirmación se incurre en el mismo yerro de índole histórica que cuando se habla del predominio del catolicismo. Todos sabemos que la República se hizo en las condiciones de un armisticio político. Los próceres de la República quisieron eludir todas las medidas incontrovertibles. Uno de los motivos de disensión, —a pesar de que ya el liberalismo no se definía tan antirreligioso, como observaba hace algunos días el licenciado Fábrega— entre liberales y conservadores fue la cuestión religiosa. Sin embargo, la formulación del artículo, como casi todo el texto de la constitución de 1904, fue consecuencia de un compromiso entre liberales y conservadores. Puede que ese artículo tuviera en esos tiempos una función apaciguadora, pero esa función se ha cumplido ya y no es necesario que la nueva constitución siga manteniendo esa declaración estadística, porque en las actuales circunstancias su consecuencia práctica sería que al mismo tiempo que declaramos que el estado panameño no tiene religión oficial, que alejan por la puerta grande con toda religión oficial, toda confesión impuesta por el estado, la introducimos por la ventana o por la puerta trasera del edificio constitucional. Y la consecuencia en ésta: la enseñanza religiosa en las escuelas. Un estado laico no puede dar enseñanza religiosa.

Esta debe darse en los lugares propios de cada doctrina, porque el estado que declara que no tiene religión oficial, no puede enseñar religión.

Voy a terminar pidiendo a la comisión que acepte la fórmula que yo he presentado para el artículo 39 que comienza por garantizar la libertad de conciencia, cosa a la cual no puede negarse ningún liberal. Debe ser todo ciudadano libre para creer en lo que quiera creer o para no creer en nada. Debe establecerse la libertad de predicación, de difusión, de organización de la religión, pero a condición de que esa religión no perjudique la moral ni el orden público.

En mi intervención pasada dije que la religión es una fuerza o un hecho social, como Uds, quieran llamarlo, de tendencia "totalitaria" y que justamente por ser un concepto total sobre la vida, sobre el mundo en que vivimos, o por ejercer dominio espiritual sobre los hombres, la religión

como dogma, doctrina concreta, o como organización positiva, se liga y roza con el estado en las etapas aurales de la evolución política, el gobernante, de tal modo que el desarrollo político puede resumirse en cierta etapa como la lucha por la secularización del poder político, por el apartamiento del estado de la religión. Si se tratara de ese sólo artículo estaría bien hasta el aparte que yo acabo de leer, pero ha ocurrido que en el período histórico que hoy recorremos en que la iglesia católica se ha convertido en un recio poder económico, ha tratado consecuentemente de asegurarse la influencia política, aprovechando el púlpito para fines meramente políticos. La iglesia ha sido iglesia militante, el púlpito se ha convertido en instrumento de propaganda, de combate contra el estado que no quiere que la religión intervenga en la política, ni la política en la religión.

En Panamá también hemos visto cosa semejante y no podemos negar tal realidad. Durante el período de la revolución española, la religión que se reclama de Jesucristo se predicaba la acción y la repudiación contra la república liberal española y contra las mismas provisiones laicas de la constitución de 1904. Si la iglesia se concreta a difundir nociones morales y religiosas, a defender sus dogmas y la predicación de deberes y la práctica de sus ritos, el estado no tiene por qué preocuparse. Pero el estado no puede jamás permitir que el púlpito se convierta en tribuna política. No hay, pues, por qué temerle en lo absoluto a la fórmula que yo presenté aquí en sustitución del artículo 39.

El Honorable de la Rosa anunció que tenía que retirarse y que pues había expuesto su pensamiento, que acordasen lo que estimaren conveniente, si seguirlo discutiendo o aplazar su discusión hasta que él estuviera presente.

El Honorable Abilio Bellido: A mi me parece que como yo tengo que hacer objeciones a lo expuesto por el Honorable de la Rosa, es muy justo que las escuche. Por eso pido que se aplaze esta discusión para la próxima sesión.

El Honorable Fábrega opinó en igual sentido.

El Presidente de común acuerdo con varios miembros señaló el martes para la discusión del Artículo 12.

Se suspendió la sesión a las seis y veinticinco minutos de la tarde.

ACTA

de la decimotercera sesión de la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente.

A las cinco y quince minutos de la tarde del día catorce de Agosto de mil novecientos cuarenta y cinco, se reunió la Comisión del Estudio del Pro-

yecto de Constitución, integrada por los siguientes Comisionados que contestaron a lista: Har-modio Arosemena F., que preside; Abilio Bellido, Esther Neira de Calvo, José Isaac Fábrega, y Didacio Silvera. Dejaron de asistir con excusa los HH. CC. Diógenes de la Rosa, Agustín Ferrari, Jacinto López y León y Felipe O. Pérez. De fuera del seno de la Comisión estuvieron presentes los Honorables Convencionales Homero Ayala P. y Gil Blas Tejeira.

1o. Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

2o. El Presidente abrió la discusión de los artículos 39 y 40 del Proyecto de Constitución. El Secretario leyó la modificación introducida al artículo 39 por el H.C. de la Rosa, pendiente desde la sesión anterior, y advirtió que tenía en su poder una submodificación del H.C. López y León, que a la letra dice:

“Artículo 39. Es libre la profesión de todas las religiones así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana, a la libertad de conciencia, al orden público y a la Ley.

Se podrá enseñar la religión católica en las escuelas públicas, pero su aprendizaje no será obligatorio para los alumnos cuando así lo soliciten éstos, sus padres o tutores. La Ley dispondrá los auxilios que se deban prestar a dicha religión para misiones a las tribus indígenas y para otros fines análogos.”

En vista de que ninguno de los dos Comisionados proponentes asistía al acto, el Presidente, suspendió la discusión sobre esta materia para continuarla después, y ordenó para su consideración la lectura del Capítulo 2º, Título III, artículo 54 del Proyecto original, que dice:

“Artículo 54. La Ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes deberes y derechos de éstas, con sujeción a las siguientes reglas:

1ª. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos de los cónyuges y podrá ser disuelto de acuerdo con lo que disponga la Ley;

2ª. La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres en relación con sus hijos. La Ley regulará su ejercicio sobre la base del interés social y en beneficio de los hijos;

3ª. Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos y éstos a respetar y asistir a sus padres. La Ley asegurará el cumplimiento de estos deberes con garantías y sanciones adecuadas;

4ª. Los padres tienen para con sus hijos habidos fuera del matrimonio los mismos

deberes que respecto de los nacidos en él;

5ª La Ley regulará la investigación de la paternidad;

6ª La Ley proveerá lo necesario y conveniente para la debida protección de la maternidad y de la infancia, y para el desarrollo moral, intelectual y físico de la niñez y de la juventud;

7ª El Estado velará por el fomento social y económico de la familia y podrá organizar el patrimonio familiar, determinando la naturaleza y cuantía de los bienes que deban constituirlo, sobre la base de que será inalienable y estará al amparo de toda persecución judicial."

El Honorable Tejeira por conducto del Secretario propuso una modificación a la regla 6ª en el sentido de suprimir la frase "lo necesario y conveniente", quedando en consecuencia como sigue:

"6ª La Ley proveerá para la debida protección de la maternidad y de la infancia y para el desarrollo moral, intelectual y físico de la niñez y de la juventud."

Esta modificación fué aprobada, pero a petición del H.C. Silvera se suspendió la discusión de todo el capítulo con el fin de presentar él una modificación a alguna de las reglas que lo forman.

Se puso a discusión el Capítulo III, del mismo Título, artículo 55, que dice:

Artículo 55. El trabajo es un derecho y un deber del individuo. El Estado empleará los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación a todo el que carezca de ella y asegurará a todo trabajador, manual o intelectual, especialmente a los obreros y campesinos, las condiciones económicas necesarias a una existencia decorosa."

El Honorable Tejeira por conducto del Secretario sugirió suprimir del artículo la frase "manual o intelectual", especialmente a los obreros y campesinos", quedando por tanto así:

Artículo 55. El trabajo es un derecho y un deber del individuo. El Estado empleará los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación a todo el que carezca de ella y asegurará a todo trabajador las condiciones económicas necesarias a una existencia decorosa."

Esta modificación fué aprobada.

Se leyó el artículo 56, que dice:

Artículo 56. Todo trabajador manual o intelectual al servicio del Estado o de empresas públicas o privadas, o de individuos particulares, tendrá garantizado un salario o sueldo mínimo que la Ley determinará atendiendo a las condiciones de cada región

y a las necesidades normales del trabajador en el orden material, moral y cultural.

La Ley establecerá la manera de regular periódicamente los salarios o sueldos mínimos por medio de comisiones paritarias para cada rama del trabajo, de acuerdo con el nivel de vida y con las peculiaridades de cada región y de cada actividad industrial, comercial, o agrícola.

En los trabajos por ajuste o precio alzado será obligatorio que quede racionalmente asegurado el salario mínimo por jornada de trabajo.

El mínimo de todo salario o sueldo es inembargable, salvo las responsabilidades por pensiones alimenticias en la forma que establezca la Ley.

Son también inembargables los instrumentos de labor de los trabajadores."

Este artículo fué aprobado con una modificación del H.C. Fábrega en el sentido de suprimir del primer párrafo la frase "manual o intelectual" y la palabra "racionalmente" del penúltimo, quedando consecuencialmente así:

Artículo 56: Todo trabajador al servicio del Estado o de empresas públicas o privadas, o de individuos particulares, tendrá garantizado un salario o sueldo mínimo que la Ley determinará atendiendo a las condiciones de cada región y a las necesidades normales del trabajador en el orden material, moral y cultural. La Ley establecerá la manera de regular periódicamente los salarios o sueldos mínimos por medio de comisiones paritarias para cada rama del trabajo, de acuerdo con el nivel de vida y con las peculiaridades de cada región y de cada actividad industrial, comercial o agrícola.

En los trabajos por ajuste o precio alzado será obligatorio que quede asegurado el salario mínimo por jornada de trabajo.

El mínimo de todo salario o sueldo es inembargable, salvo las responsabilidades por pensiones alimenticias en la forma que establezca la Ley. Son también inembargables los instrumentos de labor de los trabajadores."

El artículo 57 fué aprobado luego de una discusión suscitada por el H.C. Fábrega, que lo estima obscuro y en su favor por los Convencionales Neira de Calvo, Silvera, y Tejeira por conducto del secretario, quedó así:

"Artículo 57. A trabajo igual en idénticas condiciones corresponderá siempre igual salario, cualesquiera que sean las personas que lo realicen."

A moción del secretario se suprimió el penúltimo párrafo del artículo 58 y quedó aprobado así:

"Artículo 58. Se reconoce el derecho de sindicación a los patronos, empleados privados y obreros para los fines exclusivos de su actividad económica o social. El Poder Ejecutivo no puede disolver un sindicato sino cuando se aparte de sus fines exclusivos y así lo declare el tribunal competente por sentencia firme."

El artículo 59 fué aprobado con la eliminación de su última parte solicitada por el H.C. Fábrega y quedó así:

"Artículo 59. Se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los patronos al paro conforme a la regulación que la Ley establezca."

El artículo 60 quedó como sigue, de acuerdo con una modificación de la H.C. Neira de Calvo.

"Artículo 60. La Ley regulará el sistema de contratos colectivos de trabajadores, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para patronos y trabajadores.

Serán nulas y no obligarán a los contratantes, aunque se expresen en un convenio de trabajo u otro pacto cualquiera las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, adulteración o dejación de algún derecho reconocido a favor del trabajador en esta Constitución o en la Ley.

También fué aprobado el artículo con una modificación de forma hecha por el H.C. Fábrega, y quedó así:

"Artículo 61. La Ley regulará la inmigración, atendiendo al régimen económico nacional y a las necesidades sociales. Se prohíbe la contratación de braceros que puedan rebajar las condiciones de trabajo o las normas de vida del obrero nacional".

El artículo 62 fué aprobado textualmente y dice:

"Artículo 62. Ningún patrono podrá despedir a un trabajador sin justa causa y sin las formalidades que establezca la Ley"

A moción del Secretario se suspendió la consideración del artículo 63 con el fin de presentar una modificación más comprensiva.

A las seis y quince de la tarde, hora en que las sirenas de la ciudad anunciaron la rendición del Imperio del sol naciente a las naciones aliadas, se suspendió la sesión.

El Presidente,

HARMODIO AROSEMENA F.

El Secretario,

D. H. Turner.

NARRACION DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION ENCARGADA DE ESTUDIAR EL PROYECTO DE CONSTITUCION EL DIA 14 DE AGOSTO DE 1945

(Presidencia del Honorable Convencional Dr. Harmodio Arosemena F.)

A las 5 y 15 minutos de la tarde, en el despacho de la Secretaría General de la Honorable Asamblea Constituyente se reunieron los miembros de la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución elaborado por los juriconsultos Dres. Ricardo J. Alfaro, José D. Moscote y Eduardo Chiari.

El señor Presidente ordenó al señor Secretario pasar lista y respondieron a ella los siguientes Convencionales: Harmodio Arosemena F., Abilio Bellido, Esther Neira de Calvo, José Isaac Fábrega y Didacio Silvera, dejaron de asistir los Honorables Jacinto López y León, Agustín Ferrari, Diógenes de la Rosa y Felipe O. Pérez. De fuera del seno de la Cámara estaban presentes los Honorables Homero Ayala P. y Gil Blas Teixeira.

Se lee el acta de la sesión anterior y es aprobada.

El Honorable Arosemena: Entiendo que continúa la discusión sobre el tema religioso, es decir, sobre lo estipulado en los artículos 39 y 40 del Proyecto. Sirvase leer el artículo del Honorable López y León, señor Secretario.

El señor Secretario lee la modificación de la Rosa y observa que el Honorable López y León había presentado una modificación para considerarla paralelamente con la leída. Advierte que ninguno de los dos está presente.

El Honorable Fábrega: Yo, pensando acerca del punto en discusión y del cual ha hecho mención ahora mismo el señor Secretario, no estando presente ni el señor de la Rosa ni el señor López y León, se me antoja, si no sería lo más conveniente, suspender la discusión hasta tanto estén presentes los dos compañeros, y seguir con nuestro trabajo.

El Honorable Arosemena: Lo hace en forma de proposición, honorable Fábrega, para ponerla a consideración de la Comisión?

El Honorable Fábrega: Lo hago en forma de proposición categórica.

El Honorable Arosemena: Ha sido aprobada la proposición Fábrega.

El señor Secretario comienza la lectura del capítulo 2º que trata de la Familia. Lee el artículo 54.

El Honorable Arosemena: En discusión el artículo 54.

El Honorable Teixeira: Pido la venia a la Presidencia para hacer una modificación al apar-

té 6º del artículo en el sentido que se suprima "lo necesario o conveniente".

El Honorable Silvera: Con respecto al Artículo 54º, que se refiere al matrimonio y a la patria potestad, y a los deberes de los padres para con sus hijos, yo tengo una proposición que hacer a estos artículos y se la dí al Honorable de la Rosa, pero como él no está aquí, y considero que es importante el punto que voy a tratar, pido lo mismo que el colega Fábrega: que se suspenda la discusión de este artículo hasta que venga el Honorable de la Rosa para recobrar mi proposición y entonces presentarla, porque realmente no me acuerdo en la forma en que está concebida. Por eso le agradecería mucho a los Honorables colegas que aplazaran la discusión de este artículo, pues quiero introducirle alguna modificación.

El Honorable Arosemena: Aprueba la comisión la proposición del Honorable Silvera? Ha sido aprobada.

El señor Secretario continúa con la lectura del Capítulo 3º del Código del Trabajo. Se lee el artículo 55.

El Honorable Fábrega: Yo doy mi voto de aprobación a este artículo, sujeto a una ligera modificación con respecto a determinadas expresiones que deben compaginarse con ese título; pienso presentar algunas observaciones en relación al problema del campesino.

El señor Secretario informa que el Honorable Tejeira sugiere que se suprima "manual e intelectual", pues así se aludirá al trabajador en general.

El Honorable Fábrega: Estoy de acuerdo con esta sugerencia y pido se haga caso omiso de lo que anteriormente dije.

El Honorable Arosemena: Entonces se aprueba el artículo 55º sin objeción?

El Honorable Fábrega: Sí.

Se lee el artículo 56º.

El Honorable Arosemena: Esta es la primera parte del artículo. Vamos pues, a discutir, la primera parte de él. Todo trabajador quitándole "manual e intelectual". Sírvase darle lectura a la segunda parte señor Secretario.

El Honorable Fábrega: No entiendo el adverbio "racionalmente" qué significa. Si va a haber un salario mínimo para regiones, esto va a ser una cosa matemática y no racional. Esta palabra está de más y viene a entorpecer el sentido.

El Honorable Silvera: Con esta palabra pasa lo mismo que con "requisito", por la que tanto luché yo aquí.

El Honorable Arosemena: En votación el artículo 56º: ha sido aprobado. Sírvase leer el artículo 57º, señor Secretario. En discusión el artículo 57º.

El Honorable Silvera: En este caso si yo me encargo de un juicio de divorcio y el Honorable Fábrega de otro, nos pagarían igual por nuestro trabajo? Yo presentaré una proposición en el sentido de que se elimine tal medida porque a pesar de que se contrata un mismo trabajo, no todos los abogados cobramos lo mismo, ya que algunos lo hacen dentro de la tarifa y otros lo ejecutamos fuera de ella.

El Sr. Secretario dijo: En todos los códigos del trabajo se encuentra basado este principio. Tengo en casa como siete códigos de trabajo que podría traerlos para ilustrar.

La Honorable Sra. de Calvo: A mí me parece que esto va contra el derecho individual.

El Honorable Fábrega: Yo quiero hacer una pregunta, a pesar de que no tengo interés especial; pero si se asegura el salario mínimo para el obrero que ya se sabe que esté resguardado para que no se le oprima económicamente; y si el salario mínimo es de B/. 3.00 y le ofrezco a mi carpintero B/. 7.00, eso significa que mi obligación es pagarle a todo el que llegue a hacerme un trabajo de carpintería B/. 7.00? Yo no me opongo a este artículo, lo que quiero es que se me explique. Es que me parece que estableciendo el salario mínimo, queda un margen para la confianza que una persona tenga en la habilidad de otro para ofrecerle más de ese salario mínimo. Lo que me parece es que este artículo es una traba para ofrecer más dinero a determinada persona del mínimo que se ofrece.

El Sr. Secretario lee la exposición de Motivos y manifiesta que no sólo este artículo existe en la Constitución cubana sino también en los Códigos y Convenciones del Trabajo.

La Honorable Sra. de Calvo: Esto no está claro; así como está redactado se entiende que ganarían igual por igual trabajo.

El Honorable Fábrega: La primera parte es fundamental; la demás es de desarrollo legal.

El Honorable Tejeira: Conozco casos concretos, en San Blas, de maestros a quienes se les paga sólo B/. 30.00 por el sólo hecho de ser indígenas; estas discriminaciones son realmente irritantes.

La Honorable Sra. de Calvo: Señor Presidente, precisamente en los días pre-eleccionarios visité el Ministerio de Gobierno y reconocí entre el grupo de personas que deseaban ver al Sr. Ministro, a Luisa Iglesias, la primera india de la Comarca de San Blas que se graduó de Maestra de Enseñanza Primaria, cuando yo dirigía la extinguida Escuela Normal de Institutoras. Siempre me ha interesado el problema de la integración del indio a nuestra cultura, y de manera especial la influencia que puede ejercer la india en esta labor, y creo que por la formación de maestros y de maestras puede realizarse una

labor acertada. Me informó esta ex-alumna, que el objeto de su visita era pedirle al Sr. Ministro, que le pagaran el mismo sueldo que el Estado paga a las maestras con grado, porque ella, por ser india, desde que se graduó, en el año de 1932, le pagaban sueldo igual al de las maestras no graduadas. Cuánta injusticia señor Presidente? Les aseguro, señores Delegados, que esa india habla el español como ustedes, y que está tan bien preparada como las maestras tituladas que enseñan en las demás escuelas primarias de la República. Esta es, colegas, irregularidad que debe corregirse y que la Constitución debe evitar. El hecho de ser india no es razón para que, en circunstancias iguales, esta maestra reciba distinta remuneración por su trabajo eficiente.

El Honorable Arosemena: A trabajo, igual, igual remuneración.

El Honorable Bellido: A mí me parece que viene a satisfacer una necesidad formal de la mujer.

El artículo 57 dice: Cualquiera que sea, puede ser hombre o mujer.

El Honorable Arosemena: En discusión el artículo, ha sido aprobado.

Se lee el artículo 58.

El Secretario pide que se busque en el diccionario la definición de sindicación o sindicalización.

Se leen ambas definiciones y se acepta que está bien empleado el término sindicación.

El Honorable Tejeira: A mí me parece que se han excluido las actividades intelectuales. Los abogados pueden también asociarse; los periodistas también.

El Honorable Fábrega: El periodista es un obrero.

El Honorable Bellido: Por lo menos según dice el Honorable Fábrega, por ejemplo, se supone un reporter con cierta preparación y esto es distinto a un reporter común.

El Honorable Arosemena: Búscuese en el diccionario lo que significa la palabra "obrero".

En discusión la primera parte del artículo. Ha sido aprobada.

Se lee la 2a. parte del artículo.

El Sr. Secretario: Indudablemente no hay necesidad de poner 30 días; pero lo demás puede quedar en el artículo.

El Honorable Fábrega: Si todo se suprime, será materia de ley entonces.

El Honorable Arosemena: Aprobada la segunda parte del artículo; discutiremos lo que

vendría siendo la tercera, sin el acápite último. Cómo queda el artículo ahora, Sr. Secretario?

Se lee el artículo 59.

En discusión el artículo 59.

El Honorable Tejeira: ¿Qué es un servicio público?

El Honorable Bellido: Ahora mismo tenemos una huelga de telefonistas y esto es un servicio público.

La Honorable Sra. de Calvo: ¿Por qué no se pone "servicios del Estado" en vez de "públicos"?

El Honorable Fábrega: Yo pondría "servicios públicos del Estado".

La Honorable Sra. de Calvo: En el artículo 55, se suprimen las palabras "manual o intelectual"? En el artículo 59, la palabra "trabajador" no tiene la misma aceptación que en el 55? Los maestros pueden ir a la huelga?

El Sr. Secretario: En todas las convenciones se ha acordado no permitir huelgas en los servicios del Estado.

El Honorable Fábrega: Si nosotros aceptamos aquí que una telegrafista no puede declararse en huelga, debemos aceptar también que un empleado de la Fuerza y Luz tampoco puede hacerlo, porque son pocos los servicios públicos que están en manos del Estado aún ciertos de tanta transcendencia como los que están en manos del Estado. La luz tal vez es de más transcendencia que el telégrafo. Yo creo que no debemos hacer mención de esto. De lo contrario, nos vamos a meter en una serie de definiciones que va a alargar este articulado. Por qué no ponemos, "Conforme a la regulación que la ley establezca"? Ahí queda comprendido todo.

El Sr. Secretario pregunta: si se le quita "no se hacen huelgas".

El Honorable Tejeira: El Estado no trabaja con fines de especulación.

El Sr. Secretario: Yo sugiero se suprima el último párrafo y se deje a la ley que regule la materia.

El Honorable Arosemena: Ha sido aprobado el artículo con la modificación del H.C. Fábrega.

Se lee el artículo 60.

En discusión el artículo 60.

El Sr. Secretario: Yo diría "a favor del trabajador" para incluir al campesino.

La Honorable Sra. de Calvo: Yo propongo que se cambie en todos los artículos la palabra "obrero" por "trabajador".

El Presidente Jurado: A este artículo hay que cambiarle la palabra "obrero" por "trabajador". Pero hay que presentarlo en forma de proposición. Que la presente la Honorable Calvo.

Ha sido aprobada la modificación de la Sra. de Calvo y con ella el artículo 60.

Se lee el artículo 61.

En discusión el artículo 61.

El Honorable Fábrega: Este artículo creo que le han puesto aquí por las compañías extranjeras; que es un problema primordial; que porque el hijo del país cobra más por su trabajo, traen un gran elemento de fuera. Dentro de nuestra historia económica es de importancia el aparte e). Está bien que se le cambie la redacción si encuentran que está mal. Yo creo que cuando ponemos la Chiriquí Land Co., la United Fruit Co., esto significa una gran salvaguarda.

El Honorable Arosemena: Aprobado el artículo 61.

Se lee el artículo 62.

En discusión el artículo 62.

Fué aprobado el artículo 62.

Se lee el artículo 63.

El Honorable Tejeira: Las comisiones paritarias vienen siendo como juzgados, porque son apelables.

El Sr. Secretario: Esto es conflicto para el trabajo.

La ley reglamentará las funciones de esas comisiones.

El Honorable Fábrega: Si nada más es el funcionamiento de esa comisión, la organización parece eliminar la posibilidad de otra instancia. Es decir, dentro de la fórmula que Ud. ha sugerido, quedaría eliminada la posibilidad de la creación del Tribunal. En todas las partes del mundo hay más de una instancia.

El Sr. Secretario pide se suspenda la discusión para resolver el asunto después, que allí no hay artículo que hable de ella ni de la judicatura del trabajo, y que en la próxima sesión se traería algo que completara el artículo.

El Presidente preguntó: Está conforme la sesión con que se posponga la discusión de este artículo?

El Honorable Tejeira pide la lectura del artículo 56.

El Secretario: Este no es el lugar que le corresponde al artículo.

El Honorable Fábrega: En la cuestión relativa a los Tribunales no concretemos; hablemos sencillamente del Tribunal de Arbitraje. La misma ley determinará las instancias; dejemos el problema de las instancias a la ley.

El Honorable de la Rosa manifiesta que allí está la idea del salario mínimo, que los demás artículos son reglamentarios.

El Honorable Fábrega dice que el artículo habla de salario mínimo.

El Secretario manifiesta que allí está enunciado el principio. Vuelve a leer.

El Honorable Silvera dice que él cambiaría "el deber" por "estar obligado".

El Honorable Fábrega: El artículo 56 habría que modificarlo también? Pero se trata de una repetición.

El Presidente pone en discusión la modificación del Honorable de la Rosa, adicionada por el Honorable Silvera y es aprobada.

Se reconsidera el artículo 56.

Se lee el acápite primero.

El Honorable Fábrega: Me parece que es un complemento dentro del mismo artículo. Para que pase a ser párrafo del artículo 55 me parece que hay que arreglarlo.

El Honorable de la Rosa dice que el artículo 56 pasa a ser párrafo del 55 y que hay que coordinarlo con el párrafo siguiente.

Se aprueba el párrafo leído que viene siendo la primera parte del artículo 56.

Es aprobado.

El Honorable de la Rosa: Voy a proponer un artículo en el cual se establece la jornada de 8 horas diarias, (actualmente existe la jornada de 8 horas diarias) por ley, pero esa ley no se cumple.

El Secretario advierte que esto naturalmente sería sin perjuicio de los mineros o de las personas que trabajan en regiones insalubres.

El Honorable Fábrega opina que resulta un poco vago eso para término de ley.

El Honorable de la Rosa: dijo que luego se especificaría para las diferentes profesiones, para panaderos etc.

El Honorable Fábrega: Qué opina usted Honorable de la Rosa de las jornadas periodísticas? En Panamá hay carencia de linotipistas y muchos tienen que trabajar las ocho horas. Esos trabajadores deben tener dos turnos.

El Honorable Ferrari lee disposición de la Constitución mejicana.

El Honorable de la Rosa manifiesta que las horas extraordinarias serían remuneradas con sobrecargo.

El Honorable Fábrega: Qué trabajos hay en Panamá que la mujer nuestra no pueda desempeñar? Lo más práctico sería prohibirles el trabajo nocturno. Porque si ella va a trabajar en fruterías, por ejemplo, el problema del hogar quedaría en una forma igual. Lo mucho que he leído, y lo digo en una forma sincera, me demuestra

tra que la mujer está capacitada, está facultada para trabajar a la par del hombre. Por qué nosotros vamos a contrariar este principio?

El Honorable Neira de Calvo: Por ejemplo, después de las ocho de la noche? Quiere decir, pues, que ninguna mujer puede trabajar después de esa hora, en un almacén, frutería o teatro? Creo que prohibirle el trabajo por el sólo hecho de ser mujer, puede constituir problema de injusticia social.

Si una mujer se presenta a solicitar trabajo en una oficina que trabaja de noche, es porque tiene su vida arreglada en tal forma, que le permite ausentarse del hogar para trabajar a esas horas. En los restaurantes de los Estados Unidos, aún en los que están apartados de las ciudades, hay mujeres que trabajan de noche.

Es que hay personas que trabajan de noche y no de día porque circunstancias especiales les imponen este horario de trabajo. Por eso le hacía la pregunta, colega de la Rosa, con respecto a la hora, porque insisto en que la mujer sí puede trabajar de noche, y está capacitada para hacerlo, y debe recibir justa remuneración. No soy partidaria de que se le prohíba el trabajo nocturno a la mujer. La ley debe reglamentarlo.

El Honorable de la Rosa dice que está la mujer fisiológicamente impedida.

El Honorable Fábrega dice que él no tiene interés en que se prohíban a la mujer los trabajos nocturnos.

El Honorable de la Rosa dice que la prohibición del trabajo nocturno no era tanto por incapacidad física, como por medida de protección hacia el hogar y los hijos y que en Panamá casi siempre el trabajo nocturno es fuente de prostitución por la escasa remuneración.

El Secretario sugiere se suspenda la discusión hasta tanto se documenten mejor.

A las 6.35 p.m. el Presidente de la Comisión declara clausurada la sesión.

ACTA

de la décimocuarta sesión celebrada por la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente.

En el despacho del Secretario General se reunió la Comisión de Constitución para seguir considerando el Proyecto sometido a su estudio, siendo las cuatro y treinta de la tarde del día dieciseis de Agosto de mil novecientos cuarenta y cinco. Contestaron a lista los comisionados Harmodio Arosemena F.; que preside; Abilio Bellido, Esther Neira de Calvo, Diógenes de la Rosa, José Isaac Fábrega, Agustín Ferrari y Didacio Silvera; dejaron de asistir con excusa los comisionados Jacinto López y León y Felipe O. Pérez, y de

fuera del seno de la Comisión estuvieron presentes los Honorables Homeño Ayala P. y Gil Blas Tejeira.

1o. Leída el Acta de la sesión anterior, fué aprobada.

2o. El Presidente, de acuerdo con la Comisión, mantuvo suspendida la consideración de las dos modificaciones propuestas por los comisionados de la Rosa y López y León a los artículos 39 y 40 del Proyecto de Constitución, debido a ausencia justificada de este último.

3o. Se leyó el artículo 54, que había quedado pendiente a petición del comisionado Silvera para introducirle una modificación. El comisionado Silvera presentó la siguiente a la regla 1a.:

1a. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos de los cónyuges y podrá ser disuelto de acuerdo con lo que disponga la Ley. Esta señalará sanción para quienes desconozcan la institución del matrimonio civil.

Esta regla, así adicionada, fué aprobada, luego de merecer el apoyo de su autor, del comisionado Fábrega y del Secretario.

Fué aprobada la regla 2a. que dice:

2a. La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres en relación con sus hijos. La Ley regulará su ejercicio sobre la base del interés social y en beneficio de los hijos.

La regla 4a. fué aprobada con una modificación aditiva, del comisionado de la Rosa y luego de un cambio de puntos de vista entre los comisionados de la Rosa, Fábrega, Neira de Calvo y el Secretario. Quedó así:

"Todos los hijos tienen el mismo derecho hereditario en las sucesiones intestadas".

La regla 5a. fué aprobada textualmente, y dice:

5a. La Ley regulará la investigación de la paternidad.

El H.C. de la Rosa presentó una regla que debe seguir a la 5a. y que dice así:

"La unión de hecho entre personas legalmente capacitadas para contraer matrimonio mantenida durante diez años o más en condiciones de estabilidad y singularidad se equipará en todos sus efectos al matrimonio civil".

Se produjo una discusión alrededor de esta disposición en que aún estando en principio de acuerdo con ella algunos comisionados, como Silvera, Fábrega, Neira de Calvo y el Secretario disientan en lo relativo a su redacción. Se aprobó, sin embargo, tentativamente como sigue:

"La unión de hecho entre personas legalmente capacitadas para contraer matrimonio mantenida durante quince años o más en

condiciones de singularidad y estabilidad se equiparará en todos sus efectos al matrimonio civil".

Respecto de la regla 7a. se dispuso, a sugerencia del H.C. Fábrega, que ésta se consignaría en el Capítulo IV, que trata de la Educación Nacional, con una redacción distinta que prepararía el mismo comisionado Fábrega.

El H.C. de la Rosa introdujo dos artículos nuevos, que fueron aprobados, y cuyo texto es como sigue:

"Artículo... El Estado proveerá a la crianza y educación de los menores que carezcan de parientes obligados a proporcionárselas, o cuyos padres o tutores estén económicamente incapacitados para hacerlo".

"Artículo... Los menores de edad descañados o delincuentes estarán sometidos a una legislación especial de vigilancia y protección".

Sobre la primera de estas disposiciones el H.C. Fábrega se reservó hacer un estudio definitivo en lo referente a la tutoría.

Se dispuso igualmente suprimir el *intento* formado por la primera parte del artículo 54 y que cada regla de ese artículo constituyese de por sí un artículo.

Se puso de nuevo en consideración el artículo 58, que dice:

"Artículo 58. Se reconoce el derecho de sindicación a los patronos, empleados privados y obreros, para fines exclusivos de su actividad económico-social.

El Poder Ejecutivo no podrá disolver un sindicato sino cuando se aparte de sus fines exclusivos y así lo declare el tribunal competente por sentencia firme.

Las directivas de estas asociaciones estarán integradas exclusivamente por panameños".

A solicitud del H.C. Fábrega se suspendió la consideración de este artículo, con el fin de averiguar las razones que motivaron su inserción en la Constitución Cubana, de donde fue tomado.

El H.C. de la Rosa pidió la reconsideración del Artículo 55 y en su lugar propuso otro redactado así:

"Artículo 55. Todo individuo tiene el deber de trabajar y el derecho a obtener ocupación cuya remuneración sea suficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación, vivienda y cultura. Es obligación del Estado proveer de ocupación remunerada a quienes no puedan obtenerla y darle a todo trabajador las condiciones de una existencia decorosa".

Previo la intervención favorable al principio de los Convencionales Fábrega y Silvera, este

artículo quedó aprobado definitivamente con una modificación de éste último que dice:

"Artículo 55. Todo individuo está obligado a trabajar y a obtener ocupación etc."

A sugerencia del H.C. Fábrega, se dispuso que el artículo 56 pasase a ser parágrafo del 55 y que el dicho 55 quedara como sigue:

"Artículo 55. La Ley establecerá la manera de regular periódicamente los salarios o sueldos mínimos por medio de comisiones paritarias para cada rama de trabajo, de acuerdo con el nivel de vida y con las peculiaridades de cada región y de cada actividad industrial, comercial o agrícola.

En los trabajos por ajuste o precio alzado será obligatorio que quede asegurado el salario mínimo por jornada de trabajo.

El mínimo de todo salario o sueldo es inembargable, salvo las responsabilidades por pensiones alimenticias en la forma que establezca la Ley. Son también inembargables los instrumentos de labor de los trabajadores".

Se aprobó el artículo 56, que dice:

"Artículo 56. Se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y de los patronos al paro conforme a la regulación que la Ley establezca".

El H.C. de la Rosa presentó un artículo nuevo, que produjo un debate en el cual intervinieron su autor, los Convencionales Fábrega, Ferrari, Neira de Calvo y el Secretario, especialmente en lo que se refiere al trabajo nocturno de la mujer. Dice así el artículo:

"Artículo... La jornada de trabajo será de 8 horas diarias y la semanal hasta de 48. La nocturna será de menor duración que la diurna, de acuerdo con las condiciones de trabajo. Las horas extraordinarias serán remuneradas con recargo.

Se prohíbe el trabajo nocturno de los menores de diez y seis años, salvo las excepciones que establezca la Ley.

Por cada once meses de trabajo continuo el trabajador tendrá derecho a un mes de descanso remunerado. Estos descansos sólo serán acumulables por dos años".

Este artículo fué aprobado en principio, sin perjuicio de que su autor, el mismo H.C. de la Rosa, lo presentase después con una redacción más propia.

La sesión terminó a las seis y treinta y cinco de la tarde.

El Presidente,

HARMODIO AROSEMENA F.

El Secretario,

D. H. Turner.

**NARRACION DE LA SESION CELEBRADA POR
LA COMISION ENCARGADA DE ESTUDIAR EL
PROYECTO DE CONSTITUCION EL DIA
16 DE AGOSTO DE 1945**

(Presidencia del Honorable Convencional
Dr. Harmodio Arosemena F.)

A las 4:30 minutos p.m. en el Despacho de la Secretaría General de la Honorable Asamblea Constituyente se reunieron los miembros de la Comisión encargada de estudiar el Proyecto de Constitución elaborado por los jurisconsultos Dres. Alfaro, Moscote y Chiari.

El Presidente ordenó al Secretario General de la Asamblea Constituyente — que es al propio tiempo Secretario de la Comisión, Lcdo. D.H. Turner — pasar lista y respondieron a ella los siguientes Convencionales: Harmodio Arosemena F., Abilio Bellido, Esther Neira de Calvo, Diógenes de la Rosa, José Isaac Fábrega, Agustín Ferrari, y Didacio Silvera. Dejaron de asistir con excusa los CC. Jacinto López y León y Felipe O. Pérez. Estuvieron presentes de fuera del seno de la Comisión los Honorables Homero Ayala P. y Gil Blas Tejeira.

Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

El Convencional Silvera pregunta qué se sabía del Convencional Pérez.

El Honorable Bellido: El Honorable Pérez está trabajando en la Comisión que investiga los haberes del ex-Presidente de la Guardia y su familia, y creo que, posiblemente por esto, no tiene tiempo de asistir a las sesiones.

El Presidente manifiesta que hay dos proposiciones respecto a la cuestión religiosa: una del Convencional de la Rosa y otra del Convencional López y León.

El Honorable Fábrega: Yo sugeriría que se aplazara esto hasta que estén presentes los autores de las mociones.

El Honorable Arosemena: Y por qué no podemos discutir la proposición del Honorable de la Rosa que sí está presente? Cómo dice la moción del Honorable de la Rosa, señor Secretario?

El Sr. Secretario advierte que la una es sustitutiva de la otra. Enseguida lee ambas mociones: la del Honorable de la Rosa y la del Honorable López y León.

El Honorable Fábrega: Yo considero que este problema, como todos los problemas en general que atañen al presente estudio, deben considerarse en forma total; y que entre un aspecto y el otro hay ciertas relaciones que no se pueden dejar a un lado. La proposición del Honorable de la Rosa mantiene un punto de vista y la proposición del Honorable López y León mantiene otro punto de vista y por lo tanto son diferentes. A mí me parece que epara negar o aceptar la pro-

posición del Honorable de la Rosa, por lo mismo que existe esa vinculación de que hablo, es muy conveniente escuchar los puntos de vista del Honorable López y León. Por otro lado, según el orden que llevamos en estos días en que estamos estudiando unos capítulos relacionados con garantías sociales, nada perdemos con dejar el punto de la religión para una sesión aparte. Me permito pedir a la Comisión, se posponga la discusión de este problema dada la ausencia del autor de la enmienda, Honorable López, que es divergente de la proposición del Honorable de la Rosa.

El Secretario lee el Capítulo II del Título III, Artículo 54 de la Familia.

Se lee el acápite 6º y se hace presente la modificación hecha por el Honorable Tejeira en la sesión anterior suprimiendo "lo necesario y conveniente".

El Honorable de la Rosa: Voy a pedir que se aplase la discusión de este artículo. El párrafo 4º propongo que se sustituya por este párrafo: "Todos los hijos tienen los mismos derechos."

El Honorable Silvera: Yo pedí que se aplazara la discusión del artículo 54, con respecto a la familia y al matrimonio porque había pasado una proposición al Honorable de la Rosa en consulta.

El Honorable de la Rosa: Yo no tengo ninguna modificación para la regla 1a.: Considero que la que voy a introducir en la 4a. es de gran importancia para los hijos, a los que dá derechos por igual.

Lee enseguida todas sus modificaciones.

El Honorable Fábrega: No he captado bien el alcance de la modificación. Usted lo que propone es una sustitución, y lo demás como artículos nuevos?

El Honorable Silvera: Pero hay otra proposición que fué redactada con anterioridad. La última que le dí se refiere al matrimonio civil, que es el del Estado, y que debe reconocerse con fuerza legal.

El Sr. Secretario lee la modificación.

El Honorable Silvera: Este artículo no tiene otro objeto que reprimir los abusos que se vienen cometiendo aquí por ciertas instituciones de carácter privado que les ha dado por negar la existencia del matrimonio civil, rechazando los hijos, producto de este matrimonio y eso me parece un atrevimiento, una insolencia. Considero que es contrario a la ley ese rechazo. Hace pocos meses fuí al Hospicio de Huérfanos a ingresar un niño de 14 años nacido en David; llevé una documentación completa y recibí una gran sorpresa cuando me dijo el cura que faltaba un documento importante y necesario.

«¿Dónde está la fé de bautismo?», me dijo. Yo le contesté que ese niño había nacido durante la vigencia del Registro Civil y que por lo tanto no necesitaba de la partida de bautismo; me respondió que si era hijo de matrimonio civil no lo aceptaban. Yo no creo, señores, que ninguno de nosotros como Convencionales, como Miembros de una Asamblea Constituyente, podamos permitir que se tolere semejante insolencia.

Un colegio privado, por encima de las leyes del Estado, rechazando a los hijos del matrimonio civil, es inaceptable para el gobierno, que es la representación del Poder Público. Ese es el objeto de mi artículo.

El Honorable Fábrega: Yo quiero ser legal y no le niego la razón al Honorable Silvera desde el punto de vista de que no hay motivo para que no se acepte en un hospicio a un niño porque es hijo legítimo o natural, de tal o cual matrimonio. Me refiero al aspecto que habla de la prelación del matrimonio civil; pero una vez que el matrimonio sea válido, no puede haber matrimonio de prelación o no prelación; ni puede haber matrimonio clase a), clase b) o clase c); ni matrimonios más importantes, porque ya el Estado lo aceptó.

Si el Honorable Silvera considera que se comete una injusticia o una violación de cualquier principio en las instituciones en las cuales no se acepta una persona por determinada circunstancia, lo más práctico creo que sería concretar en cualquier capítulo que no se pueda rechazar niños o alumnos por razones de nacimiento o de cualquier naturaleza; pero me refiero a la forma de la prelación de los matrimonios, e insisto en que no debe, en que no puede haber, cuestión de prelación matrimonial.

El Honorable Silvera: No tengo inconveniente en que se le quite la prelación. Esa proposición fué redactada precipitadamente y se la di al Honorable de la Rosa sin corregirla, por no haber tenido tiempo. De manera que no tengo inconveniente en aceptar la modificación del Honorable Fábrega.

El Honorable Fábrega sugiere esta modificación: «Las leyes establecerán sanciones a quienes desconozcan el matrimonio civil.»

El Sr. Secretario lee la regla 1a., la que fué modificada por el Honorable Silvera y submodificada por el Honorable Fábrega, quedando así:

1a. «El matrimonio se funda en la igualdad de derechos de los cónyuges y podrá ser disuelto de acuerdo con lo que disponga la Ley; ésta señalará sanciones para quienes desconozcan la institución del matrimonio civil».

Se lee la Regla 2a. y es aprobada.

Se lee la Regla 3a

El Honorable de la Rosa: Creo que el artículo que redacté podrá adaptarse como una adición de este artículo; salvo que Uds. crean que pueda introducirse como un artículo nuevo porque me parece que no se refiere a la regulación del estado civil según lo establece el artículo 54 (lo lee). Más bien podría entrar como un artículo aparte.

El Secretario lee la Regla 4a.

El Secretario lee la sustitución del Honorable de la Rosa al respecto.

El Honorable Fábrega: Yo creo que es mejor dejarlo como un artículo aparte. Yo me he quedado pensando en la observación del Honorable de la Rosa, que entraña el aparte que se acaba de leer. He hecho estas observaciones al ordinal tercero: el ordinal tercero habla de la obligación de los padres de alimentar, asistir e instruir a sus hijos. En vinculación directa con esta parte, el aparte cuarto dice que los padres que ya están obligados, de acuerdo con el aparte anterior, tienen para con sus hijos los mismos derechos; en otras palabras podríamos decir que es un aparte aclaratorio que señala la obligación de los padres para con los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio y de los hijos para con los padres. Por otra parte, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con nuestro código civil, el representante, el que tiene la tutela sobre el hijo, es el padre y en su defecto la madre, lo que constituye la patria potestad. Entonces, ¿qué resulta? Que tenemos esta circunstancia, especialísima: que se pone a los hijos como sujeto de derecho en vez de poner a los padres como sujeto de obligación y ese derecho estaría representado por los mismos padres que son los individuos que precisamente por tener la patria potestad, son los que tienen un derecho que el hijo podrá reclamar con respecto al padre y no lo puede hacer porque resulta que el vocero de él, es el padre.

Me parece, que quedaría mejor poniéndolo en la misma forma como está aquí, porque se pone al padre como sujeto de una obligación.

Desde luego, el deber supone un derecho correlativo del hijo, pero se pone en una forma activa como una obligación del padre. De manera que no es que el hijo pueda reclamar como derecho, porque es una obligación del padre que la tiene permanentemente.

Queda más categórico poniéndolo "como una obligación del padre" que "como un derecho del hijo", que puede reclamar eventualmente, porque el padre es el representante de él, es su vocero y desde luego, si el hijo tiene el derecho pero no lo ha reclamado, puede ser la obligación primordial del padre.

El Honorable Arosemena: Honorable Fábrega, es para que exista la obligación de parte del padre.

El Sr. Secretario pregunta si se sustituye la frase, "habido fuera del matrimonio", etc.

El Honorable de la Rosa: Voy a exponer un problema práctico y deseo que el licenciado Fábrega me lo resuelva. Mi artículo no sólo toca las obligaciones de alimentar, de asistir o educar, sino también la obligación de hacer a los hijos, a cualesquiera que sean, partícipes de los derechos de herencia. Uds. creen que en la forma que está redactado el artículo comprende la circunstancia a que me refiero?

La Honorable Neira de Calvo: Me parece que lo importante es no negar el valor del matrimonio civil. A esto es a lo que usted se refiere? Como dije, lo esencial es que se le dé importancia al matrimonio civil; que se reconozca su valor, al decir, "los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos", se incluyen los hijos habidos fuera del matrimonio?

El Honorable Fábrega dijo que el sistema de herencia "ab intestato" no lo disponían los padres sino la ley.

El Honorable de la Rosa dijo que se pusiera como aparte especial.

El Honorable Fábrega: El padre que tiene hijos naturales y no hace testamento, es porque quiere que todos los hijos tengan el mismo derecho. Parecería ser una relación directa del hijo para con su padre. Se me antoja una repetición. Lo más práctico sería que si la mayoría está de acuerdo con la materia de la herencia que se dijera "categóricamente". No es por espíritu de contradicción, honorable de la Rosa. Usted tiene una idea distinta con respecto a la herencia. Parece algo extraño. Ustedes no encuentran que la fórmula es un poco a la inversa?

El Honorable de la Rosa sugiere una nueva fórmula.

El Honorable Fábrega: Sugeriría hacer una aclaración, en el sentido de que estén en el mismo pie todos los hijos. Pero sin repetir. Porque al decir "todos los hijos están obligados" implica decir "los padres están obligados" e implica un derecho correlativo.

El Presidente pregunta si esto es aditivo al cuarto punto.

El Honorable de la Rosa dice que lo sería al quinto.

El Honorable Fábrega: En el código Civil, en el libro tercero, cuando se está hablando para coordinar las cosas, cuando se habla de la herencia fuera del testamento: el título es el de "ab intestato". Y por qué no lo tenemos? Si se pone "todos los hijos tienen el mismo derecho en la herencia" no se puede entender que mañana no hubiera la libertad de testar.

Se suscitó entonces una larga discusión sobre el asunto de la herencia.

Fué puesto en discusión el ordinal cuarto y aprobado así:

"Todos los hijos tienen el mismo derecho hereditario en las sucesiones intestadas".

El Secretario lee la Regla 5a.

El Honorable Fábrega: A mí me parece que aquí, en este artículo deberíamos agregar, cuanto se refiere a la cuestión de la paternidad, estudiando un artículo que diga que no hay hijo sin padre, porque resulta que en el Registro Civil hay muchos asientos en que apenas consta el nombre de la madre. Es, simplemente que no debe inscribirse un hijo sin padre. De todas maneras un muchacho debe tener padre.

El Honorable Fábrega: Porque para considerar el ordinal quinto, al reclamar esa investigación, sería obligación de la ley poner en juego todos los recursos para que en caso especial, se pueda decir quién es el padre. En este artículo queda comprendido el concepto de que en el Registro aparezca el nombre del padre en cada partida; desde luego este proceso de la paternidad hay que dejarlo a la ley, creo que es un asunto de orden legal.

Es aprobada la Regla 5a.

El Secretario lee la regla introducida por el Convencional de la Rosa que dice:

"La unión de hecho entre personas legalmente capacitadas para contraer matrimonio mantenida durante diez años o más en condiciones de estabilidad y singularidad se equiparará en todos sus efectos al matrimonio civil."

El Honorable Silveira advierte que este artículo ha sido extraído de uno de él.

El Honorable de la Rosa observa que el Secretario hace la observación de que sean más de diez años.

El Secretario dice que a él le gustaría aclarar el punto con el Honorable Fábrega.

El Honorable Fábrega: Me parece que deben aumentarse los años porque luego puede venir una situación enmarañada. Sería conveniente decir que si no existen vínculos matrimoniales, quedan los sentimentales.

El Secretario dice que la institución hay que consignarla.

El Honorable Fábrega opina que debe suspenderse el artículo relativo a matrimonio de hecho para los efectos de redacción.

El Honorable de la Rosa pide se deje por lo menos en una forma intermedia. En 15 años.

La Honorable Neira de Calvo dice que le parece bien diez años.

Se lee la Regla 6a.

El Honorable Fábrega opina que se debe tratar ese asunto en el artículo relativo a la educación nacional. Advierte que él tiene un artículo para sustituir el 67 poco más o menos concebido en los siguientes términos: "Será obligación del

Estado no sólo la educación intelectual, moral y física etc.", si en principio se aprueba, está demás después. Propone que se elimine el ordinal séptimo porque debe estar relacionado con la cultura nacional.

Es puesta en discusión la Regla 7a.

El Honorable Tejeira dice que a él le parece mejor decir "el Estado organizará" en lugar de "el Estado velará".

El Presidente pide que el Honorable Tejeira haga una proposición por conducto del Secretario.

Es aprobada.

Es aprobada la Regla 7a.

El Honorable de la Rosa anuncia que tiene dos modificaciones más que vienen al final del artículo 54. La primera dice:

"El Estado asegurará la crianza y educación de los menores sin parientes obligados a proveérselas o cuyos padres o tutores estén económicamente incapacitados para hacerlo."

El Honorable Fábrega advierte que está repetida la palabra "proveerá".

El Secretario sugiere la palabra "dársela".

El Honorable Bellido sugiere "proporcionarla".

El Honorable de la Rosa pregunta si se objeta la palabra "tutores".

El Honorable Fábrega dice que él tiene que objetarla con respecto a la obligación civil de los tutores.

El Honorable Silvera: Morgan me hace una observación, por conducto del Relator y creo que tiene mucha razón. Hemos aprobado todas las reglas del artículo 54, que dejaron a la ley lo relativo al Estado Civil de las personas. Si dejamos eso a la ley, ello es contrario a lo que se dice abajo, de manera que deberíamos ponerlo como artículo nuevo porque si esta regla se le deja a la ley se desvirtúa todo el proyecto constitucional.

El Secretario sugiere que en lugar de ponerse como regla se ponga como artículo.

El Honorable de la Rosa sugiere que el estado civil se rijá de acuerdo con la siguiente regla (lee la regla).

El Honorable Silvera dice que esto está hecho en forma de mandato.

El Honorable de la Rosa pregunta si se convierten en artículos las reglas se comience con el matrimonio. En seguida presenta un artículo nuevo que dice:

"Los menores de edad descañados o delincuentes, estarán sometidos a una legislación especial de vigilancia y protección".

Es leído el artículo 58.

El Honorable Fábrega observa que este artículo ha sido tomado de la Constitución cubana, que en esa Constitución había el aditamento que dice: "cubano por nacimiento". Que es conveniente ver los anales de la Constitución para ver qué causas habían motivado ese aditamento.

El Honorable de la Rosa: Soy partidario de que siga adelante ya que las causas se pueden descubrir fácilmente. Voy a decir esta verdad. Tengo experiencia en estas cuestiones de organizaciones obreras. Qué efecto tendría este artículo si en una organización obrera hay extranjeros que de hecho, aunque no figuran en la directiva, llevan la dirección, si sus proposiciones, sus opiniones, logran prevalecer en el sindicato?

En todos los sindicatos de Panamá se ha adoptado la norma de no incluir extranjeros en la directiva aunque en realidad son ellos los que dirigen los sindicatos. Los mismos sindicatos han tomado esas precauciones para evitar represalias. De manera que eso es completamente inocuo. Si el artículo se aceptara sería completamente ineficaz.

El Honorable Fábrega dice que él es partidario de toda medida atinada de justicia social, pero que no aparta su concepto de lo nacional, porque ve el peligro que para lo nacional entrañan algunas medidas. Que es preferible suspender la discusión hasta ver lo que ha pasado.

El Presidente manifiesta que no está demás averiguarlo.

Se suspende la discusión del artículo 58 para buscar la disposición cubana en relación con el último párrafo.

El Honorable de la Rosa pide se reconsidere el artículo 55 para hacer algunas observaciones generales.

Es aprobada la proposición de reconsideración del Honorable de la Rosa.

Se lee el artículo 55.

El Honorable de la Rosa propone:

"Todo individuo tiene el deber de trabajar y el derecho a obtener ocupación cuya remuneración sea suficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación, vivienda y cultura. Es obligación del Estado proveer de ocupación remunerada a quienes no puedan obtenerla y darle a todo trabajador las condiciones de una existencia decorosa".

El Honorable Fábrega opina que se deben invertir los términos y decir "el trabajo es un deber etc. Pregunta si no hay otro artículo que dice "el Estado proveerá".

El Secretario sugiere se suspenda la discusión hasta tanto se documenten mejor.

A las 6:35 p.m. el Presidente de la Comisión declara clausurada la sesión.

ACTA

de la décimoquinta sesión celebrada por la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente.

En el despacho del Secretario General se reunió la Comisión de Constitución para seguir considerando el Proyecto sometido a su estudio, siendo las cinco y quince de la tarde del día diez y siete de agosto de mil novecientos cuarenta y cinco. Contestaron a lista los comisionados Harmodio Arosemena F., que preside; Abilio Bellido, Esther Neira de Calvo, Diógenes de la Rosa, José Isaac Fábrega, Agustín Ferrari y Didacio Silvera; dejaron de asistir con excusa los comisionados Jacinto López y León y Felipe O. Pérez, y de fuera del seno de la Comisión estuvo presente el Honorable Antonio Carrillo Vargas.

1o. Se aprobó el acta de la sesión anterior.

2o. Se entró a la discusión del artículo 63, pendiente de consideración. El secretario presentó como sustitutivo, y fué aprobado el texto siguiente:

"Artículo 63.—Se establece la jurisdicción del trabajo, a la cual serán sometidos todos los conflictos sociales y del trabajo, individuales y colectivos."

La Ley establecerá las juntas o comisiones y los tribunales necesarios para este fin, y señalará el procedimiento a seguir, el que en todo caso será sumario y gratuito."

El H.C. de la Rosa presentó como adición al artículo nuevo de que es autor y que figura como último del Capítulo 2º, referente a la familia, la siguiente:

"Para hacer efectivo ante los tribunales cualquier derecho que nazca de esa condición basta su inscripción previa en la Oficina de Registro Civil, mediante información sumaria de testigos."

Esta adición fue aprobada.

El art. 64 fué aprobado textualmente y dice:

"Artículo 64.—La ley reglamentará las relaciones entre el capital y el trabajo a fin de obtener una mejor justicia social en forma que, sin inferir agravio a ninguna de las partes, asegure al trabajador un mínimo de condiciones necesarias para la vida y las garantías y recompensas que deben acordarse por razones de interés público y social, y asegure al capital la compensación justa de su intervención".

A moción del H.C. Fábrega se suspendió la consideración de los artículos 65 y 66, para tratar de ellos en el Capítulo de Hacienda Pública y Economía Nacional.

Se dispuso discutir el Capítulo referente a la Educación Nacional, previa lectura del artículo 67. Este artículo fué modificado en su primera parte por el H.C. Fábrega en la siguiente forma:

"Artículo 67.—Es deber esencial del Estado el servicio de la Educación Nacional en sus aspectos intelectual, moral y físico.

La educación primaria será obligatoria. La pública primaria y secundaria en todos sus grados serán gratuitas. La gratuidad en la enseñanza primaria implica la obligación por parte del Estado de facilitar al alumno, todos los útiles que le sean necesarios en su labor escolar".

Esta modificación fué aprobada. En cuanto se refiere a la última parte que trata del aspecto técnico de la enseñanza, quedó suspendida su discusión para continuarla cuando se decida la suerte de las disposiciones que se refieren al problema religioso; esto, a sugerencia del H.C. Silvera, quien presentó una modificación que roza ese tema.

El artículo 68 fué aprobado con la modificación que aparece más abajo introducida por el H.C. Arosemena F. a nombre del Ministro de Educación Pública y con la venia de los CC. Neira de Calvo, de la Rosa, Bellido, Fábrega y Silvera. Dice:

"Artículo 68.—Se garantiza la libertad de enseñanza. El Estado tiene la reglamentación y vigilancia de los establecimientos docentes privados con el objeto de que se cumplan en ellos los fines nacionales y sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos."

Se leyó el artículo 69 del proyecto original. El Secretario hizo presente que en su pliego de observaciones el Poder Ejecutivo pide que este artículo se niegue. Después de un cambio de opiniones entre varios comisionados se convino en aprobarlo así:

"Artículo 69.—El español es el idioma de la República. Su enseñanza sólo se puede impartir por profesores que lo tengan como propio. La de geografía e historia patrias y de educación cívica será dada por profesores nacionales.

En ningún establecimiento privado se permitirá impartir enseñanza primaria en idioma extranjero.

Los programas de enseñanza de las escuelas privadas serán los mismos de las públicas. Se puede otorgar permisos para el establecimiento de cursos especiales."

El H.C. de la Rosa hizo constar su voto negativo en lo que se refiere a que la enseñanza de la geografía e historia patrias y de la educación cívica deba ser impartida exclusivamente por profesores nacionales, porque, a su juicio, todavía el país no cuenta con el elenco de profesores propios más preparados para el ejercicio de este ministerio.

El artículo 70 fué aprobado con una adición del H.C. Fábrega y quedó por tanto así:

"Artículo 70.—El Estado legislará en el sentido de facilitar a los panameños económicamente necesitados el acceso a todos los grados de la enseñanza, tomando como base sólo la aptitud y la vocación.

Los concursos de eficiencia y las calificaciones sobresalientes serán la única condición necesaria, para que el Estado otorgue becas y auxilios económicos a los estudiantes."

El artículo 71 fué adicionado por el H.C. Silvera en el sentido de agregarle que ningún establecimiento de educación privado podrá negarse a recibir alumnos no sólo por las causas que él determina sino además por razón de la naturaleza del vínculo conyugal que una a sus progenitores. El H.C. Arosemena, separado de la presidencia, se opuso abiertamente a que se le pusiera limitaciones de clase alguna a los establecimientos privados en el escogimiento de sus pupilos. Luego de un intercambio de ideas que se efectuó entre los Convencionales Silvera, Arosemena, de la Rosa, Neira de Calvo y Fábrega el artículo fué aprobado así:

"Artículo 71.—Ningún establecimiento de educación que reciba subvención o auxilio económico del Estado puede negarse a admitir alumnos por motivos de nacimiento, del vínculo conyugal que una a sus progenitores o de diferencias raciales, sociales o religiosas."

A sugerencia del H.C. Fábrega se suspendió la discusión de los artículos 72, 73 y 74, para un mejor estudio de su contenido.

Con una modificación del H.C. de la Rosa en el sentido de sustituir la última frase de "labor proselitista" con la de "política partidaria", el artículo fué aprobado como sigue:

"Artículo 75.—La cátedra universitaria es libre. Las opiniones que en ella emitan los profesores no les acarrea responsabilidad, excepto si por este medio incitan a la subversión del orden público o si son atentatorias al régimen jurídico que establece esta Constitución o si desarrollan política partidaria."

A sugerencia del Ministro de Educación, transmitida por conducto del H.C. Arosemena F., fué eliminado el artículo 76.

La sesión fué suspendida a las ocho y cinco minutos de la noche.

El Presidente,

HARMODIO AROSEMENA F.

El Secretario,

D. H. Turner.

NARRACION DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION ENCARGADA DE ESTUDIAR EL PROYECTO DE CONSTITUCION EL DIA 17 DE AGOSTO DE 1945

(Presidencia del Honorable Convencional Dr. Harmodio Arosemena F.)

A las 5 y 15 minutos de la tarde, se reunieron los miembros de la Comisión encargada de estu-

diar el Proyecto de Constitución elaborado por los jurisperitos doctores Ricardo J. Alfaro, José D. Moscote y Eduardo Chiari.

El señor Presidente ordenó al señor Secretario pasar lista y respondieron a ella los siguientes convencionales: Harmodio Arosemena F., Abilio Bellido, Esther Neira de Calvo, Diógenes de la Rosa, José Isaac Fábrega, Agustín Ferrari y Didacio Silvera. Dejaron de asistir con excusa los Honorables Jacinto López y León y Felipe O. Pérez. Fuera del seno de la comisión asistió el Honorable Carrillo Vargas.

Fue aprobada el acta de la sesión anterior. Se leyó el artículo 63º y se aprueba.

El Honorable de la Rosa queda encargado de traer su artículo nuevo sobre los matrimonios de hecho.

Comienza la discusión del artículo 64º relativo al trabajo. El señor Secretario observa que es casi igual al de la Ley de 1941.

El Honorable de la Rosa: Yo no voy a objetar el artículo, pero me parece que es no sé si una definición o una declaración que lleva elementos de controversia o contradicción que se harán visibles cuando quieran resolverse casos concretos. Esta expresión de compensación justa es de lo más discutible. Qué se entiende por compensación justa?

Desde el punto de vista del obrero la expresión tiene un sentido y desde el punto de vista del capitalista tiene otro. El capitalista se inclina a creer que todo lo que se agrega a su capital por simple derivación de sus derechos, es justa ganancia del capital. El obrero sostiene la tesis que el capital no existiría si no fuera por el trabajo asalariado que lo valoriza. Me parece que la frase es un poco vaga.

Al señor Secretario le parece que es una declaración general y que el puesto que debe tener es en las primeras declaraciones

El Honorable Fábrega: Después de hecha la declaración es matrimonio. Se acaba el problema. Creo que la idea es buena ya que se ha dictado una serie de disposiciones a favor del obrero, entraña el sentido de que eso es sin detrimento de una ganancia para el capital, y yo le digo que en nuestro medio nosotros fatalmente, necesitamos estimular nuestra economía porque no lo tenemos, necesitamos crearla y para crear, en un régimen capitalista la economía, es necesario el incentivo de la ganancia. Se debe dar toda clase de protección al obrero, pero a la misma clase obrera le conviene que haya desarrollo económico, porque nuestro obrero está supeditado al Gobierno y la triste condición, salvo los casos especialísimos que haya mucho trabajo, que nuestro obrero es un siervo del gobierno al que tiene que obedecer en una forma única, porque de lo contrario es destituido y a todos, y a la nación, le conviene el incremento del

capital. Creo que la expresión, ni quita ni pone, es inofensiva. Advierto que no lo digo desde el punto de vista de considerar que las empresas deben ganar ni mucho ni poco; creo que debe ser a base de justicia y todo panameño debe tener los medios de vida decorosos para vivir en esta forma. Pero tenemos un problema económico que resolver; estamos en una etapa pro-colombiana en materia de economía.

El Secretario insiste en su punto de vista en que figure como artículo 1º del capítulo.

Los Convencionales Bellido y de la Rosa no están de acuerdo.

Fue aprobado el artículo 64.

Es leído el artículo 65.

El Honorable Convencional Fábrega: Me parece que se deben establecer disposiciones taxativas respecto a la economía agrícola, ganadera, etc.

El Honorable de la Rosa: Esto se ha puesto aquí porque está relacionado con el trabajo por asociación de ideas, creo prudente después de hablar del trabajo asalariado, hablar del trabajo artesano.

A sugerencia del Convencional Fábrega se pasa el artículo 65, al artículo que trata sobre economía nacional.

El Honorable Silvera quiso suprimir la palabra independiente y el Presidente le advirtió que eso se haría cuando lo discutieran.

Fue leído el artículo 66.

El Honorable Convencional de la Rosa: Yo voy a solicitar que se aplase la consideración de este artículo, que comprende varias cuestiones tan esenciales, de la mayor importancia, que merecen ser convertidas en un capítulo especial de nuestra Constitución, referente a asistencia social. Propondría que se le dedicara un capítulo especial a "asistencia y previsión social". Pienso incluir "asistencia social, salud y protección a la población campesina e indígena".

El Honorable Fábrega: Para abundar en las razones del Honorable de la Rosa. Tengo algunas disposiciones que considero sustantivas sobre salud pública e higiene que deben constar en el texto constitucional. Estoy preparándolas, mediante consulta con técnicos en la materia y considero que deben ir en un capítulo especial que posiblemente será en el mismo del honorable de la Rosa.

La Honorable Esther Neira de Calvo: Quiero ahondar en los mismos conceptos del colega Fábrega, hacer algunas sugerencias, y presentar artículos sobre problemas del campesino y del obrero, como el de la salud, problema éste muy descuidado en nuestro país, no sólo en la ciudad de Panamá, sino en todo el interior de la República. Debemos mirar con mucho interés, cómo se resuelven problemas como éste en el Interior.

El Honorable de la Rosa: Voy a proponer una cosa concreta: que la comisión delegue en doña Esther de Calvo, en el licenciado Fábrega y en mí el trabajo especial de redactar el articulado sobre asistencia social, salud y protección a la población campesina e indígena.

Fue aprobada la sugestión de la Rosa.

Se leyó el artículo 67.

El Honorable Fábrega: Tengo dos adiciones que proponer al artículo 67. Voy a presentarlas una por una, porque son separadas. (lee). La primera en el sentido que podríamos llamar de hermenéutica, se refiere a los tres ramos de la educación, pero no hay ninguna relación categórica sobre la materia. En el artículo 68 dice (lee). Incidentalmente al referirse a los establecimientos privados divide la educación, por la cual debe estar interesado el Estado, en intelectual, moral y física. Yo creo que es nuestra obligación en Panamá elevar, darle categoría, a la educación física, por muchos aspectos. Creo que el día en que nuestro Interior esté no sólo lleno de campos de juegos sino de profesores que enseñen la educación física y que impulsen a la juventud en el sentido de la educación física, habremos obtenido una gran ventaja. Los Estados Unidos, en muchos aspectos, va a la vanguardia de la cultura mundial y no se concibe la educación intelectual sin la educación física. Doña Esther Neira de Calvo podrá decir si es o no así. De tal manera que cuando hablamos de la educación es necesario elevar la educación física en el sentido de categoría trascendental en la totalidad de la educación.

El artículo, modificado por el Honorable Fábrega quedó así:

"Es deber esencial del Estado el servicio de la educación nacional en sus aspectos intelectual, moral y físico".

La Honorable Esther Neira de Calvo: Estoy también de acuerdo con la opinión del Honorable Fábrega sobre la importancia que tiene la educación física. En los Estados Unidos la consignan en los textos de educación, y en las legislaciones de los Estados. Se considera la educación física, como medio de cuidar y fomentar la salud, que es en ese país fundamento de la democracia. Es que el individuo no puede servirle al Estado sino le ofrece íntegramente el contingente de su energía física; de allí que la cultura física se considere como instrumento de la democracia. Así mismo debemos darle importancia a la educación moral, otro aspecto descuidado entre nosotros.

El Secretario dice que alguien había sugerido se pusiera la palabra "función".

Los Honorables Convencionales Fábrega, de Calvo, el Presidente, Bellido y de la Rosa no estuvieron de acuerdo con este término.

El Honorable Fábrega pide que se posponga la discusión.

La Honorable Esther Neira de Calvo: Pido la palabra señor Presidente, para hacer una pregunta en relación con el parágrafo de este artículo 67, que dice: "La gratuidad en la enseñanza secundaria no impide el establecimiento de un derecho de matrícula". Según lo que dispone este parágrafo, el derecho de matrícula es opcional. Podrá pagarse si la ley lo establece, y yo pregunto: siendo la enseñanza secundaria gratuita, el que no exista en requisito del pago de matrícula, beneficia en algo el desarrollo de la enseñanza secundaria?

De las observaciones que he hecho en mis años de trabajo como Directora de Colegios secundarios, y cuando he tenido que cumplir disposiciones sobre el pago de matrícula; y otros sobre el no pago de este derecho, deduzco que los padres de familia se sienten más responsables de la vigilancia, del trabajo de sus hijos en el Colegio, y de la cooperación que deben prestarle, cuando pagan el derecho de matrícula. Además, la educación secundaria es muy costosa: hay que darse cuenta de lo que cuesta el mantenimiento de una escuela secundaria cuando se sostiene a la altura de sus necesidades, como lo exige la educación moderna; cuestan los equipos, la edificación y el sostenimiento de los edificios, la provisión de un profesorado idóneo. No podría establecerse, por eso, el pago del derecho de matrícula, de manera obligatoria, como una cooperación del hogar al Estado?

Hay países en donde la educación secundaria no es gratuita de modo integral. Existe en ellos, una gran responsabilidad en el hogar, en favor de la educación de los hijos. Y no es esta responsabilidad una valiosa colaboración prestada al Estado, en favor del apoyo que él le da a la educación del pueblo? Y fomentar en este sentido de responsabilidad en el padre o tutor, no crea una fuerza moral muy beneficiosa para el desarrollo de la educación de las masas? Esta mínima obligación del pago de este derecho, a mi juicio, contribuiría a crear el espíritu de cooperación, de ayuda al Estado que debe existir en el hogar a favor de la escuela. Bastante es, como ya dije, proporcionar y mantener un buen edificio y un buen equipo escolares, todas las ventajas que dan instalaciones y métodos educativos modernos, beneficios que el Estado se esfuerza en brindarle hoy a los jóvenes que asisten a nuestras escuelas secundarias. Con todo, considero que el desarrollo de la educación secundaria en Panamá es aún precaria; razones económicas no permiten su intensificación. La responsabilidad que tiene el Estado de proporcionar gratuitamente a sus hijos la enseñanza primaria, le imponen ya tan fuerte obligación, que casi lo imposibilita para fomentar y mantener el desarrollo de la enseñanza con la intensidad con que debe efectuarse. Esto es penoso porque la educación secundaria debe dársele a la masa profusamente. Hace años

el hogar panameño pagaba diez balboas anuales por este derecho. Hoy sólo paga cinco balboas, a razón de dos balboas con cincuenta centésimos por semestre. Creen ustedes, colegas, que este impuesto es tan oneroso para un padre de familia? Yo creo que es la mínima cooperación que el hogar debe prestarle al Estado, y me parece que este problema debe considerarse desde un punto de vista moral y educativo, dándole importancia a la responsabilidad que debe tener el padre en el problema de la educación de sus hijos. Creo que el Estado debe tener en su solución la mayor responsabilidad, pero no debemos anular la del hogar, la que debe estimularse por todos los medios, como una necesidad de cooperación en beneficio de la causa de la educación nacional.

El Honorable de la Rosa: Yo soy partidario de que el artículo se quede como está. El establecimiento del derecho de matrícula debe ser opcional del Estado. La señora de Calvo habla de acuerdo con su experiencia de profesora. Sin embargo, soy de opinión que el hecho de que se pague la matrícula no hace al padre más ni menos consciente de la responsabilidad de educar a sus hijos. En este sentido interviene otro factor. Yo considero que el descuido de parte de los padres de familia en lo que se refiere a la enseñanza secundaria de sus hijos, se debe a mi juicio, a que cuando el muchacho sale de sexto grado, se considera que ya recibió la instrucción necesaria para cooperar al sostenimiento del hogar. Por este motivo el enviar a sus hijos a la escuela secundaria implica para el hogar, sacrificio del que debe evadirse a toda costa ya que, como dije enantes, más necesario es al hogar el aporte económico que el hijo puede significar, que el que los padres se preocupen por procurarles una enseñanza secundaria y universitaria.

Yo soy partidario de que el Estado busque el modo de hacer que el mayor número posible de estudiantes que salen de las escuelas puedan capacitarse para tomar una educación secundaria y universitaria. (lee). Esto me propongo modificarlo en el sentido de crear al Estado la responsabilidad de asegurar al mayor número posible de estudiantes, la enseñanza desde la escuela primaria a través de la secundaria hasta la universitaria. El artículo 70 me propongo modificarlo, no en esta sesión sino en la otra.

Yo soy partidario de que el artículo se deje en la forma opcional en que está; y de que hay que esforzarse por crearle al Estado más, mucho más, obligaciones en lo que se refiere a la instrucción de las clases populares.

La Honorable Sra. de Calvo: Yo respeto su opinión colega de la Rosa; y deseo aclarar mi punto de vista. Al defender el pago del derecho de matrícula, en ninguna forma he querido recomendar medios coercitivos en desfavor del desarrollo de la educación del pueblo. Creo que el Estado está en la obligación de educar a las masas

y que toda acción, todo estímulo en favor de esta obligación es poca. Yo me considero defensora y propulsora de la educación popular; mis largos años de consagración al Ramo de Educación lo comprueban. Nunca he dirigido escuelas que no sean para el pueblo panameño, escuelas del Estado. Son las hijas del pueblo las que se han beneficiado de mis esfuerzos. Es verdad que no he dirigido escuelas vacacionales, sino escuelas de la índole de la Normal y del Liceo, pero considero la existencia de estas últimas, tan necesaria como la de aquellas, para que se cumpla íntegramente la obligación del Estado en favor de la educación popular.

He querido, colegas, hacer estas afirmaciones porque creo que a las clases populares debe enseñárseles algo más que pequeñas profesiones, y que se justifican para su provecho, instituciones docentes como los Liceos. Del pueblo salen grandes líderes, notables intelectuales, y en el campo de la intelectualidad no deben crearse clases. Creo por ejemplo, que una institución como nuestro Liceo de Señoritas es tan necesaria para las hijas del pueblo, como lo es la Escuela Profesional. Aclaro pues, mi concepto sobre la obligación que tiene el Estado de educar a las masas, y la necesidad de crear para ellas toda clase de instituciones. Pero creo también en la necesidad de la cooperación que deben prestarle, todos los agentes que pueden y deben, contribuir al desarrollo de la educación popular, y entre éstos, el hogar tiene la mayor responsabilidad; creo que la contribución del derecho de matrícula no es fuerte; es una obligación que no es coercitiva, pero aceptaré la opinión al respecto.

El Honorable de la Rosa: Mis aspiraciones en materia sociológica son más amplias. Para mí lo ideal sería la obligariedad y unidad de la enseñanza que no es posible por la imposibilidad fiscal. Esta es una realidad que no se puede perder de vista. Acepto el artículo a reserva de introducirle provisiones hasta donde sea posible referentes a un subsidio para las clases desfavorecidas.

El Honorable Fábrega: Yo me he preocupado por el problema de la Universidad en su aspecto diurno, sobre todo porque es la única Universidad exclusivamente nocturna y aquí hubo una comisión que estuvo estudiando el aspecto universitario y llegó a la conclusión de que la base de nuestra Universidad debía ser diurna. Yo fui el primero en darme cuenta de la deficiencia que debe tener la Universidad. Yo voy a modificar este artículo en su primera parte. Yo anuncié dos modificaciones. Voy a presentar ésta.

La Honorable Sra. de Calvo: Entonces usted propone, Honorable de la Rosa, que el párrafo de artículo 67 sobre la gratuidad en la enseñanza secundaria, quede como está? No considera el derecho de matrícula como una cooperación del hogar al Estado, como una ayuda para lograr el desarrollo que usted desea que obtenga la educación popular?

El Honorable de la Rosa: Entiendo que el derecho de matrícula se hace para ayudar al colegio.

La Honorable Sra. de Calvo: "La matrícula entra a la Caja del Estado, creo que con esto se puede ayudar a las bibliotecas nacionales".

El Honorable Ferrari: Si mil alumnos del Instituto Nacional pagan en total B. 5.000.00, ¿no es eso una gran contribución para el presupuesto? Sería preferible que se quite el pago de matrícula.

El Honorable Silvera: Estoy de acuerdo con el Honorable Ferrari en que se suprima eso de la matrícula.

El Honorable Fábrega: Yo cuando fui Ministro, cogí B. 24.000.00 de allí y con eso hice el Gimnasio de la Profesional y el Campo de Santa Rita y compré implementos de química. En el bienio, da aproximadamente la matrícula de las escuelas secundarias, incluyendo los cursos del interior, de treinta a treinta y cinco mil baíboas.

El Honorable Ferrari: Porque el presupuesto de Educación Pública va a subir como a ocho millones de baíboas, y pagando cada alumno B. 5.00 de matrícula, ¿qué gran contribución son para el Estado B. 5.000.00 que pueden pagar mil alumnos del Instituto Nacional por ejemplo? De todas maneras en los presupuestos de Educación siempre tiene que haber partidas especiales.

El Honorable Fábrega: Por qué no llegamos a esta fórmula con las excepciones que señala la ley? Que no se bote a nadie porque no paga la matrícula.

La Honorable Sra. de Calvo: A nadie se le ha botado porque no pagara la matrícula.

El Honorable Ferrari: Yo soy partidario que sea gratuita la enseñanza secundaria también, y sin pagar derechos para libros, laboratorios, matrícula, ni nada. Por qué, ¿qué son B. 35.000.00 disponibles en el bienio? Supongamos el caso de un padre que tenga 5, 6 o más hijos en la escuela, "per cápita", ¿qué representa para el Estado? Yo no soy partidario de que se suspenda; yo propongo solamente que se suprima y que se deje la gratuidad en la enseñanza secundaria.

Se aprueba.

El Honorable Fábrega: Tengo una proposición que presentar dentro de este mismo artículo. Es para agregar, como aparte o párrafo aparte después del artículo 67, después del aparte que dice que la educación primaria será obligatoria.

El Honorable de la Rosa: Se muestra de acuerdo.

El señor Secretario lee la modificación del Honorable Fábrega.

El Honorable Silvera: Pido la palabra para modificar el aparte tercero del artículo 67, en el sentido de agregarle que la educación pública no debe ser perturbada por razones y conveniencias de índole política y le agrego: "ni religiosa" porque en la educación pública no deben intervenir ni cuestiones políticas, ni cuestiones de índole religiosa. Eso está bien que lo hagan en las escuelas privadas.

El Honorable Fábrega: Nosotros tenemos en discusión el artículo del proyecto de que se habla de la enseñanza en las escuelas privadas. Hay una moción del Honorable de la Rosa y otra del Honorable López y León sobre esa materia. Habíamos quedado de acuerdo en suspender este asunto hasta tanto estuviera presente el Honorable López y León. Estos dos artículos están tan entrelazados que quizá valdría la pena aplazar esto hasta que se discuta si es que no va a haber enseñanza religiosa de ninguna clase.

El Honorable de la Rosa: Desearía que Silvera explicara su pensamiento, porque no veo si lo que él quiere decir coincide con el mío. No veo qué relación tiene con esto.

El Honorable Silvera: Mi pensamiento es éste: que al decir el aparte 3º del artículo 67 que la ley reglamenta el servicio de la educación pública dándole un carácter esencialmente técnico, no tiene porqué intervenir en esa educación esencialmente técnica, la política ni las cuestiones religiosas.

El Honorable Harmodio Arosemena F. A mí me parece que los maestros y profesores han escogido la cátedra de la enseñanza para hacer tribuna política. La religión no ha sido tomada en ese sentido en ninguna escuela de este país. Me parece que la cuestión religiosa ha de ser tratada como otro tópico, si ustedes lo tienen a bien. Que se aplace esto.

El Honorable Silvera: Me parece que no hay que involucrar el pensamiento que tengo con respecto a la cuestión. Lo que quiero demostrar es que por razones de índole política o religiosa, lo mismo puede un profesor de religión hablar de la política de Pedro o Juan, o hablar de la religión de Cristo. De manera que si las cuestiones de índole política perturban las religiosas, también perturban las cátedras.

La Honorable señora de Calvo y el Honorable Ferrari le hallan relación.

El Honorable de la Rosa: El asunto desde luego es interesante. Una de las objeciones que yo le hago técnicamente a la enseñanza de la religión se refiere a lo que acaba de decir el Honorable Silvera. Me parece que si se va a enseñar religión, debe enseñarse religión comparada. No se comprende la religión si no se comparan las religiones.

La religión es una cosa humana que se refiere a la vida de adoración o a la vida sagrada. Se

ha comenzado a saber algo de la religión bien como vínculo, bien como dogma, cuando la ciencia, cuando la crítica, ha puesto una junto a otra a todas las religiones. Entonces se han descubierto los principios o la base esencial siempre igual que hay en el origen de todas ellas. La ciencia de la religión comienza a organizarse o hacerse una verdadera ciencia sobre todo en Alemania, cuando el budismo, el brahmanismo y el cristianismo, todas las religiones, son sometidas a un análisis comparativo. Este criterio se expresa en los grandes libros de Frazer y Reinach sobre las religiones. Si se va a enseñar en las escuelas religión, debe ser como religión comparada y no como apologetica ni como dogmática. La modificación que hace Silvera, se relaciona con lo que yo acabo de decir.

El Honorable Fábrega: Creo que ese artículo tiende a lo siguiente: desgraciadamente la política ha estado mezclada con la educación. A un Inspector de Educación Pública no se le lleva a la Inspección por el record que él tiene sino sencillamente porque es A. B. o C. o porque pertenece a tal o cual partido y esa ha sido la fundamental rémora de nuestra educación. La consideración, el premio ha sido con un criterio enteramente político casi a través de la historia de la República. Por eso pienso que si el Honorable Silvera, lo que quiere es suprimir la enseñanza de religión de la escuela que lo discuta en otro artículo; pero en lo que se refiere a la enseñanza técnica, me parece que es mejor no hacerlo.

El Honorable Harmodio Arosemena dice que si se prohíbe la enseñanza religiosa está entonces demás mencionarla en este artículo.

Queda aplazada la modificación Silvera. Se lee el artículo 68.

El señor Secretario lee una sugestión del Ministro de Educación: que se modifique el artículo así: "Se garantiza la libertad de la enseñanza. El Estado tendrá la reglamentación de los establecimientos docentes privados, etc.). Yo propongo como una modificación al artículo, quitarle "suprema inspección".

La señora de Calvo dice que ella querría modificar en el sentido de que no se diga que reglamenta, sino vigila.

El Honorable de la Rosa pide se quite el "sin embargo".

La Honorable señora de Calvo preguntó cuál era el fin de la reglamentación.

El Honorable Bellido le contesta que el Estado fijará reglas.

El Honorable de la Rosa: Tendrá el derecho a inspeccionar y a que se cumplan las disposiciones.

La Honorable Sra. de Calvo: La modificación es, que en vez de decir "la suprema inspección y vigilancia" se diga, "la reglamentación y vigilan-

cia". Yo no sé qué sentido distinto, por decir, cual es el fin del cambio, si el Estado va a fijar las reglas, por la palabra "reglamentación"?

Es que entiendo que se va a suprimir "la suprema inspección y vigilancia" y poner en vez de eso "la reglamentación y vigilancia". Me parece a mí que la palabra "inspección" es suficiente, que abarca todo lo que se dice. Que en una institución privada de cualquier índole sea el Estado el que reglamente la vida de esa institución, porque una institución docente no solo tiene el aspecto de la enseñanza misma otras actividades que se desarrollan dentro de la institución y si entonces el Estado va a reglamentar la vida de cada institución privada yo pregunto...

Interpela el Honorable de la Rosa y dice que es necesaria la reglamentación que en el sistema de enseñanza se prohíbe el castigo corporal y tiene que velar porque esta disposición se cumpla.

La señora de Calvo le contesta que ella cree que si el Estado inspecciona una institución docente, tiene autoridad para investigar qué tipo de disciplina se está cumpliendo en ese colegio.

El Honorable de la Rosa: Sí. Porque no tendría autoridad para decir: no se establezca la disciplina punitiva.

El Honorable Fábrega: Yo le pregunto a doña Esther si con eso se quiere referir a los programas. En la Salle, los programas de matemáticas son más extensos que en los de cualquier plantel oficial. Es esto con respecto a la facultad del Estado de restringir esos programas?

La Honorable señora de Calvo: Creo, como ya dije que el Estado tiene la libertad de intervenir en la labor docente, de exigir que se cumplan los programas oficiales de enseñanza, y que se escojan los mejores profesores, pero no creo que debe intervenir en aspectos como éstos; que un colegio privado tenga tales actividades estudiantiles; que recomiende a sus alumnas, tal modelo de uniforme; que cobre tal suma por derechos de enseñanza; que adopte para su internado tal reglamento. No creo pues, en la intervención del Estado en todos los detalles de la vida privada del colegio. Yo advierto, que no estoy pensando solamente en los colegios de carácter religioso. En la Escuela Panamá por ejemplo, la enseñanza es laica. También el Estado, podrá intervenir en la reglamentación de su vida? Y la reglamentación que dicte irá más allá del aspecto docente, en lo que se refiere a los programas de enseñanza, a la cantidad y calidad de la materia; si se ajustan o no, a las características de los reglamentos oficiales; si los profesores tienen o no, el título que exige el Estado? Esto es sólo un aspecto de la vida del Colegio: como yo he dicho, hay muchos más sobre los cuales no me parece que el Estado tiene derecho a legislar.

El Honorable Fábrega: Yo le pregunto, por qué no ha cogido la idea. A qué actividad, por ejemplo, se refiere?

La señora de Calvo dice que la palabra reglamentación quiere decir que ha de intervenir en los más mínimos detalles de la vida de una institución. Se refiere a los vestidos, a las corbatas, etc. Y termina manifestando que en este caso no se refiere a la religión.

El Honorable de la Rosa manifiesta que el artículo dice para fines culturales.

El Honorable Silvera: Realmente el Estado no sabe ahora mismo la orientación que se le está dando a la enseñanza en muchos colegios privados. Tampoco se da cuenta de la manera como comercian aquí ciertos colegios privados.

La Honorable Sra. de Calvo: Repito que no me opongo a que el Estado vigile el cumplimiento de los programas de enseñanza en los Colegios privados. Pienso sin embargo, en el derecho de propiedad, y me pregunto, si el Estado puede intervenir en los detalles de la vida íntima de una Institución privada. La palabra "reglamentación" le dá este derecho.

El Honorable Fábrega: Que les parece si se pone en técnica o se llega a una fórmula que incluya la intervención del Estado. No hay países de América que no deje de tener establecimientos privados que el Estado los patrocine. No se podría señalar reglamentación técnica y pedagógica.

El Honorable Bellido: Es más, entiendo yo que una niña que sale de la escuela "María Inmaculada" tiene que reconocer su diploma con un examen ante la Normal o el Liceo, así es que hay más unión entre la Escuela privada. Es un beneficio que se le hace al alumno.

El Honorable Fábrega propone que no se celebre sesión hasta el lunes para poder laborar en asocio de los Honorables de la Rosa y la señora de Calvo.

El Honorable de la Rosa: Considero que se debe aceptar la modificación del señor Ministro.

El Honorable Silvera: Aquí hay un error que yo quisiera que antes de aprobar el artículo se corrigiera. Aquí dice: "El Estado tendrá..." etc. Debe de ser "con el objeto" o con "el propósito".

El Honorable de la Rosa: Por qué no ponemos: "con el objeto de que se cumplan los fines nacionales y sociales de la cultura etc.?"

Se aprueba el artículo. Se lee el artículo 69.

El señor Secretario sugiere: "el español es el idioma oficial de la República".

El Honorable Ferrari: Señor Presidente, hay una modificación del Poder Ejecutivo.

El Honorable Arosemena: Dice "castellano", pero a eso se opuso la Real Academia Española. Sirvase darle lectura a la modificación del Poder Ejecutivo, señor Secretario.

El Honorable Fábrega observa que la modificación del Ejecutivo es en el sentido que se niegue el artículo.

El Honorable Arosemena pone en consideración la modificación del Ejecutivo y es negada.

El Honorable Fábrega propone que en la 1ª parte donde dice: "la enseñanza de la historia patria etc." se ponga "historia y geografía patria etc.". Dice que tal modificación es importante por razones bien conocidas.

El Honorable de la Rosa: Voy a manifestarme en desacuerdo con esa modificación. Yo sé el sentido de ese párrafo, pero tengo una objeción de carácter científico que hacer. No creo que la nacionalidad del individuo tiene nada que hacer con la capacidad científica del mismo. Seamos un poco modestos y humildes.

Yo he tratado de ser un estudioso de la historia y hasta ahora no he encontrado ningún libro, ningún texto de historia nacional, que me enseñe más sobre la historia nacional que textos y libros que he podido adquirir de profesores extranjeros. Nadie ha escrito aquí la historia de Vasco Núñez de Balboa como la ha escrito Anderson, nadie ha escrito aquí sobre la historia del Canal más que el comprensivo Mack, Miner y Poddelfact. No creo, por ejemplo, que nosotros tengamos para profesor de historia americana alguien más dedicado y capaz que el profesor Aguilar.

El Honorable Ferrari: Sr. de la Rosa, aquí no se dice que el texto debe ser nacional, sino que los profesores que enseñan esas materias sean panameños para que tengan más interés en la enseñanza y no corra peligro.

El Honorable Fábrega: Precisamente al respecto tengo una adición sobre las obras didácticas nacionales. Creo que si el profesor es un adaptador, es peligroso para la juventud que lleve un extranjero, por ejemplo, a decirles cuál es la génesis de su independencia. Estos profesores deben ser panameños. La Constitución cubana tiene una disposición similar.

El Honorable de la Rosa: Si ustedes me derrotan, me derrotan; pero no creo en ese nacionalismo de la historia, ni de la geografía. Creo francamente que la historia nacionalista le ha hecho mucho daño a la humanidad.

Durante 40 años los maestros de Francia se dedicaron a cultivar los sentimientos de venganza y contra ellos se produjo Anatole France y muchos otros en términos violentos.

El Honorable Fábrega le responde que en este sentido entraña la defensa de lo panameño.

El Honorable Arosemena: No sé si es verdad lo que voy a decir: pero he sido informado de que en la Escuela de los Hermanos Cristianos, en una época, se enseñó historia patria con un texto que decía entre otras cosas: "Panamá es un protectorado americano". No sé si será verdad, pero prometo traer el texto si se me permite.

El Honorable Fábrega se refiere a la gran cantidad de textos argentinos de Geografía e Historia que hay actualmente.

La Honorable señora de Calvo: Quiero, señor Presidente, agregar una experiencia. Hace tres años fui a los Estados Unidos, invitada por la "Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos" para dictar un Ciclo de conferencias sobre el tema, "Relaciones Interamericanas por un intercambio cultural", en Instituciones docentes; y ante grupos de varias organizaciones de los trece Estados que visité. Se me pidió igualmente, un informe sobre las observaciones que hiciera acerca de los motivos, que a mi juicio, fueran causa de la incomprensión del pueblo norteamericano del alma y cultura latinoamericanas. En ese informe anoté observaciones como éstas; tuve la oportunidad de leer un libro de texto de Geografía, que trata de algunos países de la América, inclusive Panamá, y me sentí indignada al ver la manera como se habla en él de nuestro país. El autor es un catedrático norteamericano bien conocido, y para ilustrar sus exposiciones usó gráficas, que al verlas, no destruí el libro porque lo necesitaba para hacer mi crítica; pero sentí profunda indignación. Incluí estas impresiones en mi informe, y en el capítulo de recomendaciones, sugerí el nombramiento de una Comisión de técnicos en educación, que se dedicara a investigar el número de estas obras, que tanto ofenden el patriotismo de los latinoamericanos, porque no dicen la realidad de sus países, y se dedican más bien a denigrar su cultura. En el caso de Panamá, se hacen en la obra citada afirmaciones que indignan. Señalé esta política de desprestigio y de ausencia de la verdad, como una de las causas por las cuales el pueblo norteamericano desconoce las realidades de la cultura de los pueblos de la América latina, la denigra y no tiene interés en conocerla. Obras como la que he citado, se usan como libros de textos en los "High Schools". Colléges y Universidades, y yo pedí que las retiraran de la circulación.

Fue aprobada la modificación Fábrega.

El Honorable de la Rosa: Pido que se haga constar mi voto negativo a la modificación Fábrega.

El Honorable Fábrega advierte que tiene una modificación para el último párrafo del artículo 69, y la lee.

El Honorable Fábrega: Si bien, es cierto que en el artículo 68 se dice: "El Estado tendrá la reglamentación etc. etc., para fines nacionales

etc." estos fines no son específicos debemos exigirlos para conseguir la incorporación del elemento antillano, se hace necesaria que las clases sean dadas en español, lo mismo en cuanto a la geografía, historia y cívica. Me refiero a una escuela italiana que no enseñaba nada de Panamá. Tenemos también el caso de las escuelas privadas de antillanos. No debemos tener diferencia de enseñanza. Debemos coadyuvar para que se enseñen otras asignaturas en el curso primario como historia, geografía y cívica.

El Honorable Arosemena: Honorable Fábrega, por qué no lo redacta en el sentido de que sea todo el programa?

El Honorable Fábrega: Deben ceñirse a nuestros programas porque hay una disgregación nacional.

La Honorable Señora de Calvo: En cierta ocasión se me solicitó un estudio confidencial, sobre las escuelas privadas extranjeras en Panamá. Esta interesante experiencia me sirvió para apreciar el valor de una escuela en la labor de propaganda a favor de filosofías y credos. En varias de ellas se enseñaba todo menos las realidades de nuestra vida nacional.

El Honorable Fábrega: En la escuela protestante en lugar de enseñar quiénes han sido nuestras figuras patrias se les enseña quien es Jefferson.

La Honorable Señora de Calvo: Deseo hacer una observación señor Presidente. Actualmente hay programas oficiales, que adolecen de defectos que no debe tener un programa cuando se ajusta a los requisitos pedagógicos modernos. Si hubiera un Colegio privado, que tuviera para determinadas asignaturas programas superiores a los oficiales, no es justo que se le permita desarticularlos?

El Honorable Fábrega dice que él se refiere a la escuela primaria.

El secretario sugiere se lleve a un párrafo especial.

El Honorable Arosemena dijo: Deben someterse a las leyes nuestras y a las leyes del país de donde vienen.

El Honorable Fábrega manifiesta que él se había graduado en la Salle, que ese colegio tiene cursos más intensos de matemáticas, pregunta si esto es conveniente o inconveniente.

El Honorable Fábrega sugiere se haga salvedad para los colegios que tienen algún curso especial.

Los Honorables de la Rosa, Silvera y Arosemena están de acuerdo en que se añada algo al respecto.

La Honorable Señora de Calvo opina que actualmente los programas oficiales son deficientes y el señor Presidente le contesta que no debemos partir de la base de que no servimos para nada.

Ha sido aprobado el artículo con la modificación del Honorable Fábrega.

La Honorable Señora de Calvo dice que deberían exceptuarse a este respecto a los colegios que enseñen alguna lengua especial. Fué aprobada la sugestión de la señora de Calvo.

Se lee el artículo 70.

El Honorable Fábrega dice que tiene una proposición que establece que sólo el mérito del estudiante le da derecho para obtener becas.

El señor Presidente le advierte que el artículo no habla de becas.

El Honorable de la Rosa dice que piensa modificar el texto para que tenga un doble objeto.

Fué leído el artículo 71.

El Honorable Silvera: "El artículo que acaba de leerse establece que ningún establecimiento de educación podrá negarse a admitir alumnos por motivos de nacimiento o por diferencias sociales, raciales, religiosas o políticas. Tengo una adición al artículo en mención y es la de que tampoco deben rechazarlos por la naturaleza del vínculo que une a sus progenitores o guardadores, que expliqué en la sesión anterior.

Con el texto de ese artículo modificado en esa forma se evita la práctica bochornosa y humillante para hijos y padres, práctica que vienen usando ciertos colegios religiosos de Panamá y lón, que consiste en cerrarle la puerta a aquellos alumnos que son de raza negra y que no son hijos de matrimonio eclesiástico, ya que los de matrimonio civil han sido excluidos sin miramiento ni respeto alguno por la ley, que desde el año de 1917 establece ese matrimonio. Con respecto a ese artículo 71 del anteproyecto de constitución, redactado por los doctores Alfaro, Chirri y Moscote se producen dichos abogados en esta forma: (lee el comentario que hacen esos Comisionados en la exposición de motivos).

El señor Presidente deja la presidencia al Honorable Silvera.

El Honorable Arosemena: Nosotros, los llamados liberales, miembros de esta comisión, estamos tratando por todos los medios a nuestro alcance, de evitar que en las escuelas públicas se enseñe determinada religión. Y esto no tiene ninguna razón en que fundarse. Yo creo que una escuela privada tiene el derecho, en un país donde hay libertad de cultos como el nuestro, de enseñar la religión que a bien tenga. Si esto es así, por qué obligar en una institución católica la enseñanza de una religión distinta a la que en ella se profesa? Y por qué a su vez, obligar a una escuela protestante a enseñar la religión católica en ella? No creen ustedes que de esto provenga el choque que tanto tratamos de evitar cuando predicamos la libertad de cultos? Yo no he alcanzado a comprender el por qué de querer obligar a una escuela privada a que acoja en su seno alumnos que no deseen. Por qué razón vamos nosotros osar hacer lo que ningún país democrático

ta ha osado hacer? En los Estados Unidos, por ejemplo, que es el país demócrata por excelencia, no ha sucedido esto jamás. Ahora: no es el caso de que se trate de blanco, rubio, negro, hijo por fuera o dentro del matrimonio. Es el caso de que un establecimiento cualquiera privado, católico o laico, pueda decir: "no lo cojo porque no me conviene" y se acabó. Por eso me opongo a la modificación Silvera y quiero que la comisión elimine esta modificación. Porque considero como algo justo cuando se trate de instituciones privadas, y nada más.

El Honorable de la Rosa: Creo que la modificación Silvera se refiere al caso preciso del Hospicio de Huérfanos. No? Entonces, por qué no se pone: "ningún establecimiento que reciba subvención del estado"?

El Honorable Arosemena: Está muy bien, Honorable de la Rosa. Así queda plenamente justificado.

La Honorable Señora de Calvo: Precisamente, cuando yo pregunté sobre el alcance de la palabra "reglamentación", deseaba saber si al aceptarla, quedaba garantizada la libertad de enseñanza como lo expresa el mismo artículo 68. Esta era mi intención al preguntar sobre esta moción del señor Ministro de Educación. De acuerdo con la exposición que acaba de hacer el señor Presidente, y con la facultad que tendrá el Estado de reglamentar la vida de los colegios privados, puede señalarle a estas instituciones condiciones para aceptar estudiantes. A esto le dá derecho la introducción de este término "reglamentación". Será éste, pues, un caso en que el Estado podrá dictarle reglamentos a las instituciones privadas. Entonces, queda el artículo 68 modificado en el sentido de que no habrá diferencia entre las instituciones del Estado y las privadas, porque el Estado podrá intervenir en cualquier momento, en cualquier aspecto de su vida. Creo que no ha quedado claramente expresada la idea de hasta donde puede el Estado intervenir en la vida privada de las instituciones que no son oficiales.

El Honorable Silvera: La mejor defensa está precisamente en la exposición de motivos y me sorprende que un hijo de don Pablo Arosemena, un liberal, Presidente de esta comisión, se produzca en los términos en que se ha producido contrariando los documentos democráticos que entrañan el argumento formidable de los Doctores Chiari, Alfaro y Moscote. (lee) No veo la razón por la cual puedan rechazarlo: sólo por razones de moralidad. Yo creo que el artículo, con la exposición de motivos está muy claro y hago constar mi voto negativo, en caso de ser derrotado en este asunto y pido que esta adición mía sea pues, un artículo más, porque yo no puedo, por ningún motivo, aceptar aquí que las Escuelas Privadas, como el Hospicio de Huérfanos no reciban a niños por ser hijos de matrimonio civil.

El Honorable Bellido: Yo como liberal no alcanzo a explicarme si nosotros después de haber aprobado que en Panamá no habrá fueros ni

privilegios y que todos somos iguales ante la Ley, aceptemos aquí de hecho que se establezcan establecimientos públicos que son instituciones comerciales porque cada alumno que va allí paga el costo de su educación y que están amparados con todos los medios que dispone el Estado para amparar a todos los panameños. Repito, no alcanzo a explicarme cómo es posible que aquí aceptemos esta clase de establecimientos. Quiero sostener mi tesis porque tengo el caso concreto de una señora casada en primeras nupcias bajo el rito católico, por ser el esposo pendenciero tuvo que apelar al divorcio y se le concedió. Esta señora casó en segundas nupcias y de ese matrimonio tuvo dos hijas y una de las hijas ha sido rechazada del colegio donde quería ingresar porque esa hija procede de un matrimonio civil y según las normas de ese colegio la madre de esa niña está de todos modos casada con aquel pendenciero. Establecimientos donde se dice que los trajes deben hacerlo determinada modista y no se le permite a una madre que los confeccione. Así se está creando una verdadera casta. Estos establecimientos imponen altas tarifas a los padres adinerados, al hombre que puede darse el lujo de pagar una escuela especial. Pero vuelvo y repito que no habrá fueros ni privilegios en Panamá y que todos somos iguales ante la Ley. Negando este artículo estamos negando la Ley.

El Honorable Arosemena: No baso mi argumentación en nada que sea discriminatorio. Yo he dicho y opino que se puede rechazar hasta a el más aristocrático de los niños de la ciudad si tal, se estima conveniente. Llevando mi argumentación más lejos de donde lo expresa el Honorable Bellido podré decir que no se puede ni tener amigos siquiera, porque habría que optar por el que el Estado desee, o indique. Pero señores, por qué obligar a una escuela privada a coger a alguien que no quiere? Me parece esto hasta falta de delicadeza.

En cuanto a mi amigo Silvera no tengo más que decirle sino que el hecho de que hombres como don Ricardo J. Alfaro, Chiari y Moscote optaran en determinada manera, no me impone a mí la obligación o el deber de pensar tal cual ellos lo hicieron; pues desde el punto de vista de mi criterio personal, ellos se equivocaron al redactar ese artículo, y nada más.

Fue puesta en discusión la modificación Silvera adicionada por de la Rosa.

El Honorable Fábrega pregunta si en las democracias clásicamente consideradas el Estado interviene.

El Honorable de la Rosa: Mi punto de vista es éste: esas escuelas son por lo general para gente que no quieren enviar a sus hijos a las escuelas públicas, sino a otras que, como dice Bellido, son escuelas de lujo. Si esas personas quieren enviar a sus hijos a esas escuelas, por qué no lo han de hacer?

El Honorable Silvera agrega a su modificación "subvención o auxilios del Estado".

El Honorable Arosemena: Por qué no le agregamos "económicos"?

Ha sido aprobado el artículo.

El Honorable Silvera: Quiero advertir que no estoy conforme y que hago constar mi voto negativo y mi protesta por la supresión del artículo en la forma en que estaba.

Fué leído el artículo 72.

El Honorable Arosemena: El Señor Ministro de Educación respetuosamente, por mi conducto, solicita de esta Comisión que se fije "del 25%" e uvez "del 23%". Lo propongo en forma de proposición.

El Honorable Fábrega dice que este había sido el porcentaje más alto en el lapso de 1926-28 y que por este motivo se tomó como base.

El Honorable Ferrari: Hay que negar una modificación de orden del Poder Ejecutivo; no quiere que se ponga porcentaje alguno; es cuestión de orden.

Fue negada la sugestión del Ejecutivo.

El Honorable Fábrega dice que le preocupa si llegan a aprobar el artículo en el orden en que están los problemas: 1º Sanidad, y, 2º Educación Nacional, y que en este caso habrá que dedicar 25% para sanidad. Que él le ha tomado cariño al artículo como está. Pide se posponga la discusión.

El Honorable Fábrega dice que en este caso, una Ley especial lo declare.

El Honorable de la Rosa: En una de las sesiones, cuando se habló de eso de los porcentajes, fui opuesto. Me parece que en situaciones de crisis, perjudica eso de los porcentajes.

El señor Secretario manifiesta que se excepción en casos de emergencia.

El Honorable Silvera: Pregunto yo una cosa: Si ponemos el 25% de las entradas no es lo mismo? No queda ese mismo porcentaje con la reducción de las entradas?

El Honorable de la Rosa: Pero justamente si hay servicio de una importancia tan enorme que causaría gravedad sobre el presupuesto de salubridad necesariamente esa suma debería reducirse. Tengo mis ideas respecto a la sensatez de eso; tengo mis dudas sobre eso, muy graves, quizá. Habría que buscar una fórmula.

El Honorable Fábrega sugiere que se deje mejor pendiente hasta el martes.

La Honorable Señora de Calvo: Deseo conocer la opinión de los Miembros de la comisión sobre la conveniencia de introducir en este capítulo de la educación, un artículo en favor del problema de la educación del adulto. Me parece que el estudio de este problema no se ha abordado aún en Panamá; el analfabetismo y otros aspectos de capacitación técnica así lo piden.

El Presidente dice que debe presentarse como artículo nuevo.

El señor Secretario alude a la educación de los indios y el Honorable Fábrega le responde que tiene preparado algo al respecto y que ha cruzado ideas con el Ministro Crespo; que queda mejor en lo relativo al campesinado.

Ha sido leído el artículo 73.

El Honorable Ferrari: Tal como está el artículo, señor Presidente, que dice que ninguna escuela privada de las que hay en Panamá, podrá expedir un sólo título; que el Estado es el único que tiene derecho a expedir títulos; entonces cómo se va a arreglar el Estado para otorgar títulos para escuelas particulares? Lo que se quiere aquí es negar los títulos. Esto, por la expedición misma, me parece muy fuerte.

Fue aprobado. El señor Secretario advierte que hay una modificación del Ministro de Educación. Se aprueba la modificación del Ministro. Se lee el párrafo.

El Honorable Ferrari: El Poder Ejecutivo había suprimido este artículo. Es solamente para los efectos del acta, para eso nada más lo dije. Es que el Poder Ejecutivo había suprimido el artículo 74 y 75 y no dice por qué.

Se lee el artículo 75.

El Honorable de la Rosa: Lo que pasa es esto: un profesor que hace la cátedra, por ejemplo, de asistencia económica y tiene una convicción socialista y critica el régimen capitalista y lo hace con vehemencia, con entusiasmo, para convencer a sus alumnos, está realizando una labor proselitista y puede perder el derecho a la cátedra? Me parece que eso es así.

He sido profesor de economía política y de sociología en el Instituto Nacional, y desde luego al exponer las teorías económico-sociológicas lo hice desde mi ángulo marxista.

El Honorable Fábrega dice que a él no le parece que en este caso estaba haciendo labor proselitista.

El Honorable de la Rosa sugiere se diga "pré-dica de política partidaria".

El Honorable Fábrega dice que dentro de la fórmula, se podía exponer su punto de vista en sociología.

El Presidente dice que depende la forma como dicte la clase.

El Secretario lee el término partidaria y dice que no existe en el diccionario "partidaria".

El Honorable Fábrega dice que la política partidaria es la que sigue un bando.

Fue aprobado el artículo modificado. Se lee el artículo 76.

El Honorable Arosemena: El Ministro de educación sugiere que se elimine el artículo 76 por-

que está en pugna con la reglamentación que fue aprobada ya.

Se elimina el artículo.

Siendo las 8 y 5 minutos de la noche el señor Presidente clausura la sesión.

A C T A

de la décimosexta sesión celebrada por la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente.

En el Despacho del Secretario General se reunió la Comisión de Constitución para proseguir el estudio del Proyecto correspondiente, siendo las cuatro y cuarenta y cinco de la tarde del día veintiuno de Agosto de mil novecientos cuarenta y cinco. Contestaron a lista los comisionados Arosemena Forte, que preside; Bellido, Neira de Calvo, de la Rosa, Fábrega, Ferrari, López y León y Silvera. De fuera del seno de la Comisión estuvieron presentes los Honorables Convencionales Ayala P. y Tejeira.

1o. Se abrió la sesión y, previa su lectura, fué aprobada el Acta de la sesión anterior.

2o. El Secretario dió cuenta de un oficio dirigido a la Asamblea Nacional Constituyente por el Rector de la Universidad Interamericana, Dr. Octavio Méndez Pereira, con la cual le remite la Resolución del Consejo General Universitario en que esta entidad propone la fórmula constitucional para la autonomía y la libertad de cátedra de la Universidad Nacional.

Se dispuso invitar para el próximo lunes, 27 de los corrientes, para considerar el contenido de este oficio y otros asuntos relacionados con la educación nacional, a los señores Ministro de Educación y Rector de la Universidad mencionada.

El H.C. Fábrega presentó, para ser adicionado como último acápite del artículo 69 del Proyecto, el siguiente:

“La Ley establecerá los incentivos adecuados a la creación de obras didácticas nacionales.

El H.C. Silvera solicitó la reconsideración del Artículo 67 con el fin de introducirle una modificación, que dejaría su texto como sigue:

“Artículo 67.—Es deber esencial del Estado el servicio de la educación nacional en sus aspectos intelectuales, moral y físico. La educación primaria es obligatoria. La primaria y secundaria públicas, en todos sus grados, son gratuitas.

Toda institución docente se considera servicio de utilidad pública y social”

Esta adición fué aprobada.

El H.C. Silvera, con la venia de la Comisión, introdujo una reforma aditiva al artículo 71, según la cual éste quedaría como sigue:

“Artículo 71.—Ningún establecimiento de educación podrá negarse a admitir alumnos por razón de la unión o del vínculo legal que haya existido o exista entre sus progenitores o guardadores.

Ningún establecimiento de educación que reciba subvención o auxilio de la nación o del municipio o de alguna de sus instituciones autónomas o semi-autónomas, podrá negarse a admitir alumnos por razón de nacimiento o de diferencias sociales, raciales o religiosas.

La violación de estos principios constituye en quien la ejecuta causal para la pérdida del derecho de enseñar.”

Con esta modificación, el artículo quedó aprobado.

La comisionada Neira de Calvo presentó el siguiente artículo nuevo, que fué aprobado:

“El Estado fomentará la cultura del pueblo y mantendrá un sistema de escuelas para adultos, dedicadas a la eliminación y prevención del analfabetismo y a la capacitación doméstica, agrícola, marítima, industrial y comercial de las clases trabajadoras.”

El H.C. Fábrega depositó en Secretaría, lo mismo que la H.C. Neira de Calvo, una serie de artículos que deberán formar parte de un capítulo especial sobre rehabilitación cultural y económica del campesino y del indio. Se ordenó sacar copia por Secretaría de esos artículos, a efecto de que puedan ser estudiados y considerados ulteriormente.

Se entró a la consideración del Título IV, que trata de los derechos políticos. Los artículos 77, 78 y 79 fueron aprobados textualmente y dicen:

“Artículo 77.—Son ciudadanos de la República todos los panameños mayores de veintiún años sin distinción de sexos”.

“Artículo 78.—La ciudadanía consiste en el derecho de elegir y de ser elegido para puestos públicos de elección popular y en la capacidad para ejercer cargos oficiales con mando y jurisdicción.”

“Artículo 79.—La ciudadanía, una vez adquirida, se pierde por las siguientes causas:

1ª Por pérdida de la nacionalidad panameña conforme a esta Constitución, y

2ª Por pena conforme a la Ley”

El artículo 80 fué aprobado con la supresión del ordinal tercero, recomendada por el Poder Ejecutivo, y quedó así:

"Artículo 80.—La ciudadanía se suspende:

1º Por sentencia judicial, en los casos que determine la Ley, y

2º Por interdicción judicial".

El artículo 82 fué sustituido por el Secretario, con la aprobación de todos los comisionados, en la forma siguiente:

"Artículo 82.—El sufragio es universal igual, directo y secreto".

El artículo 83 fué modificado por el H.C. de la Rosa y quedó aprobado así:

"Artículo 83.—Además del censo general, el Estado establecerá el censo electoral y proveerá a los ciudadanos de una cédula permanente, cuya adquisición es obligatoria y servirá de base para todas las elecciones populares y medio de identificación personal para todos los fines que así lo exijan. El Registro Civil expedirá la cédula permanente de identidad personal correspondiente a los extranjeros. La Ley regulará ampliamente esta materia".

El artículo 84 fué aprobado con la supresión de su último párrafo, recomendada por el Poder Ejecutivo y quedó como sigue:

"Artículo 84.—Todas las elecciones populares para elegir más de un candidato se efectuarán atendiendo al principio de la representación proporcional, según el método que determine la ley."

El artículo 85 fué modificado en el sentido de suprimirle la frase "destruir o cambiar la forma democrática" y reemplazarla así:

"Artículo 85.—La Ley regulará la manera de constituirse los partidos políticos sobre la base de que no es lícita la formación de ninguno de carácter racial o religioso o que tienda a destruir la forma democrática de gobierno".

Con esta modificación, el artículo fué aprobado.

La sesión terminó a las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.

El Presidente,

HARMODIO AROSEMENA F.

El Secretario,

D. H. Turner.

NARRACION DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION ENCARGADA DE ESTUDIAR EL PROYECTO DE CONSTITUCION EL DIA 21 DE AGOSTO DE 1945

(Presidencia del Honorable Convencional
Dr. Harmodio Arosemena F.)

A las 4.30 p.m., en el Despacho de la Secretaría General de la Honorable Asamblea Constituyente se reunieron los miembros de la Comisión

encargada de estudiar el Proyecto de Constitución elaborado por los juriconsultos doctores Ricardo J. Alfaro, José D. Moscote y Eduardo Chiari.

El Presidente ordenó al Secretario General pasar lista y respondieron a ella los siguientes Convencionales: Harmodio Arosemena F., Abilio Bellido, Esther Neira de Calvo, Diógenes de la Rosa, José Isaac Fábrega, Agustín Ferrari, Jacinto López y León y Didacio Silvera. Estuvieron presentes también los Honorables Homero Ayala P. y Gil Blas Tejeira.

El Secretario informa a los Honorables Convencionales acerca de un pliego que ha preparado sobre los artículos aprobados, para que lo estudien y vuelvan sobre sus pasos si es necesario.

El Honorable Fábrega: Dicho informe lo consideramos en la próxima sesión.

Se lee y se aprueba el Acta de la sesión anterior.

El señor Secretario lee una comunicación de la Universidad Interamericana en la cual solicita se le conceda autonomía.

El Honorable H. Arosemena: La Presidencia se va a permitir pasar en comisión a los Honorables Fábrega y Calvo con 48 horas de término, para que hagan el estudio respectivo.

El Honorable Fábrega: Me permito hacer una observación con relación al método. No sería más práctico que citásemos a una próxima reunión al Ministro de Educación? Estoy de acuerdo con la mayoría y quizá con todos los Convencionales aquí reunidos, en que la Universidad debe ser autónoma en todos sus aspectos, inclusive el económico. Pero, pienso yo, si decretamos inmediatamente la autonomía de la Universidad y quedando como queda dentro de esa autonomía la económica, ¿no va a resultar inmediatamente se apruebe la Constitución, esa autonomía económica parte de la otra? El Ministro de Educación, según él mismo me lo ha manifestado, tiene un proyecto de ley orgánico sobre educación pública; y pensé yo que si el Estado va a crear rentas a favor de la Universidad, si el Estado va a dar parte de sus haberes fiscales para la Universidad Nacional, no será peligroso no teniendo en cuenta el personal que rige actualmente la Universidad que es de toda confianza, pero pensando en el futuro —que en la misma Universidad se establezca el régimen que se refiera a la economía de la Universidad; pregunto: quiénes son los elementos que deben tener el control de esa economía? En las entidades de esta índole, el Estado debe saber cuál es la corporación, los elementos, la directiva, el patronato que va a cuidar de la inversión de tales fondos. Es asunto de consulta, y yo pienso si no sería oportuno citar al Ministro de Educación, enfrentarle el problema y que él nos diga

si está de acuerdo con que se declare la autonomía en la Constitución. Me parece lo más práctico.

El Honorable H. Arosemena F: Honorable Fábrega, habría algún inconveniente de parte suya en citar al Rector de la Universidad?

El Honorable Fábrega: Completamente de acuerdo señor Presidente.

El Honorable Bellido: Yo también estoy de acuerdo con que se cite al Ministro de Educación porque me parece haber leído en los periódicos que varios países americanos han contraído un compromiso con Panamá respecto a la Universidad ayudando con profesores y con dinero. Ojalá pudiera esto realizarse y no quede como en el caso del monumento a Bolívar.

El Honorable Ferrari: Señor Presidente, van a venir ambos, el Ministro de Educación y el Rector de la Universidad, o va a venir primero el Ministro

El Honorable H. Arosemena F: Quiere la Comisión que se cite al Ministro de Educación y al Rector de la Universidad para discutir sobre el tema? Señor Secretario, sírvase comunicar a esos caballeros que ha sido la política de esta comisión escuchar la voz de autorizadas personas y que se les suplica que vengan el lunes, ya que el Ministro de Educación no se encuentra en la ciudad ahora mismo.

El Honorable Fábrega: Hace unos días presenté aquí varios artículos relacionados con la seguridad, desde el punto de vista nacional, de la educación; y entre los artículos tenía escrito uno que omití por pérdida del respectivo papel en esos momentos. Forma parte del todo y creo que está perfectamente armonizado con él. Iría después de las disposiciones que hablan de la enseñanza en general, que debe ser de acuerdo con los programas oficiales.

El Sr. Secretario observa que vendría siendo como el último párrafo del artículo 69.

El Honorable Fábrega: La explicación de este artículo, puede ser sintética. Entre nosotros no tenemos obras didácticas nacionales prácticamente, salvo unas dos o tres. Tenemos textos argentinos, chilenos, de los Estados Unidos etc., pero muy pocos nacionales. En todo país del mundo existe la preocupación por textos nacionales. Yo pienso que es obligación del Estado, a medida que se está estimulando la cultura, estimular y crear las obras didácticas del país, y que se debe establecer un incentivo, de premios, de ventajas para el que produce, porque es necesario ese acicate para que se trabaje. Aquí hay elemento suficientemente preparado para la redacción de obras atemperadas no sólo a nuestra cultura, sino a nuestros programas. Ese es el objeto del artículo. No se obliga a que haya

obras nacionales. Se menciona el vehículo de creación.

Se aprueba la modificación del Honorable Fábrega.

El Honorable Silvera: Pido la reconsideración del artículo 67, que fue aprobado, con el objeto de hacer una adición a ese artículo. En la parte que dice: "Es deber del Estado el servicio de la educación nacional en sus aspectos, moral, etc." Me propongo hacerle esta adición: "Toda institución docente se considera servicio de utilidad pública y social".

El señor Secretario le contesta que la última parte quedó suspendida; que nada más se aprobó la primera parte para presentarla mejor redactada.

La Honorable Sra. de Calvo dijo: Creo que el motivo por el cual dijo usted que se había aplazado la discusión del artículo 67, es porque el honorable Silvera propuso que se le agregaran las palabras, "o religiosa", al final de su tercer párrafo, para que se leyera así: "La Ley reglamentará el servicio de la educación pública dándole un carácter esencialmente técnico, de modo que no puedan perturbarlo razones o conveniencias de índole política o religiosa." Entonces se dijo que debía aplazarse la consideración de este artículo hasta cuando se discuta el problema religioso.

El Honorable Silvera: Quiero pedir la reconsideración del artículo 71 porque en la forma en que fué modificado ese artículo en la sesión del viernes, si mal no recuerdo, hace completamente nugatoria la idea que tengo con respecto a él, y por lo menos la modificación que le hice al artículo ha quedado en otra forma. Solicito la reconsideración del artículo simplemente para ponerlo en la forma que acabo de leer, porque de la manera que ha sido aprobado únicamente se circunscribe a los colegios privados que reciben subvención del Estado, y eso no ha sido mi intención, sino que ningún establecimiento de enseñanza pueda rechazar a ningún alumno por motivo de ser hijo de matrimonio civil; ya narré un caso específico en el Hospicio de Huérfanos, que me ocurrió con un muchacho que yo llevé. Yo he querido armonizar este artículo con el concepto que el Dr. Arosemena tiene con respecto a las cuestiones raciales y podría dejarse así (lee). En la forma en que propongo la modificación sienta un principio de autoridad, si pudiera decirse el matrimonio civil es una institución del Estado y por lo tanto debe ser respetada en todas partes, tanto en los colegios oficiales como en los privados; y eso de que le digan a un niño que no lo aceptan porque es hijo de matrimonio civil, no lo debemos tolerar porque es tanto como ir en contra de lo que dice el artículo. Nosotros no debemos permitir que un colegio privado desconozca y rechace a los hijos nacidos de matrimonio civil, por encima

de la ley; no debemos tolerar eso de ninguna manera. Yo he querido especificar "las diferencias raciales, sociales, políticas y morales", porque yo no acepto que un colegio diga que no acepta un niño porque es hijo de padres casados civilmente.

Los artículos 72, 73, y 74 quedaron en preparación.

La Honorable señora de Calvo: Cuando se cerró la discusión sobre el capítulo de la educación, pedí que se me diera la oportunidad de hablar en esta reunión sobre el problema de la *Educación del adulto*, y de presentar en su favor la moción que le he entregado al señor Secretario, y que se recomienda por sí sola. El interés que he tenido en presentarla, es porque considero que en Panamá todavía no se ha estudiado este problema de manera técnica, organizada y sistemática. El Ministerio de Educación ha realizado iniciativas de valor, pero sin continuidad de acción, y han fracasado por falta de meditada organización, y tal vez de recursos económicos. Considero que la educación del adulto es parte integrante del programa de educación popular; y si tanto legislamos en favor del pueblo, es preciso darle importancia a este problema fundamental cuya solución apropiada redime las masas de la esclavitud espiritual y económica. Espero que en el artículo que he sometido a la consideración de ustedes estén comprendidos todos los aspectos del problema. Librar del analfabetismo, y darle oportunidades de educación secundaria, vocacional y superior a la clase obrera y campesina, la que por razones económicas y otras, no puede siempre recibir los beneficios de la cultura, es problema que ningún gobierno debe omitir de su plan educativo. Los municipios también deberían encontrar una fórmula para contribuir al sostenimiento de este esfuerzo educativo nacional.

El Honorable Bellido: En principio estoy de acuerdo con doña Esther Neira de Calvo. En cuanto a la contribución de los municipios tengo mis dudas. La mayor parte viven en una penuria tremenda y si no fuera por el apoyo del Estado estarían arruinados y mejor sería que ni existieran. Yo soy partidario de que sea el Estado el que asuma ese servicio y además hemos dicho que el Municipio contribuya con el 20%.

La Honorable señora de Calvo: Yo creía que la contribución del 20% en favor del desarrollo de la educación, y con la que siempre han ayudado los municipios al Estado, se había suspendido. Solicito la cooperación municipal porque considero que en la solución de este vasto problema, deben contribuir otras agencias, para que el esfuerzo en su favor sea resultado de acertada cooperación, y que no sea exclusivamente el Estado el obligado a resolverlo. La contribución municipal es también un medio para que los municipios contribuyentes, se interesen en llevar a sus comunidades, el tipo de

educación que éstas necesitan más; hay localidades en donde urge una educación agrícola y de carácter rural; otras en donde es más propicia una educación comercial, o de artes y oficios, pero siempre, con base de planes de trabajo en favor de la lucha contra el analfabetismo. En mi moción hablo de capacitación marítima. Me refiero especialmente a la que necesita el gremio de pescadores que trabaja en nuestras playas, y que está formado por gente ignorante, y con frecuencia analfabeta.

El Honorable de la Rosa: Además yo le había hecho a doña Esther la observación de que no hemos decidido sobre el régimen provincial y que era mejor dejar eso aparte.

El Honorable Ferrari solicita se sustituya la frase "clases campesinas" por "clases trabajadoras".

Se aprueba la modificación.

El Honorable López y León: No es a las escuelas privadas, sino a las que reciben subvención. Es muy distinta la situación en que se encuentran las escuelas subvencionadas. A mí me parece que queda más claro el artículo en la forma en que ha sido aprobado.

El Honorable de la Rosa: Quiero hacer otra pregunta: habiendo dicho nosotros en el artículo 25 que "todos los panameños y extranjeros son iguales ante la ley", y que por lo tanto no habrá fueros o privilegios personales ni distinciones por razón de raza, sexo o religión, lo estatuido en este precepto es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21; si este artículo establece eso, no queda implícito y dejado a la ley la penalidad o la restricción o la sanción para quien establezca esas diferencias? Aún sin que este nuevo artículo se adopte, cualquier persona puede recurrir contra quien viola aquel otro.

El señor Secretario manifiesta que el Honorable Silvera proponía que la ley estableciera sanciones a quienes desconocieran el matrimonio civil. Añade que a él le parecía que éste era asunto de aclaración; que el párrafo no determinaba si los que reciben auxilios no pueden rechazarlo.

La Honorable Sra. de Calvo presenta otro artículo nuevo.

El Honorable de la Rosa: Y luego el artículo 19 que establece que todos los nacionales panameños tienen el deber de servir a la nación conforme lo dispongan las leyes etc.

El Honorable Fábrega: Yo me permito sugerir la conveniencia de añadir a los capítulos sobre Garantías Sociales, un capítulo especial que se refiera a las colectividades campesinas e indígenas. El problema es el siguiente. Creo que las garantías sociales no deben obedecer a una estructura uniforme en tal forma que estemos obligados a copiar los mismos capítulos de Garantías Sociales que tengan las otras Consti-

tuciones. Cada país debe amoldar esas garantías a las circunstancias en que se encuentre. Si nosotros contemplamos la realidad de nuestros indígenas, nos damos cuenta de que se encuentran hoy en la misma situación de hace 40 ó 50 años y esos elementos campesinos e indígenas constituyen el 70% de la República. Creo que es obligación nuestra, mediante disposiciones sustantivas, tratar de resolver ese problema básico de nuestra vida para que constituyamos una verdadera nación, porque hasta ahora la constituimos parcialmente. He preparado un artículo que alarga la Constitución, pero que considero indispensable y que no es el producto del deseo de añadir artículos, sino el producto de un estudio concreto sobre dicho capítulo, sobre la situación del indígena y del campesinado. Mi idea es que se discuta artículo por artículo de ese capítulo, que se rechace el título, que se hagan modificaciones, variaciones, supresiones, etc. etc. Me parece práctico leer el capítulo (lee el Sr. Turner). Esas son las disposiciones que considero fundamentales de acuerdo con las adiciones o supresiones que quiere hacer la comisión, de las necesidades de nuestros campesinos e indígenas, y creo que allí se establece claramente, la obligación del Estado con respecto a ellos.

El Honorable de la Rosa manifiesta que se le podría dar el número IV, el Secretario dice que el III-A.

El Honorable Fábrega: Léase y luego ubíquese. Me parece fundamental que es establezca la obligación del Estado.

El Honorable de la Rosa dijo: Me parece muy interesante la adición que quiere hacer el licenciado Fábrega. Sin embargo, como comprende una vastedad de problemas que quizá sea necesario considerar una o dos veces, sería conveniente que sacáramos copias de esa proposición y se entregaran a cada uno de los comisionados porque quizá ese articulado necesita una labor de refactura y de ordenación y reorganización y disposición de la materia. Me parece que hay un artículo que prevee una política económica y que quizá sería más conveniente introducirlo en el capítulo sobre economía nacional. Tengo pensado dividir este Título de economía nacional y hacienda pública en dos capítulos diferentes: uno para economía nacional y otro para hacienda pública y me parece que algunas medidas de la proposición del licenciado Fábrega podrían encajar más técnicamente en el capítulo de la economía nacional. Quizá amerita un estudio más detenido y por eso yo abogaré porque se hicieran esas copias.

El Honorable Fábrega: Estoy de acuerdo con que se pasen esas copias y se estudie el plan y que se haga cualquier modificación en cualquier sentido que lo considere conveniente la comisión. Pero solicito que decida si considera o

no conveniente legislar constitucionalmente sobre la materia.

El Honorable Silvera: Pido la palabra para decir que me siento muy complacido de que sea el Honorable Fábrega el autor de esos artículos, en que se declara campeón de los intereses del campesino y defensor de los indios.

El Honorable Fábrega: Para declarar que yo en todos los problemas de la Constitución tengo una visión panorámica nacional de nuestros problemas hasta donde pueda tenerla. De manera que cuando trato del problema indígena, no es que me quiero constituir en campeón del indio o del campesino porque éste es el último en saber quién ha sido el autor de esta idea. Yo podría pronunciar discursos vacíos en los campos. Sencillamente esto es parte de la idea que tengo de lo que debe ser nuestra nación. Es la misma que tengo con respecto al panameño y al extranjero, en relación con la nacionalización del extranjero; es la misma que cuando lleguemos al capítulo de problemas políticos nacionales, me obligará a introducir reformas. Todo se refiere a una unidad, no a un campeonato.

La Honorable señora de Calvo: En la sesión anterior dije que presentaría moción sobre los problemas del indio y del campesino. Tengo unos artículos sobre el problema indígena que entregaré al señor Secretario, pero conviene aplazar su discusión para cuando se discutan los del Honorable Fábrega sobre el mismo tema. También presentaré moción sobre el problema del campesino; en ella me refiero a varios aspectos del problema, el de vivienda por ejemplo, sobre todo en lo referente a su construcción, y a la organización de la vida de hogar. Me interesa mucho lo que en este sentido haga el Estado, pero igualmente, lo que hagan otras agencias capacitadas para contribuir eficazmente a la redención de las clases campesinas.

El Sr. Presidente pide se saquen copias; y que se continúe la discusión del Capítulo IV, Artículo 77.

Se aprueba el artículo 77.

Se lee el artículo 78.

El Presidente pregunta si tal como está redactado el artículo, pueden desempeñar cargos los no ciudadanos.

El señor Secretario y el Honorable Fábrega lo informan.

Se aprueba el artículo 78.

Se lee el artículo 79.

Se aprueba el artículo 79.

El Honorable Fábrega manifiesta que hay una modificación del Ejecutivo y la lee:

Se aprueba la modificación del Ejecutivo.

Se sigue con el Capítulo 2º del Título IV, artículo 81.

Se aprueba el artículo 81.

Se lee el artículo 82.

El Honorable Arosemena H: Este voto secreto en las pasadas elecciones demostró ser un tremendo fracaso en el interior de la República, pues, la mayoría de los campesinos que no sabían leer ni escribir, no sabían siquiera ni distinguir entre un toro, un águila o un caballo. Creo que se les debe dar una oportunidad a esos pobres hombres que al entrar a un cuarto secreto a votar, no saben por quién hacerlo. Y ésto es lo que precisamente no permite esta disposición. El voto secreto da resultados en las ciudades de Panamá y Colón. Tenemos, por ejemplo, el caso de aquellos que son ciegos que es lamentable, lastimoso. Estas son observaciones que hago para cuando se legisle sobre la ley de elecciones allá abajo.

El Honorable López y León: Yo quiero hacer otra observación aquí mismo en el sentido de que en nuestras Asambleas, nosotros mismos en distintas ocasiones, hemos rehuído ir al voto secreto para pedirlo nominal. Y si nosotros así lo hacemos, qué se puede esperar de esos campesinos que ni siquiera saben leer y escribir?

El Honorable Bellido: Yo quiero decir que como principio estoy perfectamente de acuerdo con el voto secreto. Que nuestros campesinos no tengan la suficiente cultura no es culpa del principio, si no culpa de la incultura que mantenemos en ese campesinado. Yo presencié elecciones en el interior. Si el doctor Arosemena vió individuos que no podían distinguir entre un toro y un águila, hubo casos en que los mismos campesinos eran tan hábiles que cambiaban una papeleta de una casilla por otra.

El Honorable de la Rosa: Me parece que el ideal del voto es el voto abierto, el voto griego, el voto en las primeras etapas del régimen soviético en Rusia, pero eso no puede ser. El voto secreto es una defensa del individuo contra la coacción del Estado, en primer lugar y luego contra la coacción de los partidos políticos y los caciques políticos. Los defectos que el doctor Arosemena le encontró al voto secreto en las pasadas elecciones son indudablemente ciertos. Pero ese voto ciego a que él se refiere, deja acaso de ser ciego cuando el campesino va a votar por motivos que no tienen nada que hacer con su libre determinación, con su simpatía o con su ideología política. Creo que en todas las elecciones habidas en Panamá bajo el influjo de la política caciquil a que se refiere la proposición del licenciado Fábrega, han sido elecciones falsas, que no representan movimiento de opinión. Por eso, soy partidario del voto secreto porque creo que da mayor margen a la autenticidad de la elección política y, segundo, porque les imparte a los partidos políticos el deber y la necesidad de educar a sus adherentes, cosa que han descuidado, y así

gastarán menos en aguardiente, menos en sobornar y más en educación de sus militantes. Está bien que ningún partido tienda a destruir la forma democrática de un gobierno. Si yo creyera, por ejemplo, que la forma como están organizados los poderes políticos en Panamá no es todo lo democrática deseable, podría reclamar una reforma en la disposición y estructuración de esos poderes públicos, con el fin de mejorar su eficacia. Pero ello se podría considerarse como tendiente a destruir la forma democrática de gobierno.

La Honorable señora de Calvo: Precisamente con la experiencia que he tenido como mujer que mereció el privilegio de votar por primera vez en las últimas elecciones, hice un viaje de observación al interior de la República en la época pre-eleccionaria, para estudiar lo que ignoraba, y recibir lecciones que debían servirme en el cumplimiento de mis deberes y funciones de electora. Observé entonces, actitudes muy dolorosas con respecto a los métodos usados por los jefes políticos para llevar a las urnas a los campesinos, a los obreros, a los grupos de ciudadanos votantes. Era lamentable ver como se hacía uso del dinero, del licor y también de predicas engañosas, como medios de arrastrar las masas a las urnas. Si se hiciera una labor de capacitación ciudadana, de instrucción cívica organizada; si cada partido político realizara una vasta campaña educativa para ilustrar a los campesinos, a los ciudadanos votantes, sobre sus obligaciones y deberes políticos, habría una mejor efectividad en el ejercicio del voto consciente y libre. Soy partidaria del voto secreto porque creo que es el que mejor expresa los dictados de la conciencia, suprema ley que debe regir el acto del voto ciudadano. Creo por ésto que los partidos políticos deben organizar, como ya dije, una vasta campaña educativa para enseñarle al votante, cuáles son sus deberes y obligaciones, cómo deben cumplirlas, y adoptar por este medio, métodos que sean propios del hombre libre; los otros, me parecen métodos para esclavos.

El Honorable señor Presidente Dr. Arosemena interpeló a la Honorable Sra. de Calvo acerca del partido político a que está afiliada.

No perenezco, señor Presidente, a ningún partido político; soy Convencional independiente.

El señor Secretario dice que el lo modificaría así: (lee la modificación).

Se aprueba el artículo modificado.

Se lee el artículo 83.

El Secretario sugiere una modificación.

El Honorable de la Rosa advierte que si el artículo como estaba redactado no implicaba que los extranjeros no podían portar cédulas.

El señor Secretario dice que él estaba de acuerdo con que hubiera un censo y se dotara a cada ciudadano de cédula. "Sería conveniente esta-

blecer una oficina de cedulação y de censo electoral", añade.

El Honorable Fábrega manifiesta que el 70% de la población no sabe que el sufragio es obligatorio.

El señor Secretario dice que el Honorable de la Rosa aclaraba la modificación. Se lee y se aprueba.

Se lee el artículo 84.

El Honorable Ferrari: El Poder Ejecutivo no sé por qué motivo resolvió suprimir el segundo aparte, pues a mi juicio no se debe suprimir.

El Honorable de la Rosa dice que a él le parecía sobrante.

Se aprueba la supresión del Ejecutivo.

Se lee el artículo 85.

El Honorable de la Rosa: Que él era partidario de que se quitara el verbo "cambiar" que es de una vaguedad impresionante.

Se suspende.

La sesión se clausuró a las 6:35 p. m.

A C T A

de la décimoséptima sesión celebrada por la Comisión de Constitución de la Segunda Asamblea Nacional Constituyente.

En el Despacho del Secretario General se reunió la Comisión de Constitución para seguir considerando el Proyecto sometido a su estudio, siendo las cuatro y cuarenta minutos de la tarde, del día veintidós de Agosto de mil, novecientos cuarenta y cinco. Contestaron a lista los comisionados Harmodio Arosemena F. que preside; Abilio Bellido, Diógenes de la Rosa, José Isaac Fábrega, Agustín Ferrari y Didacio Silvera; dejaron de asistir con excusa los comisionados Esther Neira de Calvo y Felipe O. Pérez, y de fuera del seno de la Comisión estuvieron presente los Honorables Pacífico Ríos y Homero Ayala P.

1o. Se discutió y aprobó el acta de la sesión anterior.

2o. Luego de acordar que no hubiera sesión el viernes, veinticuatro de los corrientes, para darles oportunidad a los comisionados Neira de Calvo, Fábrega y de la Rosa para la preparación que tienen pendiente de un Capítulo sobre Asistencia y Previsión Social, que debe seguir al Capítulo que trata sobre el Trabajo, el H.C. Fábrega presentó un artículo que había ofrecido para que figure como parte del Capítulo que se refiere al Sufragio, como última parte del artículo 81. Dice:

• "Todo proceso eleccionario será libre. Quedan prohibidas las candidaturas denominadas oficiales aún cuando sean velados los

medios que se empleen para impulsarlas. Las autoridades son imparciales garantizadoras del sufragio espontáneo y no instrumentos directos o indirectos de coacción política. Se prohíbe el despojo del sueldo de los empleados públicos por medio de la llamada cuota política voluntaria.

Se erige en delito la transgresión de los principios contenidos en el presente artículo. En el Código Penal se establecerán las disposiciones pertinentes para su castigo".

Sustentó su adición el H.C. Fábrega manifestando que aunque ésta tiene un carácter genérico es necesario sentarla como principio fundamental en la Constitución, sin perjuicio de que después en la Ley se determinen los actos que constituyan delitos electorales punibles de acuerdo con las disposiciones que señala el Derecho penal común. La adición del H.C. Fábrega fué aprobada.

Se entró en la consideración del artículo 86 del Proyecto que dice:

"Artículo 86. Habrá un Jurado Nacional de Elecciones compuesto así: un miembro por cada uno de los partidos políticos nacionales legalmente organizados, cuyos adherentes no sean menos de cinco mil, designado por el mismo partido; tres miembros que actuarán como elemento imparcial y moderador y que serán: un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un profesor de derecho de la Universidad Nacional y un ciudadano particular, todos de alta reputación por la integridad y por el saber, que serán elegidos por mayoría de votos por los miembros representantes de los partidos políticos.

Será Presidente del Jurado uno de los tres miembros que constituyen el elemento imparcial y moderador, elegido por la corporación".

Después de un amplio debate en el cual tomaron parte los Convencionales Arosemena, Fábrega, de la Rosa, Bellido y Ferrari, en que unos estuvieron de acuerdo en que, además de los representantes de los partidos políticos, compusieran el Jurado Nacional de Elecciones elementos extraños a éstos, especialmente pertenecientes al Poder Judicial, y otros se oponían firmemente a que los miembros del referido órgano del Gobierno se inmiscuyeran en las ardientes lides electorales, se convino en dejar para otra sesión la consideración de todo el Capítulo referente a los órganos electorales, cuando los miembros de la comisión pactaran extra oficio una fórmula que armonice las dos tendencias.

El H.C. de la Rosa sugirió que antes de entrar en la discusión del articulado correspondiente al Capítulo 3o, que trata de los órganos electorales, se hiciese una discusión sobre ideas generales y dijo que hasta ahora el sentido que se le está dando al proyecto de constitución es el de una